

Augusto Varas

**LA DINÁMICA POLÍTICA DE LA OPOSICIÓN
DURANTE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD
POPULAR**

INDICE

Prefacio

Introducción

I. El desarrollo de una contradicción

1. Los antecedentes
2. La contradicción política

II. Las contradicciones en el seno de la Unidad Popular

1. Las divergencias estratégicas de la izquierda
2. El problema de la alianza de clases

III. La convergencia política de la oposición

1. Los problemas que la Unidad Popular resuelve a la oposición
2. Las relaciones DC-PN después de 1970

IV. El modelo autoritario

1. La fórmula política para el desarrollo económico del gran capital.
2. Las dificultades de generalizar el modelo autoritario

V. La crisis política y la ruptura institucional

1. Efectos de las elecciones parlamentarias
2. La situación del Gobierno y de la UP
3. La polarización de fuerzas y el “centro político”

VI. Anexos

1. Sergio Onofre Jarpa, “La seguridad nacional”, Discurso pronunciado en el Senado, 14 de junio, 1973
2. Partido Nacional, “El Señor Allende ha dejado de ser el Presidente constitucional de Chile”, 16 de junio, 1973
3. Declaración de dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, 13 de septiembre de 1973
4. Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, 8 de noviembre, 1973

*“El mundo sigue patas arriba.
Razón demás para ser optimista,
ya que nadie se nos adelantó”*

*“Primera comunicación de Ledesma a Sábato”.
Abaddón el Exterminador.*

PREFACIO

A fines de 1972, por encargo de Manuel Antonio Garretón, director del Centro de la Realidad Nacional (CEREN) de la Universidad Católica de Chile y de los *Cuadernos de la Realidad Nacional*, publicación trimestral del CEREN, daba las últimas revisiones a mi análisis de la dinámica política de la oposición a la Unidad Popular durante sus dos primeros años de gobierno. Dada su extensión, el texto no fue incluido en la edición de abril de 1973 y, posteriormente, la propia vorágine del período impidió definitivamente su publicación en el último número de los *Cuadernos* (Julio, 1973). La revista y el centro fueron cerrados producto de la intervención civil-militar de la universidad.

En octubre de 1973, cesado en mi cargo como director del Departamento de Sociología del Desarrollo y expulsado del Instituto de Sociología y de la UC, retomé este texto en marzo de 1974, intentando reflexionar sobre las razones del golpe militar y la naturaleza de la dictadura que asolaba el país, completando su análisis hasta el 11 de septiembre de 1973 y agregando un Prefacio en el que daba cuenta de las motivaciones políticas detrás del estudio. Dos años más tarde, en agosto de 1976, ya como profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), volví al documento, agregando comentarios analíticos que apuntaban a la gran dificultad observada en la historia del país para encontrar una institucionalidad capaz de dar cabida al conjunto de los chilenos. Esa versión fue publicada por FLACSO en octubre de 1977, como *Documento de Trabajo*¹.

A cuatro décadas del golpe militar he vuelto al texto de 1974.

A la luz del tiempo transcurrido y del amplio conjunto de valiosos análisis realizados posteriormente sobre el período 1970-1973, saltan a la vista las limitaciones de nuestro estudio.

Así fue como uno de los actores que emergería como producto de esta crisis -las Fuerzas Armadas- era una realidad tan opaca al análisis que para haber tenido un conocimiento aún superficial de ellas se requería superar no sólo la ignorancia y prejuicios colectivos a este respecto, sino que implicaba adentrarse en una tarea más que arriesgada. Esta involucraba superar las reticencias que los propios institutos castrenses tenían frente a este tipo de análisis. Estaban aún presentes los efectos del trauma Camelot², las tensiones institucionales creadas por la participación de altos mandos en

¹ <http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/1977/DT/001255.pdf>

² “En 1964, la Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército de los Estados Unidos patrocinó el Proyecto Camelot, que fue un esfuerzo de recopilación de información en el contexto de la estrategia de contrainsurgencia. Camelot fue concebido, originalmente, para tener una vasta cobertura, abarcando países en todo el mundo en desarrollo. Sin embargo, el proyecto se implementó solamente en Chile y no por mucho tiempo. Los objetivos declarados del proyecto eran ‘diseñar procedimientos para evaluar la potencialidad de que se desarrollara una guerra interna al interior de las sociedades nacionales’ e ‘identificar... aquellas acciones que un gobierno pudiese desarrollar para mitigar las condiciones favorables a ella’. Bajo el camuflaje brindado por un proyecto universitario de ciencias del comportamiento, que se ubicaba en la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales de la American University (financiada por el Ejército), Camelot era un proyecto encubierto de inteligencia. En Chile, Camelot fue presentado como una encuesta académica, escondiéndose su relación con el Pentágono”. J. Patrice McSherry, “Nuevos medios para vigilar a América Latina”, *Página 12*, 30 de octubre, 2011.

el gabinete del Presidente Allende, los insistentes llamados de las fuerzas civiles de oposición a la participación de los institutos armados en la lucha política y ciertas militarizadas concepciones políticas en el seno de algunos sectores de izquierda. Todo esto ubicaba falsamente, desde una perspectiva científico social, el análisis de las FF.AA. al interior de los problemas que decían relación con la seguridad del Estado. Estas condiciones determinaron una ausencia de análisis de los efectos que la lucha política tuvo sobre estas instituciones. No bastaba con indicar su importancia o reconocer sus posibilidades de acceder al gobierno. Era necesaria una inmersión tanto en la cosmovisión castrense como en los elementos que se articulaban en torno a una definición de lo que podría haber sido un proyecto político-institucional implementado por las FF.AA., tarea que iniciamos a fines de los setenta.

Otra importante limitación fue la falta de información y perspectiva sobre el contexto internacional y las acciones desarrolladas por los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Aun cuando en 1972 ya habían comenzado a circular públicamente informaciones al respecto³, la política encubierta estadounidense seguía siendo, por razones obvias, opaca. Dos años más tarde, en 1975, el *Informe Church*, del Senado estadounidense, las dejó en claro⁴. Con todo, las dimensiones internacionales del proceso político chileno no fueron temas suficientemente analizados desde la perspectiva de las ciencias sociales, predominando la visión político-partidaria de alineamiento con las superpotencias enfrentadas en guerra fría. Esta carencia incluso se expresó a nivel gubernamental cuando, como producto de las visitas a Moscú del Presidente Allende (diciembre 1972) y del general Carlos Prats (mayo de 1973), para sorpresa de los gobernantes, la URSS no proporcionó la ayuda requerida para estabilizar la economía chilena sometida al bloqueo de los EE.UU.

A pesar de estas limitaciones, en este documento he encontrado una rica descripción analítica de las divergencias estratégicas y complejas relaciones al interior de la Unidad Popular y sus partidos, así como las conflictivas estrategias de los principales actores en la oposición de esos años, como fueron las organizaciones empresariales, en particular la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el Partido Nacional (PN) -principal organización de derecha-, así como del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Destaca en el texto el análisis del que en ese momento llamé *modelo autoritario*, de corte corporativista, formulado por el PN y la SOFOFA, el que si bien en ese momento fue inspiración refundacional de la oposición anti UP, posteriormente fue superado por otro modelo, el *neoliberal*, diseñado por las instituciones financieras internacionales y la tecnocracia dictatorial. Este fue aplicado sin resistencias empresariales de importancia, aun cuando significó la drástica reducción de la capacidad industrial del país (manufactura, textil, vestuario y calzado)⁵ y su transformación en una de exportación de materias primas, principalmente cobre. No

También ver: Irving Louis Horowitz, "Vida y muerte del proyecto Camelot", *Transaction*, Vol. 3, Num. 1. Nov-Dic, 1965.

³ *Los Documentos Secretos de la ITT y la República de Chile*. Secretaría General de Gobierno, Edición Extraordinaria, Santiago, Editorial Quimantú, 1972.

⁴ Informe Church, *Acción Encubierta en Chile 1963-1973*. Informe del personal de la Comisión Especial para Estudiar las Operaciones del Gobierno con Respecto a Actividades de Inteligencia. 94º Congreso, primera sesión del Comité de relaciones Exteriores, Senado de Estados Unidos. 18 de diciembre, 1975. <http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html>

⁵ Ricardo Nazer, "Renovación de las élites empresariales en Chile", en: José Ossandón y Eugenio Tironi (Editores), *La empresa chilena después de Friedman*. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2013.

obstante, si bien las empresas individuales cambiaron su peso en el producto y se sumaron nuevos grupos económicos, la “centralidad global más alta de la red de directorios” siguió perteneciendo a los grupos económicos nacionales⁶.

Igualmente, me ha parecido de interés el análisis de las tensiones y convergencias entre las directivas políticas y empresariales de derecha, las cúpulas partidarias y las bases sociales cada vez más radicalizadas. El efecto que tuvo esa movilización de la sociedad civil sobre la dirigencia demócrata cristiana y la inhibición de su rol político estabilizador, aparece como importante factor en la desestabilización inconstitucional y golpe final al gobierno de Allende. En efecto, la DC, principal expresión del centro político, se vio polarizada horizontal y verticalmente. Horizontalmente, se enfrentaron las posturas ya en ese entonces llamadas progresistas con aquellas más conservadoras o de derecha, dando lugar a cambios de directivas y escisiones como la de la Izquierda Cristiana. Verticalmente, la radicalización de las bases demócratacristianas, especialmente de sus sectores medios, presionó fuertemente a sus directivas encaminándolas hacia un enfrentamiento constitucional, en un primer período, lo que derivó a un franco llamado al derrocamiento por la fuerza. La solitaria declaración contra el golpe de los 13 dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, el 13 de septiembre de 1973, y la carta del ex Presidente Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, del 8 de noviembre, 1973 -ambas incluidas en el Anexo-, ahorra comentarios. Esta experiencia lleva a reflexionar sobre el rol y capacidad del centro político en Chile para ofrecer caminos alternativos de cambio cuando el país se encuentra altamente dividido en momentos de crisis institucional y se debate ante propuestas y resistencias frente a cambios de fondo.

Como se ha dicho, “no hay mañana sin ayer”. Razón demás para revisitar, cuatro décadas más tarde, algunas de las causas que dieron lugar a la tragedia política más grave y profunda del siglo XX en el país⁷.

⁶ Erica Salvaj, “Cohesión y homogeneidad. Evolución de la red de directorios de las grandes empresas en Chile, 1969-2005”, en, *Ibíd.*

⁷ El original se ha mantenido en su forma inicial. En esta ocasión solamente se han incluido algunas ediciones y aclaraciones señalada entre corchetes [].

INTRODUCCION

“Gobierno y oposición pelean dos guerras diferentes. El Gobierno una guerra económica. La oposición una guerra política. La oposición ha ganado todas las batallas electorales de su guerra política (...) *pero no hemos logrado detener el avance económico del adversario*”.⁸

Así caracterizaba la situación política chilena, a mediados de 1972, un parlamentario de oposición. Queda claro en sus afirmaciones que producto del nuevo nivel que adoptó la lucha política en Chile a partir de Septiembre de 1970, la base económica empresarial, especialmente la del gran capital, se vio progresivamente debilitada por la acción del gobierno de la Unidad Popular. Este análisis coincidía en lo fundamental con las apreciaciones tanto del gobierno como de sus partidarios. El Gobierno avanzaba en su ofensiva estratégica a través de la aplicación de su programa, pero a medida que transcurría el tiempo perdía el apoyo de algunos sectores sociales recibiendo de esta forma múltiples derrotas en el plano táctico.

La constatación que de esta situación realizaba la oposición era más que una lúcida descripción de sus problemas. A esta altura del proceso político su análisis pretendía introducir ciertas rectificaciones políticas en el frente opositor, las que eran el requisito sin el cual no se podía pretender recuperar las posiciones económicas perdidas. El problema en ese momento no era el impedir el avance económico de la UP, más bien se trataba de recuperar posiciones en el plano económico y político o desaparecer como elemento determinante de la vida nacional. La ofensiva estratégica, o en sus palabras, la ofensiva económica de la oposición se convirtió en este período en un asunto fundamental.

Perdidos gran parte de los principales centros de manejo económico, la recuperación del gran capital pasaba por la ofensiva política que pudiera articular la oposición. Para esto, ella contaba con un instrumento realmente poderoso posible de ser utilizado a su favor, este era el Parlamento. La articulación de intereses que históricamente se había producido en las instancias parlamentarias permitía⁹ que en esas circunstancias fuese utilizada una vez más para consolidar la convergencia política y social que la oposición requería para su éxito político. Sin embargo, la mera articulación de intereses al interior del aparato estatal ya no bastaba, en la medida que los intentos de recuperación

⁸ Fernando Maturana, “La Batalla de Chile”, Informe al Consejo General del PN, *El Mercurio*, 25 de junio, 1972.

⁹ “Los lazos económicos y familiares de un senador (...) no debiera ser subestimada como una fuente de influencia en la generación de las leyes (...) es legal para un parlamentario ser director de una empresa privada o de un banco en la medida que no tenga un contrato directo con el Estado. (...) El examen de los datos indica que el 20% de todos los senadores eran directores o accionistas-directores (...) Si se agrega a esto la participación en cualquiera de las sociedades anónimas, compañías de seguros o bancos que existían a fines de 1966, el número aumenta al 27%”. Weston Agor, “The decisional role of the Senate in the Chilean political system”, *Land Tenure Publication* N° 66, 1969.

económica y política que desde allí se intentaron no habían tenido el éxito esperado¹⁰. El Paro de Octubre mostró a la oposición que era a través de una movilización de masas, como la expresada en aquella oportunidad, el único mecanismo posible para volcar la correlación de fuerzas a su favor.

En ese contexto es posible entender las afirmaciones iniciales. Los éxitos electorales no bastaban para detener la acción del Gobierno, acción realizada fundamentalmente a través de los mecanismos legales a su disposición. La correlación electoral no permitía pensar en una mayoría parlamentaria que fuera lo suficientemente poderosa para detener ese avance. Por otra parte, de lograrse esa mayoría no había seguridad que ella fuera lo suficientemente homogénea como para desarrollar con éxito una contraofensiva. Esta eventual homogeneidad sería asegurada, nuevamente, por una existencia de una amplia movilización de masas que consolidara las posiciones contradictorias al interior de la oposición, convirtiendo de esta forma su medida electoral en una expresión de masas que permitiera una efectiva recuperación política. No obstante, para desarrollar esta poderosa movilización de masas la oposición necesitaba resolver algunos problemas coyunturales, tarea difícil, puesto que ellos tenían un profundo arraigo histórico.

La agudización de la lucha política había planteado algunos problemas que las fuerzas opositoras tenían que superar para poder pasar a una ofensiva política con efectivas posibilidades de éxito. Un primer problema que debía solucionarse era la relativa desvinculación entre sus partidos –PN [*Partido Nacional*], PIR [*Partido de Izquierda Radical (1971-1973)*], DR [*Democracia Radical (1969-1973; 1983-1990)*], DC [*Democracia Cristiana*]- y las organizaciones empresariales. Estas fuerzas actuaron hasta septiembre de 1972 en forma relativamente independiente entre sí. Las condiciones de la lucha política durante los dos primeros años del gobierno de la UP, le impusieron tal conjunto de problemas a la oposición que esta se vio enfrentada y exigida a resolver desde problemas de organización del bloque PN-DC, hasta contradicciones a nivel partidario. Estos son los casos tanto de la Izquierda Cristiana y su marginación de la DC, como los problemas entre el PN y Patria y Libertad [*1971-1973*].

Igualmente, surgieron problemas y contradicciones a nivel de las relaciones entre las organizaciones empresariales y los partidos políticos. En un primer momento, quienes sufren directamente los efectos de la ofensiva de la UP son los sectores empresariales. Ellos necesitaron dar respuestas inmediatas a la acción del Gobierno de manera de evitar la bancarrota. Es así como inicialmente las respuestas que dan estas organizaciones tienen un carácter adaptativo a las condiciones políticas impuestas, pero pasado el tiempo y viendo que estas no les permitían salvar la situación, adoptan posiciones cada vez más duras que van desde el boicot a la producción [hasta el] encuentro de formas de adaptación económica que hacen imposible la aplicación de las medidas de estabilización económica propuestas por el Gobierno.

A comienzos de 1973 los problemas de la oposición se encontraban en vías de solución, posibilitándose una convergencia entre partidos y organizaciones empresariales, herramienta fundamental para su rectificación estratégico-táctica. Si bien el empresariado como clase no pudo adaptarse a la política del Gobierno e inició una guerra contando con sus propias fuerzas y recursos, en 1973 encuentra que en el plano propiamente político los partidos debían enfrentar una situación similar a la de ellos,

¹⁰ Se puede mencionar, por ejemplo, el proyecto Hamilton-Fuentealba que intentaba la devolución de aquellas empresas estatizadas a partir del 14 de octubre de 1971, o el proyecto del Senador Rafael Moreno que habría permitido la recuperación de algunos predios agrícolas expropiados.

esto es, o avanzar en cuanto a la conquista de posiciones en el plano político o encontrar una derrota de la cual sería muy difícil recuperarse en el corto o mediano plazo.

La estrecha relación entre las representaciones económicas y políticas de la Oposición, que llegaron a confundirse en momentos como el Paro de Octubre, se presenta en 1973 con una mayor nitidez observándose una clara convergencia hacia una identidad de posiciones. De esta forma se posibilita una mayor unidad táctica a la observada hasta ese momento. Al mismo tiempo que el Parlamento era fundamental para recuperar las posiciones perdidas por el empresariado, para los partidos políticos de la oposición era fundamental establecer una relación más estrecha con las representaciones empresariales. Para lograr esta vinculación era necesario resolver las contradicciones inter-partidarias en la oposición que impedían conseguir una hegemonía política en el seno del frente opositor, cuestión que a su vez dificultaba la capacidad de liderazgo político del frente empresarial. Sólo una vez superados estos problemas era posible pensar en una acción política programada y consistente y formular e implementar un modelo económico que encontrara un alto grado de consenso entre las filas opositoras. La resolución de las contradicciones políticas desde la perspectiva empresarial – vinculación empresariado-partidos políticos y hegemonía partidaria en el bloque opositor-, era la condición necesaria para intentar la instauración de un modelo político-económico que les permitiera un proceso de desarrollo económico ampliado dirigido directamente por sus representantes. Con este instrumento en sus manos, la oposición podía elegir la forma más conveniente para enfrentar al Gobierno, negociando, imponiendo sus condiciones o intentando su sustitución.

La superación de las debilidades de la oposición significaba una agudización mayor, quizás nunca vista, de la lucha política en nuestro país. Para el Gobierno y para los partidos de la Unidad Popular, esa nueva coyuntura y la nueva correlación de fuerzas que le acompañaría, exigía consolidar las posiciones ya existentes y buscar el apoyo de los sectores más vacilantes e indefinidos del país. Una derrota de la UP en esas condiciones sólo daría paso para que la oposición cristalizara definitivamente su proyecto político, el que estaba insinuado tanto en las formulaciones de las propias organizaciones empresariales como en el discurso de sus principales representantes políticos. Ese era el único y definitivo significado que entregaban las afirmaciones del presidente de una de las agrupaciones empresariales.

“Ya hemos terminado de dibujar los márgenes, aún difusos, de camino que creemos emprenderá Chile: nacionalismo revolucionario, popular y autoritario, generado por las grandes mayorías nacionales y por ello eminentemente integrador y constructivo”¹¹.

Quizás estas palabras, dichas en otras circunstancias llevarían a pensar que no eran parte de un pensamiento político, orgánico y estructurado pero, como veremos más adelante, ya configuraba un esquema político que tenía perfiles claramente definidos, así como contenidos programáticos previamente concebidos. Es por esto que tales planteamientos son reiterativos en las declaraciones de los representantes empresariales. A este respecto se insistía:

“La restauración económica de Chile parte por una reimplantación de hábitos de orden, disciplina y trabajo arduo, y nos cabe legítimamente la duda de que estos atributos sean siquiera alcanzables para el actual régimen”¹².

¹¹ Orlando Sáenz: Discurso pronunciado en la 88ª Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad de Fomento Fabril, *El Mercurio*, 19 de mayo de 1972.

¹² Orlando Sáenz: “Aplastante Fracaso Económico del Gobierno de la UP”, *El Mercurio*, 2 de septiembre de 1972.

Por estas razones la salida política que ensayaría la oposición se planteó en el contexto del proyecto político-económico que se venía gestando. Ese proyecto era el resultado de la experiencia histórica del empresariado, el que había ensayado múltiples fórmulas a través de diversos gobiernos. La experiencia del Gobierno de la UP le enseñaba que era necesario articular las fuerzas políticas opositoras en torno a su proyecto político-económico, para lo cual era necesario rectificar la línea táctico-estratégica seguida hasta ese momento.

La búsqueda de las causas de las divergencias políticas en el seno de la oposición al Gobierno de la UP, las formas como se logró la convergencia de estas fuerzas y los perfiles del modelo político-económico que la oposición articuló en ese período, son el objeto de las notas que siguen¹³.

¹³ El énfasis en tratar de analizar el proyecto político-económico que articula la oposición durante 1970-1973 se explica por la inexistencia, durante gran parte del período, de un proyecto alternativo al de la UP. El programa de Gobierno, si bien enfrentaba problemas de implementación e interpretaciones aleatorias, significaba una orientación básica que guiaba su política. A él se tenía que oponer otro proyecto que atacara, no los problemas coyunturales que iba definiendo el Gobierno, sino que apuntara a los problemas que decían relación con el desarrollo y estabilidad de los sectores empresariales y sus aliados en el campo político partidario.

EL DESARROLLO DE UNA CONTRADICCIÓN

1. Los antecedentes

Los problemas del gran capital en Chile no habían comenzado en septiembre de 1970. Por el contrario, sus principales problemas eran fenómenos recurrentes que habían sido enfrentados a través de múltiples gobiernos, pero que no habían tenido una salida definitiva lo suficientemente estable como para permitir su desarrollo ampliado.

Uno de los últimos intentos que el gran capital realizó para lograr alcanzar un nivel de desarrollo apropiado fue el apoyo inicial al proyecto político DC. Su fracaso relativo indicó, en su oportunidad, las desventajas e imposibilidades prácticas que tenía un modelo de desarrollo económico fundamentado e implementado con las propias fuerzas empresariales. Sin embargo, es posible afirmar que estos sectores no se jugaron por entero durante los seis años por la salida económica que ofrecía la *Revolución en Libertad*. Esa experiencia les enseñó que ya no debían delegar el manejo de su destino en fracciones políticas más o menos inspiradas y, por estas razones, intentaron el retorno al Gobierno a través de la candidatura de Jorge Alessandri¹⁴.

La debilidad política del gran capital tenía, por lo tanto, bases objetivas que pueden analizarse a la luz de su desarrollo y de la historia de sus contradicciones. Un primer elemento de importancia que sirve para definir el estado en que el gran capital llegó a las elecciones de 1970 era su carácter altamente concentrado y monopólico¹⁵. La articulación necesaria al aparato estatal, principal centro de acumulación, y su permanente uso como fuente de recursos, también era un riesgo que servía para describir la debilidad de este sector como alternativa posible de proporcionar un desarrollo acumulativo¹⁶. Una clase que necesitaba de este tipo de apoyo para desarrollarse era una clase intrínsecamente débil y esa debilidad se hace presente desde

¹⁴ Es importante recordar algunos comentarios que proporciona Sergio Ramos en su trabajo *Chile: Una Economía en Transición?* (Ceso-PLA, Santiago, 1972). A este respecto indica Ramos que: “Así pues, el desarrollo de la lucha entablada en la superestructura política (por ejemplo, entre el PN y la DC en Chile) que tiene un margen de autonomía que no puede dejarse de lado, más las contradicciones en la base objetiva de la ‘burguesía’ hacen enteramente comprensible esta división de ella. Aún más, si se tiene presente el carácter pluriclasista de la Democracia Cristiana, y la necesidad política, para preservar su unidad, de presentarse acentuando sus rasgos populistas reformistas (en condiciones de un fracaso ya evidente de tal política, en el pasado reciente), se amplía la explicación del rechazo de otras fracciones de la clase dominante a un tipo de alianzas como la que en 1964 posibilitó su triunfo. No cabe duda de que plantearse que ‘la burguesía se presentó dividida’ no contribuye en nada a explicar la situación”. Pág. 132.

¹⁵ “Todo (...) nos está indicando que es difícil hablar de una burguesía industrial, de una burguesía comercial, de una burguesía bancaria o financiera; en realidad nos parece más propia hablar de una burguesía monopólica que en sus centros dominantes invierte en los más diversos sectores de la economía”. Oscar Garretón, “Concentración Monopólica en Chile: Participación del Estado y de los Trabajadores en la Gestión Económica”, *Cuadernos de la Realidad Nacional* N° 7, marzo de 1971, págs. 145-146.

¹⁶ Un análisis del papel jugado por el Estado respecto a la burguesía monopólica se encuentra en Sergio Aranda y Alberto Martínez, “Estructura Económica: Algunas Características Fundamentales”, y en Víctor Brodersohn, “Sobre el Carácter Dependiente de la Burguesía Industrial”, ambos en *Chile Hoy* (Siglo XXI, Santiago, 1970). Un análisis de estas funciones en: Enrique Sierra, *Tres Ensayos de Estabilización en Chile* (Editorial Universitaria, Santiago, 1969).

sus orígenes, lo que se explica por la configuración estructural de la sociedad y economía del país, cuyo rasgo fundamental lo constituye su carácter dependiente¹⁷.

Incluso, en el contexto latinoamericano, el gran capital en Chile se caracterizó por ser uno de los grupos regionales con tasas de acumulación más bajas¹⁸. La “eterna convalecencia” del gran capital tiene, por tanto, razones objetivas que lo hacen ser especialmente sensible a la dirección que toma el proceso político chileno.

El carácter monopolístico, su dependencia económica del Estado como centro de acumulación y las dificultades para su propio desarrollo, hacen que ante la posibilidad del triunfo de la candidatura de Allende en 1964 y ante la imposibilidad de que el candidato de la derecha triunfara, el gran capital jugara sus cartas apoyando al abanderado demócratacristiano. Sin embargo, aunque este sector se juega políticamente por el proyecto demócratacristiano, pasados los primeros años de gobierno comienzan a desarrollarse importantes contradicciones entre ese sector y el gobierno de Frei producto de las limitaciones políticas objetivas que este último tenía para responder directamente tanto a los intereses del gran capital como a otras clases. En el proyecto de la DC se encontraban importantes medidas programáticas que beneficiaban a amplias masas trabajadoras a través de su política de desarrollo social. Una vez iniciadas las acciones en este terreno se produjo la superación de este programa por las propias bases, dado que él no estaba apoyado por medidas que efectivamente elevaran el nivel de vida de amplios sectores asalariados. Así el gobierno de Frei desata fuerzas en amplios sectores, especialmente en el subproletariado y el campesinado pero, al no estar acompañado este proceso por medidas económicas convergentes y coincidentes en cuanto a sus objetivos, el Gobierno se ve políticamente superado por el nuevo nivel de reivindicaciones que alcanzan los asalariados del campo y la ciudad. La salida política del gobierno de Frei fue dejar de lado el programa de desarrollo social. La contradicción que surge y se desarrolla en el Gobierno, era la imposibilidad de responder directamente sea a los intereses de los asalariados o a los del gran capital. Esta contradicción lleva al país, a partir del año 1967, a un proceso de progresivo deterioro económico.

La situación a fines de 1969 era la de una economía deteriorada y de un Gobierno políticamente débil, además de un fuerte proceso de desnacionalización de las riquezas nacionales a través de medidas como los convenios del cobre y la penetración norteamericana en el sector industrial. Comparados estos resultados con el programa de gobierno¹⁹, como la modernización de la agricultura, la conquista de los mercados externos, la expansión minera e industrial, la reforma bancaria y del sistema arancelario, el estímulo al ahorro, los sistemas de programación industrial y un nuevo sistema de tributación que permitiera tener un efecto redistributivo del ingreso, era evidente para el país la distancia entre los resultados de la gestión gubernamental y las metas anunciadas.

¹⁷ Marcelo Segall, en *su Desarrollo del Capitalismo en Chile* (Santiago, Editorial del Pacífico, 1953), indica que: “... cuando el destino de los fondos fiscales determina (la lucha política) (...) esto significa prácticamente la existencia de una debilidad intrínseca entre las esferas sociales interesadas. En otras palabras, significa la impotencia de sobrevivir por sus propios medios”, pág. 159.

¹⁸ “Incluso bajo condiciones de dominación absoluta, la burguesía chilena fue siempre incapaz de sostener una tasa de inversión suficientemente alta. Incluso dentro de los países latinoamericanos, Chile se caracterizó durante muchos decenios por mostrar una de las tasas de acumulación comparativamente más bajas”. Pedro Vuskovic, “Entrevista”, *Chile Hoy*, N° 28, pág. 29.

¹⁹ Véase: Candidatura de Eduardo Frei Montalva, *Programa de Gobierno* (Editorial del Pacífico, Santiago, 1964).

El proyecto demócratacristiano se vio frustrado en algunos aspectos. En el campo de la Reforma Agraria, además de no poder lograr una ley adecuada a sus propósitos hasta pasados tres años de asumir el gobierno²⁰, la DC no vio sus metas cumplidas de liquidar el latifundio²¹.

Igualmente fracasa en sus propósitos antiinflacionarios que desde la perspectiva de los asalariados –al no tener reajustes compensatorios adecuados- deterioran su participación en el ingreso nacional²². Desde la perspectiva de los empresarios pequeños y medianos, ese fenómeno se dio con caracteres graves que produjeron un aumento de la concentración de la propiedad en el sector industrial, disminuyendo, por ejemplo, aquellas personas dedicadas a actividades empresariales²³. Igualmente, todas las medidas contempladas que significaban poner al gran capital bajo un estricto control en sus actividades económicas tampoco resultan. Es así como, respecto a la reforma tributaria, el Gobierno no pudo articular ningún proyecto como los inicialmente pensados, llegándose a la devolución a los empresarios de los impuestos a la importación (*drawback*). Igualmente, no realiza la reforma bancaria, quedando de esta forma intacto el poder financiero. Finalmente, no puede articular un sistema de programación de actividad económica dado los costos que esta tenía para el gran capital en la medida que le imponía una disciplina y un orden que no estaba dispuesto a aceptar.

Un análisis de las causas de las insuficiencias del proyecto político-económico de la DC parte del propio análisis que sus técnicos hacían respecto al estado de la economía chilena: los factores estructurales impedían un desarrollo sostenido. Al ser incapaz de modificar correspondientemente las estructuras que frenaban el desarrollo nacional, el gobierno comprobaba sus propias afirmaciones originales²⁴.

La respuesta del gran capital no se deja esperar, y es a partir de la coyuntura del “tacnazo”²⁵ que aparece con mayor nitidez la clara diferenciación política que los

²⁰ Ley 16.640 de julio de 1967.

²¹ “Este proceso de reforma agraria, según se declaró, perseguía el propósito de crear cien mil nuevos propietarios, cifra que posteriormente se redujo a 50 mil y en más de una oportunidad ya se ha hablado de 30 mil. Lo efectivo, sin embargo, es que a fines de 1967 tales acciones no cubrían más de 6 mil familias y ya se notaba un decrecimiento de la intensidad con que se había iniciado tal acción reformista”. Enrique Sierra, *Tres Ensayos de Estabilización en Chile* (Editorial Universitaria, Santiago, 1969, pág. 120). Frei reconoce en su último Mensaje al Congreso que esta meta llegó solamente a 28 mil nuevos propietarios.

²² Ver: David Gómez, “Gobierno: Una Política económica de Fracaso en Fracaso”, en *Principios*, N° 130-131, Raúl Araya, “El Parasitismo estagna la economía Nacional”, *Principios*, N° 129, y Alberto Baltra, “Estancamiento, No ‘Despegue’”, en *PELA* N° 314.

²³ Datos del Instituto de Economía señalan una disminución de empresarios en 1964 de 2,7% a 2,4% en 1968. Estos datos representan una disminución de un 11% de personas dedicadas a actividades empresariales entre esos años.

²⁴ “En dónde está la causa del fracaso de la política de estabilización de Frei? (...) Se pretendió basar la estabilización en el apoyo de los empresarios industriales al gobierno, al mismo tiempo que, admitiendo un mayor desarrollo del sindicalismo, se quiso dividir a éste; por otra parte, en el gobierno se produjo verdadera consternación cuando se elevó el gasto público y la inversión, porque se estimó que eso significaba socialismo (...) Tampoco se puede confiar en la capacidad de las empresas privadas para elevar espontáneamente el ahorro y la inversión, en circunstancias que nunca han demostrado dinamismo en esos campos, mucho menos cuando el intento de algunas reformas y movimiento popular vigoroso amaga sus posiciones (...) Como la estabilización se quiso alcanzar con el apoyo de los industriales más que con los trabajadores, aquellos cambios tenían que ser una especie de auto-revolución que hicieran los que controlaban el poder económico-financiero del país”. “Tres años de gobierno: Fracaso o Fraude?”, *Punto Final*, Suplemento de la Edición N° 41, págs. 6-7.

²⁵ [“El martes 21 de octubre de 1969 el general Roberto Viaux se auto acuarteló en el Regimiento Tacna aduciendo reclamaciones de tipo salarial y profesional, exigió la renuncia del ministro de Defensa y del

llevará a tratar de asegurar sus posiciones a través de una candidatura presidencial propia.

Interesa ver aquí cuáles fueron los términos de las contradicciones anteriormente analizadas y cómo se fue estructurando una respuesta política por parte de los sectores empresariales afectados por el proyecto democristiano, respuesta que se dio en el período previo a la elección del 70. Serán estas contradicciones las que persistirán incluso durante los años del gobierno de la Unidad Popular, dificultando, después del 70, una respuesta política unitaria y coherente. Es por esto que la comprensión de los orígenes más inmediatos de estas contradicciones son elementos fundamentales para la comprensión de la dinámica política de la oposición durante 1970-73.

2. La Contradicción Política

Las contradicciones del gran capital con el gobierno de la DC quedaron de manifiesto en algunas situaciones críticas por las que pasó la administración demócrata cristiana. Es así como en el período previo y posterior al “tacnazo” esas contradicciones, reflejadas en los problemas entre el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, se manifestaron en los términos en los cuales esas contradicciones eran percibidas y cuáles eran las soluciones alternativas que barajaba el gran capital y sus partidos afines.

Las contradicciones entre el Partido Nacional y el Gobierno antes del “tacnazo” se venían anunciando desde principios de 1969, cuando en PN presenta un proyecto de reajuste para las Fuerzas Armadas. Ante el ruido persistente de sables —el problema de los anticipos a las FF.AA. en servicio activo, la negativa de recibirlos por parte de oficiales de Carabineros y del Ejército, la impuntualidad de Marshall para el Te Deum el 18 de Septiembre²⁶— surge la necesidad de mejorar la situación de las FF.AA. como un asunto de primera prioridad. El deterioro de la posición de consumo de las FF.AA. era evidente y a nadie se le escapaba en ese momento que uno de los responsables era el Gobierno. El proyecto presentado por el PN tiene el objeto de enfrentar a la DC a una difícil alternativa dado que el reajuste debía ser financiado a costa de amplias capas asalariadas o a costa del sector empresarial. El impasse en que se encuentra la DC hace que demore su decisión de reajustar los sueldos a los uniformados perdiendo de esta forma el control de la dinámica existente en las Fuerzas Armadas, especialmente al interior del Ejército. Es en este contexto, previo al “tacnazo”, que el presidente del PN, Onofre Jarpa, afirmaba que: “El respeto a la autoridad se pierde cuando la autoridad

Comandante en Jefe. El gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva respondió clausurando la legislatura extraordinaria y decretando el Estado de Sitio. Políticos, dirigentes sindicales, universitarios, profesionales y empresarios acudieron a La Moneda a expresar su solidaridad y apoyo al mandatario. Tras las negociaciones, Viaux entregó el control del regimiento al general Alfredo Mahn. Luego de este episodio el ministro de Defensa, Tulio Marambio y el comandante en Jefe, Sergio Castillo renunciaron. La Comandancia en Jefe fue asumida por el general René Scheneider.”

http://www.cooperativa.cl/fallecio-general-autor-del-tacnazo/prontus_notas/2005-09-05/210758.html]

²⁶ [“El mayor Arturo Marshall venía, (...) desde hacía mucho tiempo trabajando en una eventual conspiración. Los preparativos de la Parada Militar sólo le brindaron la posibilidad de aunar algunas fuerzas a esta aventura. (...) El mayor Marshall debía asistir en la mañana del 18 de septiembre (de 1969) con su unidad de presentación a rendir honores al paso de la comitiva presidencial. Al enterarse de que sus intenciones fueron descubiertas decidió en primera instancia no ir, pero sus subalternos lo convencieron, llegando con evidente retraso a cumplir con sus funciones. La prensa de la época interpretó esta acción como un desaire al primer mandatario, pero al parecer no fue así”. David Pérez Carrillo, “La fronda militar: el 11 de septiembre”, *Documento de Trabajo* 82, INAP, Universidad de Chile, Santiago, septiembre 2006].

<http://www.slideshare.net/foralliebsch/la-fronda-militar-11-sept-73>

deja de ser respetable”. El propósito evidente de la directiva Nacional era el desprestigio del Gobierno, continuando así su tarea de arrinconamiento político de este. Pero el cálculo táctico falla y es así como inmediatamente producido el “tacnazo” se identifica a estos mismos sectores como los instigadores morales del alzamiento. Es por estas razones que el Gobierno puede presentar un proyecto de reajuste a las FF.AA. que en última instancia cargaba la mano a los sectores económicos más poderosos o a los sectores de mayor nivel de consumo. Esta solución al impasse en que el PN había encajonado al gobierno no tiene intenciones “redistributivas”, sino que es más bien una respuesta que declara la guerra al opositor político del momento. Esta contradicción antagónica entre el PN y la DC será el elemento que estará marcando el desarrollo de toda la lucha electoral hasta el triunfo de la Unidad Popular y es, al mismo tiempo, el inicio de la estructuración orgánica y política de los sectores empresariales directamente afectados por la política económica del gobierno²⁷.

Es a partir de esa coyuntura que se comienzan a expresar los distintos sectores aliados de ambas fuerzas en pugna, comenzando por las declaraciones oficiales del PN. El discurso del Presidente del PN el día 1° de noviembre de 1969 enuncia algunos de los elementos que posteriormente serán recogidos y sistematizados como un discurso más orgánico que insinúa un proyecto político más global y envolvente. Frente a las acusaciones de ser los instigadores morales del “tacnazo”, Jarpa aprovecha de proporcionar algunos nuevos elementos que se integran al discurso político de la oposición. Afirmaba que el “tacnazo” fue:

“Una lección para los que propician golpes revolucionarios. Ahora comprenderán que cuando se abandona el respeto por las normas institucionales cada uno se siente autorizado para imponer por la violencia la solución que cree más conveniente; y nadie podrá dejar de reconocer, a la luz de esta experiencia, que son las Fuerzas Armadas las que con mayor facilidad podrían imponer su criterio”²⁸.

Sin explicitarlo así, el PN advierte con claridad que una salida inconstitucional tendría que ser operada a través de las Fuerzas Armadas. No hay un llamado directo a las Fuerzas Armadas para ponerse contra el Gobierno, pero todo indica que el PN intenta articular posiciones que sean acogidas positivamente al interior de ellas, aprovechando el manifiesto decrecimiento de posiciones que la DC creía mantener en ellas. El llamado a la salida inconstitucional, con pretensiones de ser apoyada por las FF.AA. o sectores de ellas, será un elemento permanente en el discurso que posteriormente articulará la oposición.

Un segundo elemento que se formula en esa misma ocasión es el intento de seguir aislando políticamente al gobierno DC de sus apoyos de masa. Así, Jarpa insistirá en que: “Quedó también en evidencia que el pueblo no respalda al Gobierno democratacristiano”, y a continuación explicita el conjunto de causas que a juicio de ellos ha llevado al Gobierno DC a esa crisis.

²⁷ Los aspectos más interesantes del proyecto presentado por el Gobierno se refieren al financiamiento del proyecto de reajuste. Estos son: impuestos extraordinarios de 50% a las utilidades extraordinarias de los bancos; recargo del 10% a las contribuciones de bienes raíces; aumento del impuesto a la compraventa en los siguientes rubros: piscos y vinos, alfombras y tapices nacionales e importados, timbres, estampillas y papel sellado; viajes al extranjero, impuesto a la renta; remesas en dólares y moneda extranjera al exterior; impuesto a sueldos superiores a veinte vitales. Este tipo de financiamiento, si bien afectaba en algunos rubros a algunos sectores modestos, estaba fundamentalmente dirigido contra la burguesía.

²⁸ Sergio O. Jarpa, “La Conspiración contra el Partido Nacional”, *El Mercurio* 2 de noviembre de 1969, pág. 45.

“... hemos criticado (a la DC) siempre por su sectarismo, sus abusos, su incapacidad, su verbalismo, y su tendencia irrefrenable a utilizar las influencias del poder para servir los intereses del partido con perjuicio de los intereses del país (...) El Partido Nacional afirma que es necesario instaurar un nuevo estilo de Gobierno. Un Gobierno que esté al servicio de todo el país y no de grupos políticos (...) En Chile existe (...) un renacer, que se expresa en la voluntad popular mayoritaria, que determinará los resultados de la próxima elección presidencial”²⁹.

El nivel en que este discurso se formula escondía los términos reales del problema al que se estaba refiriendo, dado que en ese contexto sólo podían entenderse por “abusos”, “tendencias irrefrenables a utilizar las influencias del poder”, “servicio del país”, a aquella situación de dominación política que en ese período entran en contradicción y se expresa en un claro antagonismo a nivel de la lucha partidaria. No se puede dejar de entender que “los abusos del poder en beneficio de grupos políticos” perjudican los intereses del sector representado por el PN, como tampoco se puede dejar de establecer la necesaria identidad entre “los intereses del país” y los intereses económicos amagados en estos mismos sectores.

En síntesis, el conjunto de afirmaciones que formula Jarpa con ocasión del “tacnazo” tienen especial interés, dado que son los puntos de partida para toda la construcción de una nueva fórmula política posterior a 1970; y son estos mismos elementos los que entran en fusión definitiva en 1970. Apoyo en sectores de las FF.AA., aislar a la DC, eliminar su acción económica perjudicial para los intereses de los sectores representados por el PN y finalmente ganar la conducción definitiva del empresariado. Estos son los elementos que constituyen la estrategia con la cual se comenzará a construir el PN.

La respuesta no demora en venir de las filas demócratacristianas y es Tomic quien responde cuando define el sentido de su candidatura como “anticapitalista y antiimperialista”, e insiste en uno de los elementos que mayor repulsa despertó en el gran capital, éste era la estricta planificación de sus actividades económicas, de su rentabilidad y capitalización, pero fundamentalmente la declaración de que los esfuerzos antiinflacionarios serían realizados con el apoyo de los trabajadores³⁰. Era evidente que desde la perspectiva del gran capital la planificación, el control económico, y la política estabilizadora apoyada por los trabajadores iba a ser una experiencia mucho más perjudicial para sus intereses que la *Revolución en Libertad*. El Gobierno DC estaba demasiado cercano como para creer que esas palabras eran pura demagogia y, si tenían alguna seriedad, significaba que la Democracia Cristiana terminaría, a lo mejor sin quererlo, con el gran capital.

Planteado en estos términos el conflicto, las distintas organizaciones del empresariado comienzan a pronunciarse. Es el caso de la Sociedad de Fomento Fabril, que a través de su Presidente, Pedro Menéndez, expresaba:

“Se ha producido un distanciamiento evidente entre los centros productivos y los sectores partidistas (...) en nuestro país los productores no tenemos acceso a las decisiones y cada cierto tiempo vemos cómo se nos cambian las reglas del juego (...) El desorden en que el país se desenvuelve, el enorme gasto público y *su pésima asignación*, están hoy afectando de tal manera el desarrollo industrial que no es arriesgado expresar que la economía se encuentra frente a un inminente colapso”³¹.

²⁹ Onofre Jarpa, 2 de noviembre, 1969.

³⁰ Radomiro Tomic, discurso en el Teatro Caupolicán, 6 de noviembre, 1969.

³¹ Declaración de la Sociedad de Fomento Fabril, *El Mercurio*, 16 de diciembre, 1969. Nuestro énfasis.

Insistía en esa misma oportunidad en la mala asignación de recursos, como también criticaba algunas medidas propuestas como la eliminación del *drawback*, los nuevos tributos, las reformas que debilitarían el mercado de capitales, la fijación de precios, la indemnización por años de servicio, etc. Concluye el Presidente de la SOFOFA afirmando que: “O prima la cordura o se paraliza el desarrollo de Chile”. Cordura que, a su juicio, sólo podría poner un proyecto político que contara con la participación directa de estos sectores y que formulara una política económica que les permitiera desarrollarse como no lo pudieron hacer durante la administración DC. Queda claro que para estos sectores una nueva versión de “bonapartismo a la chilena”³² significaría la derrota definitiva de sus posiciones económicas, optando de esta forma por el camino político y estratégico que ofrece en esos momentos el Partido Nacional. Es a través de la crítica a la gestión democristiana que el empresariado adhiere a los postulados básicos de una estrategia política que permita su desarrollo como clase. Implícita está la afirmación sobre la necesidad de un régimen de relaciones laborales autoritarias, en un proceso económico manejado directamente por ellos y en una política económica que reoriente los fondos fiscales y la inversión estatal hacia aquellas actividades en las cuales estos sectores podrían maximizar sus utilidades. Comienza, de esta forma, a articularse una progresiva convergencia entre las organizaciones del empresariado y los sectores políticos agrupados en torno al Partido Nacional y la candidatura [de Jorge] Alessandri.

En los mismos términos responde el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio durante el Consejo General celebrado el 17 de diciembre del mismo año. Allí, Jorge Fontaine insiste en el carácter demagógico del Gobierno y su política anti-industriales, reafirmando la necesidad de un régimen donde exista la autoridad en el terreno laboral, donde no exista una tendencia “colectivista” en el plano de la producción, y donde no exista un partido que “dispense favores y prebendas”³³.

El discurso del Presidente Frei para el Año Nuevo, a propósito del despacho de las Reformas Constitucionales, asume las críticas antes señaladas. Su énfasis, último intento de lograr una hegemonía ya irremediabilmente perdida, lo pone en elementos ideológicos que a esa altura del proceso político no podían lograr sus objetivos:

“Pareciera que toda la habilidad y el ingenio nacional estuvieran dirigidos a imaginar una ventaja a través de una ley, o privilegios que en definitiva se alcanzan sobre la base de sacrificar a algún otro grupo (...) No hay subterfugios: sólo un gran esfuerzo de solidaridad nacional para vencer los egoísmos de grupos o individuales, sólo un gran sentido de disciplina nacional permitirá el esfuerzo creador”³⁴.

Establecidas las líneas diferenciadoras entre el Gobierno y la mayor parte del empresariado, un llamado a la solidaridad nacional sólo tiene por efecto el desahucio definitivo del Gobierno DC. El año nuevo presenta así un claro perfil. Este es el conflicto declarado entre el Gobierno DC y el gran capital, el que luchará por lograr el control del Gobierno y de los aparatos administrativos factibles de ser utilizados en su propio beneficio.

³² [Definición del gobierno de un representante de una clase social atomizada, incapaz de representarse políticamente a sí misma y necesitada de protección. Carlos Marx, *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, Buenos Aires: Editorial Ateneo, 1972].

³³ Jorge Fontaine, “Cuenta al Consejo General de la Confederación de la Producción y del Comercio”, *El Mercurio*, 18 de diciembre, 1969. En el curso de las discusiones se enumeran treinta medidas de la DC, que a juicio de los asociados, perjudicaban el “normal desarrollo de la actividad productiva”.

³⁴ Eduardo Frei, “Discurso de Año Nuevo”, *El Mercurio*, 31 de diciembre, 1969.

Desde todos los sectores del empresariado se suman los aliados a la candidatura Alessandri, asumiendo irrestrictamente las críticas y planteamientos hechos por el Partido Nacional y las organizaciones empresariales. Es así como en el comentario de fin de año, Arturo Fontaine, desde la tribuna de *El Mercurio*, insistía en que en la Democracia Cristiana:

“se ha ido gestando un pensamiento comunitarista muy afín al colectivismo y que difiere de los disidentes democratacristianos en que sus sostenedores profesan una disciplinada lealtad al Gobierno (...) Inevitablemente la candidatura Tomic no podía perseverar en los planteamientos de 1964 y tiende a una revisión económica y social que hace difícil la convivencia de las fuerzas productivas en estos meses y que la opinión pública no sitúa a mucha distancia del programa de la ‘Unidad Popular’”³⁵.

Para la Unidad Popular estos hechos no pasan inadvertidos. Como lo expresaba en su informe el diputado comunista, Jorge Insunza, este pronosticaba que:

“Será una batalla áspera y difícil. La Derecha está empeñada en retomar directamente el poder en sus manos (...) En cuanto a la candidatura del señor Alessandri: él es el prototipo de su clase, representante legítimo de la oligarquía de este país y no hará ni podrá hacer nada que sea contrario a los intereses a los que está vinculado y representa”³⁶.

La respuesta de la Unidad Popular se da en la unidad de acción y conducción de la campaña con un sentido de masas que permitirá el triunfo en septiembre de 1970. Con esas direcciones tácticas la Unidad Popular fue ganado progresivamente, en una campaña caracterizada por la movilización de las masas asalariadas, cada vez más posiciones, dejando a la DC y el PN librados a la lucha por la hegemonía del eje centro-derecha para lograr el triunfo electoral.

De marzo a septiembre de 1970 la campaña pasa por diferentes momentos que sólo representan versiones de las tendencias generales que se han venido ilustrando anteriormente. Las candidaturas de Tomic y Alessandri realizan postreros esfuerzos por volcar la opinión pública a su favor y el Gobierno trata en un esfuerzo desesperado de ganarse a última hora a algunos sectores resentidos del empresariado, aliviándoles algunas cargas tributarias, dándoles facilidades de importación y aumentándoles los márgenes de utilidad vía disminución de costos³⁷. No obstante, la contradicción antagónica en el plano propiamente político está altamente desarrollada. Ejemplo de esto es el llamado que hace la Confederación de la Producción y del Comercio a sus asociados de no financiar programas periodísticos en los cuales se ataque a la empresa privada y “se socave el sistema en que se basa”³⁸. La SOFOFA se hace inmediatamente eco de estas afirmaciones estableciendo que:

“Diversos sectores políticos han intencionadamente tratado de desprestigiar en estos últimos años en forma periódica e insistente a la empresa privada. Este fenómeno (...) ha amedrentado a los inversionistas, ha desanimado al pequeño

³⁵ Arturo Fontaine, “El Tenso Año Político 1969”, *El Mercurio*, 1º enero, 1970.

³⁶ Jorge Insunza, “Informe al Comité Central del Partido Comunista”, *El Siglo*, 7 de febrero, 1970.

³⁷ Frente a la imposibilidad de aumentar precios, debido a la espiral inflacionaria que había superado los planes del Gobierno, éste opera aumentando los márgenes de utilidades vía reducción de costos. Este es el alcance del Decreto 409 del Ministerio de Hacienda que suspendía los gravámenes a la internación de materias primas, artículos a media elaboración y piezas y partes a ser utilizados en la fabricación de productos que luego se exporten.

³⁸ Circular de la Confederación de la Producción y del Comercio, 21 de abril, 1970.

empresario y ha puesto en jaque los fundamentos de nuestra estructura económica”³⁹.

En el campo económico uno de los elementos más claros que ilustran la opción del empresariado es el punto que enfatiza el Presidente de la SOFOFA:

“importantes sectores ciudadanos han preferido destinar sus ahorros a otros tipos de inversiones ajenas a la actividad productora, en consideración a una baja rentabilidad que el sector industrial ha podido brindar como consecuencia de la política del Gobierno señalada”⁴⁰.

Las causas son reiterativas: traspaso de recursos del sector privado al sector público, crecimiento de la carga tributaria, política de sueldos y salarios, régimen crediticio, política de cambios, ley de inamovilidad, y excesiva intervención estatal en la economía. El empresariado necesitaba una salida política y económica que hiciera descansar el precio del desarrollo en las masas asalariadas, pero el diagnóstico llega a destiempo, dado que ya no bastaba un proyecto político que fuera la repetición de la administración Alessandri. No bastaba con la imagen de austeridad, autoridad y disciplina. Era necesario un movimiento de masas que apoyara efectivamente un proyecto político que hiciera viable esa vía de desarrollo. Ese modelo político no lo encontrarían con Alessandri, y menos en un campo de lucha política estructurado de tal forma en que la presencia de amplias masas asalariadas tenía un peso enorme.

La derecha aún no se daba cuenta de que debía pasar a otro nivel de desarrollo político, que debía lograr la movilización hegemónica de todos sus recursos. Pero aunque se hubiera dado cuenta, las condiciones objetivas de la lucha política en ese momento no hacían viable ese tipo de rectificaciones. Es sólo con su derrota electoral y las continuas derrotas en el campo económico que, además de otros factores que se analizarán posteriormente, se alcanzan las condiciones para facilitar esta rectificación.

El gobierno Demócrata Cristiano se da cuenta de esta situación y de las alternativas que se le presentan a la derecha en el futuro. Es así como [el Presidente Frei lo] expresa en su último Mensaje al Congreso:

“Nuestro país, como todas las naciones de la tierra, tiene que escoger entre una disciplina social establecida por el consenso y la Ley o la compulsión de un estado de fuerza”⁴¹.

El gran capital y amplios sectores aliados a él aún no tenían o no podían articular una respuesta que fuera más allá del mero diagnóstico de las causas de sus desventuras. Es en este momento que se realiza un esfuerzo por parte del PN de estructurar una respuesta coherente al problema y éste se realiza a través de la elaboración de la plataforma programática llamada *La Nueva República*. En ese documento surgen algunos elementos que vienen a racionalizar y sistematizar aún más los perfiles del proyecto político del gran capital. Fuera de la reiteración de las fallas de que adolecía el modelo económico implementado por el gobierno democristiano, *La Nueva República* avanza en lo que se refiere al tipo de relaciones sociopolíticas entre trabajo y capital, especialmente en lo que se refiere a la concepción de la actividad empresarial. En este documento se enuncian algunos elementos de interés que serán retomados posteriormente por las organizaciones empresariales.

³⁹ Ibíd.

⁴⁰ Pedro Menéndez, “Discurso ante la Junta General Ordinaria de Socios”, *El Diario Ilustrado*, 26 de abril, 1970.

⁴¹ Eduardo Frei, “Mensaje al Congreso”, 21 de mayo, 1970

“la concurrencia (...) no puede subsistir, salvo que la imponga un Estado fuerte en lo político y estable en lo social (...) Los beneficiosos efectos de la sana competencia no se alcanzan a menos que concurran todos y cada uno de los siguientes requisitos: libertad para consumir (adquirir) lo que se desee; libertad para invertir y producir; libertad para contratar; y libertad de circulación de bienes y personas (...) el Estado debe salvaguardar el sistema competitivo, imponiendo las siguientes reglas: a) eliminación de la violencia como método de negociación obrero-patronal; b) Erradicación del fraude empresarial como método de obtener utilidades; c) eliminación (o eficiente control) del monopolio, con el fin de impedir el lucro ilegítimo (...); d) Estímulo de la sana competencia en las áreas en que ella aparezca incipiente o debilitada; f) Prescendencia de los grupos de presión que, tanto a nivel empresarial como a nivel sindical, esgrimen su caso particular con miras a robustecer prerrogativas ilegítimas, por temor a competir con sus iguales”⁴².

La candidatura Alessandri, en esos momentos, no hace sino repetir los elementos fundamentales establecidos en el documento citado. Pero un elemento queda lo suficientemente claro: es el hecho de que el gran capital no puede estructurar un modelo político de desarrollo con el tiempo suficiente como para lograr un movimiento de masas dinámico que le permita atraer a los sectores vacilantes de la clase media que se identificaban con el proyecto Tomic. El gran capital enfrenta dos candidaturas presidenciales y, a pesar de sus esfuerzos por atraer a aquellos grupos empresariales identificados con la candidatura Tomic, este último sólo logra la división de estos sectores proporcionando un elemento más para el triunfo de la candidatura de la Unidad Popular.

Si se pudieran resumir las contradicciones del empresariado en Chile sería posible afirmar que este necesitaba el manejo del aparato estatal y de los beneficios que implica, especialmente de aquellos centros de acumulación. La alta tasa de inversión estatal, los mecanismos que históricamente se ha dado el empresariado para estabilizarse y desarrollarse económicamente y el manejo de los flujos de capitales externos con garantía estatal, son factores que irremediamente lo empujan a obtener el poder el Estado a través del manejo del gobierno. Este claro signo de debilidad, como se anotaba anteriormente, no es del todo positivo. Si bien el empresariado logra alcanzar los beneficios de la acumulación centrada en el Estado, también se introdujo en un aparato que, por el desarrollo de la lucha política y del nivel de conquistas obreras, era un centro de redistribución de recursos. En la medida en que alcanza beneficios por su ligazón a los centros y mecanismos de acumulación, por otra parte tiene que verse constreñido necesariamente en un aparato redistributivo que ningún gobernante no directamente vinculado a ellos podía desconsiderar, a riesgo de verse enfrentado a una situación política altamente inestables. En la medida, entonces, en que accionan por delegación al interior del Estado, los empresarios se ven “cazados” en una necesaria programación y planificación de los recursos estatales que ya no responden estrictamente a la dinámica de sus negocios. La contradicción capital-trabajo se da, en estas circunstancias, también al interior del aparato estatal, donde las fuerzas obreras habían conquistado una cuota de poder suficiente como para no permitir una acción totalmente libre del empresariado en ese campo. En esos momentos y dependiendo del estado de la movilización de las fuerzas obreras, el empresariado no podía aceptar la planificación de sus actividades. Este movimiento de atracción-repulsión permanente entra en el período 1970-1973 a una fase distinta donde sus representantes intentan asumir con sus propios recursos el manejo *no compartido* del aparato de acumulación estatal. Su fracaso en 1970 no

⁴² Partido Nacional, *La Nueva República*, (Impresora Planet, Santiago, 1970).

desahucia esta meta, más que nada la posterga para el momento en que las condiciones le permitan estructurar el modelo político necesario y le permita realizarlo e implementarlo bajo su conducción hegemónica. El cambio de las condiciones políticas para el desarrollo de este proyecto durante 1970-1973 es lo que analizaremos inmediatamente.

II

LAS CONTRADICCIONES EN EL SENO DE LA UNIDAD POPULAR

Con el triunfo de la Unidad Popular en los comicios de septiembre de 1970, la lucha política en Chile entró en una nueva fase la que se caracterizó por una agudización no observada hasta ese momento. Los problemas del empresariado, que se arrastraban desde años anteriores, no desaparecieron, y por el contrario, se agudizaron de tal forma que sus posiciones en los tres años del Gobierno de la Unidad Popular se vieron seriamente dañadas.

En un primer momento -desde septiembre a noviembre de 1970-, el empresariado derrotado prueba distintas fórmulas para responder ante la evidente amenaza a sus intereses. Cada una de estas fórmulas tácticas no está exenta de contradicciones al interior de los distintos grupos que tratan de implementarla. Desde el intento de una segunda vuelta presidencial, hasta la aprobación del *Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas*, se observan contradicciones internas que le impiden a la oposición la implementación de una fórmula táctica que pueda movilizar efectivamente a todas sus fuerzas bajo una sola conducción⁴³. Esta situación se explica, obviamente, por la división existente hasta ese momento al interior de la naciente oposición, y era esperable que en los momentos inmediatamente posteriores a la derrota electoral no pudieran implementar un mecanismo de coordinación que asegurara la unidad en la acción y permitiera controlar a los sectores más afligidos que desertaban en desordenada retirada.

La respuesta que estos sectores necesitaban comenzó a estructurarse a partir de esos días, en forma muy incipiente en sus inicios, pero que progresivamente va adquiriendo mayor coherencia, recogiendo todos los elementos de análisis y crítica interna que se habían desarrollado en los años anteriores a esa derrota. Esa respuesta, además de ser producto de la progresiva convergencia de intereses y estrategias al interior del empresariado, también tiene como antecedentes, y en cierto sentido es facilitada, por los problemas que la Unidad Popular enfrenta desde los inicios de su gobierno. Aunque a partir de la elección de Allende la situación al interior del empresariado y de sus aliados se caracteriza por un proceso de francas contradicciones y rearticulaciones, las líneas estratégicas que quedan momentáneamente inservibles para dar respuesta a esa nueva coyuntura se rearmen y la oposición comienza progresivamente a aprovechar las limitaciones objetivas que tenía la Unidad Popular, de manera de recuperarse políticamente y recobrar posteriormente sus posiciones económicas perdidas.

La acción de la oposición tiene que realizarse en un campo que estaba definido en esos momentos por la iniciativa política que surgía de la Unidad Popular. Si bien los apuros del empresariado se agudizan en esa coyuntura, serán estos mismos los que estimularán

⁴³ Son conocidas las discrepancias, por ejemplo, al interior de la Democracia Cristiana respecto al *Estatuto de Garantías Constitucionales*. En esa ocasión se opusieron los votos de Juan de Dios Carmona, Patricio Aylwin y Jaime Castillo vs. Rafael Moreno, la JDC y “terceristas”. Ganó el último bloque por ochenta votos y se diferenciaba de su oponente dado que no condicionaba el apoyo a SAG a la aceptación previa del *Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas*.

una rearticulación táctico-estratégica en un primer momento para pasar posteriormente a una ofensiva política aprovechando las limitaciones que presentaba el campo de lucha definido por la Unidad Popular. En este contexto es importante, entonces, analizar los aspectos que se constituyen en los estímulos políticos de la respuesta del empresariado y sus aliados.

1. Las divergencias estratégicas de la izquierda

Visto retrospectivamente, es posible afirmar que a partir de la ratificación de la elección de Allende por el Congreso⁴⁴ se comienza a generar en el campo de la Unidad Popular una contradicción, no a nivel de sus personeros y/o partidos políticos, sino una contradicción a nivel de la estructura que la Unidad Popular le imprime al campo de lucha política. Esta contradicción se da fundamentalmente entre las posibilidades que la UP tiene de aplicar efectivamente y en forma irrestricta su Programa de Gobierno y el sistema de alianzas necesarias para llevar a cabo los cambios propuestos. Esta contradicción se especifica cuando se observa la necesidad de una política económica para realizar e implementar las tareas programáticas, y las dificultades que surgieron para llevar adelante las medidas establecidas. Este problema no era nuevo para la izquierda dado que en todos los planteamientos estratégicos estaba presente esta problemática. El problema surgió cuando, teniendo el control del gobierno, estos problemas reaparecieron dificultando la marcha de las medidas gubernamentales.

Cuando las fuerzas de la izquierda se plantearon el tema del poder en Chile, uno de los primeros problemas que surgieron fue el del sistema de alianzas que se debía estructurar para poder desarrollar un curso de cambios efectivo. Evidentemente ese proceso no estuvo exento de dificultades y de contradicciones en el seno de la izquierda. Incluso hasta poco tiempo antes de iniciarse la campaña de la Unidad Popular y de constituirse esa amplia coalición partidaria, surgieron problemas que se expresaron en diferentes posiciones frente al proceso político chileno. Es así como el problema de los Frentes Populares fue reactualizado como la forma de sintetizar una polémica que se centraba en el problema de qué clases y en qué condiciones, esto es bajo la hegemonía de qué clase, se debía estructurar la alianza para lograr el ascenso al poder. En esa polémica, y antes de entrar a una breve síntesis de las diferentes posiciones que allí se barajaban, se reconocía implícitamente que las fuerzas con que contaba la clase obrera no eran suficientes como para lograr por sí sola el control del gobierno e impulsar sus medidas programáticas. Desde el programa del Partido Comunista de 1956, en el que se formulaba la tesis del *Gobierno Democrático de Liberación Nacional*, hasta la fórmula de la Unidad Popular, múltiples alternativas se barajaron tanto al interior de los partidos como entre los propios partidos de la izquierda chilena. Sintéticamente se podrían identificar dos tesis polares en este campo de problemas. La primera se sintetiza bajo el rótulo de *Frente de Trabajadores* formulada por el Partido Socialista en su XXII Congreso General Ordinario en noviembre de 1967 [en Chillán]. Allí se expresaba que:

“3. Las fórmulas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”.

⁴⁴ [Salvador Allende obtuvo sólo un tercio de la votación (36,6%), Jorge Alessandri logró un 35,3% y Radomiro Tomic un 28,1%. De acuerdo con la Constitución vigente, el Congreso debía elegir de entre las dos primeras mayorías relativas, siendo Allende confirmado Presidente, el 27 de octubre, con 153 votos a favor].

Consecuentemente, las alianzas que el partido estableciera sólo se justificaban en la medida en que contribuían a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados.

La política del *Frente de Trabajadores* propugnaba la unidad de acción del proletariado, campesinos y clases medias pobres, bajo la dirección del primero:

“Postulamos la independencia de clase del Frente de Trabajadores, considerando que la burguesía nacional es aliada del imperialismo y de hecho es su instrumento; por lo tanto ha terminado por ser irreversiblemente contrarrevolucionaria. La alianza y compromisos permanentes con ella, ha traído sólo derrotas y postergaciones en el campo de los explotados”⁴⁵.

Esta fórmula estratégica estableció la necesaria relación entre el sistema de alianzas, el problema de la hegemonía obrera y el de las vías para alcanzar el poder. Era coherente, dentro del planteamiento del PS, que optar por la vía armada de acceso al gobierno restringía inmediatamente el campo y la amplitud de la alianza. La subordinación del sistema de alianzas al problema de las vías de acceso al poder dejaba al PS en esos momentos sin posibilidades objetivas de plantearse como alternativa de poder. Estos planteamientos evolucionaron hasta formalizarse en la tesis del *Frente Revolucionario*, tesis que el PS presentó como fórmula alternativa a la propuesta por el Partido Comunista para la constitución de la Unidad Popular. Esta línea estratégica y de alianzas se tradujo en definitiva en la negativa socialista para integrarse a una coalición partidaria en la cual existieran representantes del empresariado mediano y pequeño, específicamente el Partido Radical. A esta fórmula, y desde fuera de la mesa de las conversaciones de la Unidad Popular, se planteó el MIR, insistiendo en su rechazo a los partidos socialdemócratas y “no violentistas”, agregando la crítica a las posiciones al interior de la Unidad Popular que no desarrollaron una conducta solidaria con la persecución sufrida por ellos durante la administración democristiana⁴⁶.

En ese contexto el Partido Comunista realizó cambios de énfasis en su programa, lo que permitió dar paso a la superación de los problemas que planteaba una línea estratégica fundamentada en las vías de acceso al poder. En el programa de 1956 el Partido Comunista formulaba una alianza en torno al llamado *Gobierno Democrático de Liberación Nacional*, gobierno en el cual se incluía a gran parte de los empresarios nacionales. En ese programa, que sufre algunas modificaciones posteriores, se afirmaba que:

“es preciso llevar nuevas fuerzas sociales a la dirección del país, es decir, darle a la clase obrera las principales responsabilidades del poder. Sin embargo, junto a ella deben actuar en el Gobierno otras fuerzas sociales, incluyendo aquellos sectores de la burguesía nacional que estén dispuestos a luchar por la independencia y el progreso nacional”⁴⁷.

Esa posibilidad de alianza con algunos sectores de la burguesía nacional, la fundamentaba el PC en el sistema de contradicciones que estos sectores tenían con el imperialismo y el latifundio. Así insistía en que:

“la mayor parte de la burguesía se haya más inclinada al lado del imperialismo y la oligarquía latifundista y financiera. Pero esta situación es transitoria. Los intereses de estos sectores son también contradictorios con los intereses del imperialismo y de la oligarquía terrateniente y bancaria. Se agudizan cada día más (...) las contradicciones que existen entre la mayoría de los chilenos,

⁴⁵ Julio César Jobet, *El Partido Socialista de Chile* (Santiago, PLA, 1971), Volumen II, págs. 130-131

⁴⁶ Secretariado nacional del MIR, “El MIR y las Elecciones Presidenciales”, *Punto Final*, N° 104.

⁴⁷ *Programa del Partido Comunista*, 1956.

incluyendo gran parte de los capitalistas nacionales y el régimen retrógrado del latifundio (...) la mayor parte de los industriales y comerciantes chilenos, podrán y deberán unirse a la clase obrera y demás sectores sociales (...) De un lado (...) ha de unirse la mayoría nacional, desde la clase obrera a gran parte de la burguesía chilena”⁴⁸.

Desde esa fecha hasta su XIV Congreso, el PC efectúa algunas correcciones en lo que respecta a la constitución de una alianza de clases para obtener el poder. Así, en 1967, su Secretario General afirmaba:

“Las *fuerzas motrices* de la revolución en América Latina son la clase obrera, los campesinos (en muchos países, en su mayoría indígenas), los estudiantes, las capas medias y *algunos sectores de la burguesía nacional*”⁴⁹.

En ocasión del XII Congreso del PC, Luis Corvalán afirmaba:

“La táctica a seguir tiene que contribuir en todo instante a facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, es decir, tiene que ayudar al reagrupamiento de fuerzas en torno a la clase obrera y en contra del imperialismo y la oligarquía, con miras a la revolución antiimperialista y antioligárquica y al socialismo”⁵⁰.

En los documentos anteriormente reseñados no queda en claro cuáles son las fuerzas aliadas del proletariado en el campo de la burguesía. En el programa de 1956 se insiste en el hecho de una división al interior del llamado sector de la “burguesía chilena” y posteriormente se habla de “algunos sectores de la burguesía nacional”. Igualmente se utiliza la categoría de “oligarquía” en forma extremadamente ambigua. Es en el XIV Congreso que el PC abre la posibilidad al entendimiento con el PS, para lograr constituir la Unidad Popular, cuando enfatiza claramente las tareas antimonopólicas de la revolución chilena, dejando definitivamente fuera de la alianza a los sectores del gran capital. De esta forma logra una coincidencia con el PS, que insistía en negarse a un acuerdo con algunos sectores del empresariado e insistía en lograr acuerdo a nivel de base con los sectores progresistas. Es así como en el informe al XIV Congreso, Luis Corvalán especificaba:

“La recuperación de las industrias básicas en poder del imperialismo, la nacionalización de la banca, del comercio exterior, del acero, del cemento y demás empresas monopólicas y la aplicación de drásticas medidas dirigidas a terminar con el latifundio y poner la tierra en manos de los campesinos, son las transformaciones fundamentales e insoslayables a través de las cuales se deben romper las trabas que obstaculizan el progreso del país en todos los sentidos ... Junto a los que viven de un sueldo y un salario y a los centenares de miles de artesanos y trabajadores por cuenta propia, serán beneficiados con estas medidas los pequeños y medianos empresarios de la industria, la agricultura y el comercio. Estos se verán libres de la explotación de los monopolios (En el Gobierno) deben estar (...) los pequeños y medianos empresarios no sólo a través de los partidos que los interpretan, sino también mediante representantes de sus organizaciones de masas en las instituciones y escalones correspondientes de la Administración del Estado”⁵¹.

⁴⁸ *Ibíd.*

⁴⁹ Luis Corvalán, en Carlos Cerda, *El Leninismo y la Victoria Popular* (Santiago, Quimantú, 1971), pág. 120. Segundo énfasis es nuestro.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 152.

⁵¹ Luis Corvalán, “Unidad Popular para Conquistar el Poder”, *Camino de Victoria* (Santiago, 1971), págs. 324-325. Nuestro énfasis

Con esta historia en cuanto a planteamientos estratégicos y con la relativa ambigüedad producto de los énfasis particulares que cada partido le asignaba al Programa Básico de la UP, el problema de la correlación de fuerzas, producto de la búsqueda de una alianza cada vez más amplia, se convirtió en el problema central que el gobierno y los partidos de la Unidad Popular tendrían que resolver en el curso de su gestión.

Las diferentes coyunturas que se producen después de noviembre de 1970 tienen como criterio clasificador el tipo y dirección que asume la correlación de fuerzas, favoreciendo ya sea a la oposición o al Gobierno. Estos flujos y reflujos de la lucha política se definen en torno a dos ejes fundamentales; el primero es la capacidad ofensiva del Gobierno, su unidad en la acción antiimperialista y antimonopólica, los avances que logra en estos frentes y la movilización popular que permiten la implementación de estas políticas. Por otra parte, el segundo eje fundamental lo constituye la unidad de acción de la Oposición, la constante convergencia y divergencia de los partidos opositores, fundamentalmente el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, para presentar un conjunto de medidas políticas que impidan el avance táctico y estratégico del Gobierno. Pero estos flujos y reflujos en el campo de la política opositora siempre tendrán en la base un elemento constante que permitiría explicarlos en definitiva: éste era el problema no resuelto en la *práctica* de la alianza de clases que hubiera permitido el máximo de fuerzas para la inmovilización del Gobierno o de la oposición. Es precisamente en torno a cómo la Unidad Popular concibe *en la práctica* esta alianza que las fuerzas opositoras obtendrán su primera condición de recuperación. En otras palabras, las dificultades de implementar y afianzar la alianza de clases bajo la hegemonía obrera se convertiría en la condición necesaria que la oposición obtendrá progresivamente para recuperarse de su colapso inicial.

2. El problema de la alianza de clases.

Como se mencionaba anteriormente, el sistema de alianzas que postulaba el *Programa Básico de la Unidad Popular* era más amplio e indefinido que el sistema que postulaban los diferentes partidos que participaban a nivel del gobierno. No obstante, en torno a las medidas que el gobierno comienza a implementar es que se puede ir viendo cuáles son los términos en que esta alianza se comienza a estructurar en la práctica.

El gobierno enfrentaba a partir de noviembre de 1970 una baja sostenida de la producción, fundamentalmente debido a la paralización de actividades que ocurrió después del triunfo electoral de septiembre. [El ministro de Hacienda, Américo Zorrilla, señalaba que:]

“la política de corto plazo del Gobierno está concebida para enfrentar simultáneamente dos órdenes de problemas: la resolución de los problemas inmediatos y el inicio de los cambios estructurales”⁵².

Con respecto al primer aspecto de la política económica del Gobierno, ésta se orientó fundamentalmente a un fuerte proceso de redistribución del ingreso, beneficiando a amplios sectores asalariados y de ingresos medios proporcionando un aumento de los niveles de vida a través de una política de máximo empleo, de vivienda, abastecimiento y servicios públicos en general, reactivando de esta forma el proceso productivo. Respecto al segundo punto, se inicia un proceso expropiatorio del capital monopólico y extranjero, se profundizó el proceso de reforma agraria, se estatiza la banca y se recuperaron las riquezas básicas. Junto a estas medidas el Gobierno impulsa y logra

⁵² Américo Zorrilla, “Política Económica del Gobierno de la Unidad Popular”, *El Mercurio*, 28 de noviembre, 1970.

realizar un conjunto de expropiaciones y/o intervenciones que constituirán la llamada *Área de Propiedad Social*.

La alianza de clases para la Unidad Popular se concebía en la práctica con un criterio fundamentalmente economicista. Este error de implementación de la alianza perjudicaba progresivamente las posiciones del Gobierno y permitía que tanto el gran capital como sus aliados en el campo del empresariado mediano y pequeño y de los sectores medios reaccionaran con formas críticas de adaptación económica, tales como el desarrollo en gran escala de las actividades especulativas, o de especulaciones menores como el acaparamiento de alimentos y bienes de uso durable. Sumado esto al bloqueo financiero, el producto fue una desarticulación efectiva de las medidas programáticas de estabilización económica, lo que a su vez tuvo como consecuencia un debilitamiento objetivo de la alianza de clases formulada sobre una base estrictamente económica.

Igualmente perjudicial para el Gobierno fue la perspectiva de considerar que la alianza de clases y, en consecuencia, la correlación de fuerzas se construyó sobre la base de interpretar objetivamente los intereses de los posibles aliados, especialmente del empresariado mediano y pequeño y de los sectores medios. Concebida de esta forma la alianza, era posible explicar los continuos hechos que mostraban un debilitamiento progresivo del apoyo de esos sectores hacia la gestión del Gobierno. En la base de ese tratamiento estaba la concepción o convencimiento de que la alianza de clases constituida bajo la hegemonía obrera era una alianza de carácter no-contradictorio. Este carácter queda claro cuando se analiza el Informe al Pleno del Partido Comunista en marzo de 1971. Allí se afirmaba que:

“Nuestra lucha es contra los latifundistas [en el caso del agro]. A los propietarios medianos y pequeños debemos ganarlos para la lucha por la Reforma Agraria. Este Gobierno está interesado en mantener y apoyar su actividad productora. Ha tomado medidas con este objeto. Ha rebajado el interés bancario de los préstamos de producción para esos agricultores. Además, el Banco Central ha resuelto abrir un poder comprador de productos agropecuarios, sin límite de cantidad, a través de todo el país. Por su parte, el Banco del Estado procede a otorgar ahora anticipos para las siembras, cultivos y cosechas”⁵³.

Esta forma de enfrentar el problema de la alianza entre la clase obrera y el empresariado mediano y pequeño era perfectamente coherente con la comprensión que el PC tenía de cuáles eran los aspectos fundamentales del *Programa de Gobierno*. La lectura del PC enfatizaba la lucha anti-monopólica, anti-latifundista y anti-imperialista, lo que determinaba de manera natural un conjunto de tareas que el mismo “Informe al Pleno” se encargaba de explicitar. Es así como en el campo de la mediana y pequeña industria el PC estimaba que la clase obrera debía:

“velar (...) por que no falte la materia prima, así como porque la maquinaria se mantenga en buenas condiciones y no haya escasez de repuestos, o sea lo referente a la marcha de la producción se vincula al afianzamiento de las reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores y a la necesidad, de importancia vital, de que bajo el Gobierno Popular se produzca más y mejor y con mayor eficiencia que bajo los Gobiernos de la burguesía”⁵⁴.

Al igual que las discrepancias por la manera de concebir la dirección estratégica del proceso revolucionario, en el seno de la izquierda surgieron diferencias respecto a la forma de interpretar la alianza de clases. Obviamente las concepciones polares que

⁵³ Informe al Pleno del Partido Comunista, *El Siglo*, 4 de marzo, 1971.

⁵⁴ *Ibíd.*

presentamos tienden a ser consistentes internamente concibiendo a la alianza de clases al interior del discurso estratégico que caracterizaba a cada una de estas posiciones. La contradicción entre ambos planteamientos al interior de la UP surge cuando de ellos deben concluirse líneas de acción político-partidarias en el campo del trabajo de masas. En ese momento se expresaba una contradicción difícilmente reductible. Es así como en el seno de la UP es el PS quien concibe de manera muy distinta, desde el comienzo del Gobierno Popular el problema de la alianza de clases. En su XXIII Congreso realizado a fines de enero de 1971 en La Serena se concluía que:

“El Partido Socialista luchará por convertirse en la vanguardia revolucionaria de esta etapa desarrollando una política que tienda a crear aceleradamente condiciones para cambiar, durante el ejercicio de este Gobierno, el carácter capitalista del sistema vigente para transformarlo en un régimen socialista”⁵⁵.

La dirección socialista elegida en esa oportunidad no tenía duda de que esta forma de enfrentar el trabajo político no iba a ser compartido por otros partidos de la UP. Así, afirmaba que:

“surge la necesidad del fortalecimiento de la unidad socialista-comunista, cuyas diferencias deben superarse en la acción y a través de la discusión ideológica”⁵⁶.

Confiada la dirección socialista de poder reducir las profundas discrepancias de esa forma, el Congreso se pronuncia sobre las tareas que la clase obrera tenía en el campo de la producción industrial, insistiendo en la urgencia de la:

“Incorporación de los trabajadores al ejercicio pleno del poder, desarrollando la gestión obrera en las empresas nacionalizadas, el control obrero cuando sea necesario y construyendo desde la base una nueva estructura política que culmine en la Asamblea del Pueblo”⁵⁷.

Y explicitaba aún más su línea de trabajo en relación al empresario mediano y pequeño afirmando que:

“En la empresa privada: queremos que los Comités de Vigilancia de la Producción sean elegidos por la base y dentro de la Empresa, tengan injerencia en todos los aspectos de la producción administración-contabilidad, comercialización, etc., y que tengan presencia en todos los talleres y secciones. *A través de ellos deben pasar las relaciones Gobierno-empresario privado. Que el Banco no les conceda ningún crédito al empresario particular sin conocer la opinión del Comité de Vigilancia, aunque se trate de empresas con 20 obreros*”⁵⁸.

Estos breves, pero ilustrativos antecedentes muestran que el problema de la alianza con el empresario mediano y pequeño se presentaba en estas circunstancias como un problema sin solución. La contradicción se hace presente recién inaugurado el Gobierno de la UP continuando durante todo el período. Esta contradicción es una de las más importantes trabas que tuvo el Gobierno en su intento por establecer una dirección política eficaz. Aún cuando los términos para concebir la alianza y las tareas que se derivaban de ella aparecen contradictorios, ambos planeamientos polares tenían un mismo error de origen que los llevó, si bien por caminos diferentes, a un tratamiento insuficiente del problema. Este error original era el enfoque economicista del problema, inherente a ambas concepciones. La convicción de que la alianza de clases se realizaría

⁵⁵ Resolución Final del XXIII Congreso del Partido Socialista, La Serena, enero, 1971.

⁵⁶ *Ibíd.*

⁵⁷ *Ibíd.*

⁵⁸ *Ibíd.* Énfasis nuestro.

interpretando objetivamente los intereses económicos de las clases aliadas llevó necesariamente a afirmar la *posibilidad* de tener un aliado sea por la persuasión o compulsión económica. Las alternativas del “guante blanco” o la de “la pistola al pecho” se demostraron igualmente insuficientes, cada una por razones diferentes y reforzadas por distintos elementos. Este doble fracaso mostró en la práctica la imposibilidad en ese momento de mejorar la correlación de fuerzas por esa vía.

Las distintas reacciones de los posibles aliados frente a estas alternativas mostraron esa dificultad. Por una parte, el tratar de ganarse a determinados sectores sociales como aliados a través “del bolsillo” se desencadenó *al mismo tiempo* un proceso de alejamiento que tuvo un efecto radicalmente opuesto a las intenciones de consolidación de esa alianza de clases. El hecho de asegurar un sistema estable de relaciones entre el Gobierno y los empresarios privados a nivel del aparato productivo y de estructurar una alianza Gobierno-sectores medios asegurando un nivel de consumo e ingreso estable, *creó* la necesidad en esos sectores de una seguridad cada vez mayor de que tanto sus relaciones económicas como los ingresos y el nivel de consumo serían estables y de que, además, tendrían un desarrollo ampliado. Esta necesidad de mayor seguridad chocó con el énfasis anti-capitalista que tenían algunas acciones programáticas del Gobierno.

Por otra parte, el énfasis unilateral en la presión de masas y en el carácter económicamente compulsivo de la alianza empujó a estos sectores a desarrollar actividades que imposibilitaron la implementación de los planes económicos del Gobierno.

Es así como el alejamiento *político* de algunos de los sectores o clases potencialmente aliadas tuvo una dinámica que surgió del tratamiento que en la práctica la Unidad Popular le dio al problema de la alianza, resistiendo de este modo las posibilidades de una acumulación de fuerzas cada vez mayor. Dado que el carácter vacilante de esos sectores, la situación sólo podía verse superada sobre la base del desarrollo de una iniciativa *política* e ideológica que los alejara del radio de acción de la Oposición. Era un mecanicismo de parte del Gobierno y la UP pensar que esas capas podían ser atraídas a través de estímulos puramente materiales. Como también era idealista plantear una política que no los considerara. Por otra parte, haber intentado atraer a esos sectores y capas sociales con puros estímulos morales y políticos habría sido una política destinada al fracaso. Si hubiera estado asegurado lo fundamental, i.e. la propiedad de los empresarios no incluidos en un APS previamente definido y estrictamente circunscrito, y asegurado su desarrollo económico dentro del marco general de la planificación que ese momento podía haber desarrollado el Estado, el Gobierno y la UP habrían podido avanzar en esos sectores fundamentalmente sobre la base de la lucha ideológica y del desarrollo de las fuerzas obreras en todos los planos.

Definidos de esta manera los problemas que enfrentó la UP durante este período es posible entender cómo y por qué la oposición pudo y supo aprovechar los problemas e insuficiencias del Gobierno para estructurar una alianza estable, respondiendo a estos problemas con una ofensiva política e ideológica que logró estructurar un frente de clases mucho más amplio que el del propio Gobierno. Así, se puede afirmar que la lógica en la que se encerró la UP y el Gobierno a este respecto, determinó la estructuración de un campo de lucha política que se transformó en terreno propicio para que la oposición recibiera un conjunto de fuerzas sociales y sectores de apoyo político. En esos momentos la oposición se dio cuenta de que podía responder políticamente al Gobierno con una correlación de fuerzas superior e implementar de esta forma su respuesta política programática.

III

La convergencia política de la oposición

Las condiciones necesarias para poder articular un proyecto político alternativo al de la Unidad Popular se vieron progresivamente desarrolladas en el campo de la oposición. La Unidad Popular indicó el camino que ella debía seguir para lograr la implementación política efectiva de su proyecto. Ésta reaccionó superando sus formas críticas de adaptación política-acuerdos parciales sin constituir un centro hegemónico de conducción y decisión, dando pasos hacia la constitución de la fórmula política que permitiera avanzar hacia la configuración de un marco estable para los intentos de desarrollo económico del gran capital.

Pero la acumulación de fuerzas de la alianza opositora también tuvo serias contradicciones internas: hegemonía no resuelta, problemas partidarios internos, falta de unidad entre las organizaciones empresariales y sus vanguardias políticas, y falta de apoyo de las Fuerzas Armadas, todo lo cual demoró la posibilidad de pasar a un nivel superior de enfrentamiento político con posibilidades mayores de éxito.

1. Los problemas que la UP resuelve a la oposición

Dentro el campo de problemas que enfrentaba el sector empresarial y sus partidos, existían algunos que producto de la propia acción de la Unidad Popular fueron resueltos, a lo menos en el corto y mediano plazo. Estos se refieren fundamentalmente al conjunto de contradicciones en el seno del empresariado y sus contradicciones con los sectores latifundistas.

Un primer problema que le solucionó el Gobierno de la Unidad Popular al empresariado era aquel relacionado con cuestiones de competencia y dominación al interior del propio sector⁵⁹. La constitución del *Área de Propiedad Social (APS)* resuelve momentáneamente las contradicciones en su interior permitiéndole de esta forma articularse políticamente sin el peso de los problemas de dominación internos pre-existentes. La alianza para recuperar la propiedad y administración de las empresas expropiadas se presentaba como beneficiosa, en esos momentos, para todos y cada uno de los sectores que alguna vez tuvieron la posibilidad de entrar en contradicción al interior del empresariado. Era evidente que en el caso de una vuelta del APS a sus antiguos propietarios la parte a ser redistribuida para cada uno de los grupos en esos momentos desplazados del control y/o propiedad de esas empresas sería cualitativamente distinta, dependiendo de su acción en el *campo político* y en la ubicación que lograran al interior del proyecto político de desarrollo⁶⁰ lo que en definitiva presentaba un estímulo adicional a su convergencia política.

Un segundo problema que la Unidad Popular resolvió a la oposición fue la resolución del conflicto entre latifundistas e industriales. Si bien en un primer momento del Gobierno DC estos sectores se presentaron diferenciados, posteriormente, ante el avance del proceso expropiatorio cerraron filas entre sí, protegiéndose el sector industrial de los

⁵⁹ Para un análisis de las relaciones de dominación al interior del sector industria ver: Kalki Glauser, "Áreas de Propiedad bajo el Gobierno UP", *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 11, enero, 1972

⁶⁰ [Lo que efectivamente sucedió. Ver: María Olivia Monckeberg, *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno*, Santiago, Ediciones B, 2001].

posibles peligros que veía en una acción de orientación “colectivizante” como la imputada al Gobierno de ese tiempo. Con la política antilatifundista de la Unidad Popular este sector quedó política y económicamente reducido. No obstante, [la oposición] intentó levantarlos *políticamente*, tal era la intención del proyecto [opositor] que tendía a permitir la compra posterior de los predios expropiados. Era evidente que en el estado de avance de la política antilatifundista del Gobierno UP –en lo que se refiere a Reforma Agraria y a la constitución de los Consejos Comunales Campesinos– el futuro poder económico de un sector de capitalistas agrarios en un posible Gobierno de derecha no tendría nunca la importancia que tuvo, sea durante la administración Alessandri o en la administración DC. Era por estas razones que la necesidad de una Reforma Agraria *sin costos políticos internos para el empresariado* había sido lograda, no por ellos, sino por la acción expropiatoria del Gobierno UP. Este hecho hacía posible una convergencia y una unión política entre los sectores del latifundio expropiado y otros sectores opositores en lo que se refería a la posibilidad de estructurar un proyecto político y económico conjunto.

Finalmente, y como se veía en lo referido al problema de la alianza, la oposición recibió aliados gratis provenientes del empresariado mediano y pequeño y de los sectores medios. Con esto la oposición solucionó un último problema, este era la posibilidad que antes no tenía de estructurar un frente amplio de masas de apoyo a su proyecto político y económico. Ese apoyo de masas se convirtió en una de las más poderosas condiciones para la preparación y realización de la contraofensiva opositora. Con ese elemento a su favor y con una correlación de fuerzas favorables, producto de una alianza de clases encontrada por diferenciación a la alianza que dirigía la UP, la oposición vio cumplidas las condiciones estructurales básicas como para pasar a la ofensiva.

Sin embargo, esas facilidades no eran suficientes para realizar con éxito el cambio en su línea estratégica. A la oposición le faltaba solucionar aquellos problemas que solo ella podía resolver, esos problemas que hiciera lo que hiciera la Unidad Popular no se verían modificados o solucionados desde fuera. Estos problemas eran los *internos* del bloque opositor, problemas que tenían su historia y cuya resolución decidiría el destino político –por lo menos en el mediano plazo– de una de las dos colectividades políticas que podían tomar el liderato de la contraofensiva.

Esos asuntos decían relación con la hegemonía política al interior del bloque opositor, a la solución de las contradicciones internas en cada uno de los partidos que podían tomar la conducción del proceso opositor, sus relaciones con las Fuerzas Armadas o sectores de ellas, su relación con el capital norteamericano, y la situación o estructuración de una unidad estable y actuante entre sus vanguardias políticas y sus organizaciones gremiales. El propósito en ese momento, entonces, era mostrar cómo la oposición daba pasos que la llevara tanto a lograr una mayor unidad de conducción como a la constitución de un núcleo de dirección política, y a explicitar un proyecto político alternativo al de la Unidad Popular con el cual reestructurar la vida nacional de acuerdo con sus intereses.

Las formas críticas iniciales de adaptación política de la oposición después de su derrota en la elección presidencial [de 1970] mostraron la alta inestabilidad que enfrentaba cuando intentaba la programación e implementación de acciones defensivas frente al avance de la Unidad Popular y del Gobierno. Fundamentalmente, esas formas adaptativas se reflejaban en las relaciones entre el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, en las continuas convergencias y divergencias entre ambos partidos, que tenían en la base la búsqueda permanente de una *hegemonía partidaria al interior del bloque opositor*. La pugna entre estas dos colectividades decidió en muchas coyunturas

la correlación de fuerzas a favor de la Unidad Popular. Esas relaciones contradictorias se vieron, con el transcurso de la ofensiva del Gobierno, limadas y despojadas del carácter altamente antagónico con que estuvieron revestidas durante algún tiempo. No obstante, es posible pensar que si bien el carácter antagónico de sus relaciones estaba siendo resuelto, los problemas internos fundamentales de la oposición subsistirían. Contradicciones que ya no se referían a los problemas propios de sus relaciones interpartidarias, sino que serían producto de la inestabilidad estructural que alcanzó el proyecto político de la oposición. Inestabilidad que no puso en peligro su proyecto sino que lo hizo menos crítico, en esos momentos, para la Unidad Popular.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, es necesario realizar un análisis de los términos en que se dieron las relaciones entre las vanguardias políticas de la oposición, estableciendo los términos de sus contradicciones y de las soluciones que encontraron, como también de las bases políticas que les proporcionó una estabilidad mayor a la lograda hasta ese momento.

2. Las relaciones DC-PN después de 1970

Los hechos políticos desde el momento eleccionario del 4 de septiembre hasta el 4 de noviembre [de 1970] tienen la importancia de condensar en un corto período de tiempo un conjunto de decisiones en el plano político que de otra forma hubieran tenido un ritmo más lento.

Ante su derrota, la Oposición tuvo que tomar múltiples decisiones, rectificar posiciones y resolver contradicciones internas de manera de poder presentar la mejor salida táctica posible. En esos dos meses un primer elemento que aparece de importancia es el [uso] diferente que el PN y la DC hacen del momento político. El primero trata a toda costa de socorrerse en la disposición constitucional de la votación por el Congreso ante la no obtención por ningún candidato de la mayoría absoluta. La DC, por su parte, condiciona el apoyo a Allende a la aceptación por la Unidad Popular del anteriormente mencionado *Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas*. El juego del PN se ve cuando Alessandri, en su carta del 10 de septiembre, insinúa la segunda vuelta presidencial⁶¹.

La DC, a través de la mesa que presidía Benjamín Prado, realiza al día siguiente de esa publicación el reconocimiento del triunfo de Allende. Los términos para que la DC tomara una decisión al respecto estaban claramente establecidos, y dado el predominio político interno que se observaba en la composición de su mesa y de la comisión de estudio de las Garantías Constitucionales –Prado, Maira, Fuentealba, Castillo, Aylwin– se impone al interior de la DC el apoyo a Allende no ligado estrictamente al reconocimiento previo del *Estatuto de Garantías*⁶².

El PN viendo fracasadas sus posibilidades de lograr una conducción táctica de la oposición en esos momentos, formula la línea política de “oposición sin alianzas ni combinaciones” destacando que:

“No podemos depender de garantías negociadas por directivas políticas que no tienen ninguna eficacia, salvo un valor declamativo (...) yo no quiero que los

⁶¹ “En el caso de ser elegido por el Congreso Pleno, renunciaría al cargo, lo que daría lugar a una nueva elección. Anticipo, desde luego, en forma categórica, que yo no participaría por motivo alguno”.

⁶² El intento de desbaratar esta solución lo expresó claramente *El Mercurio*, el que afirmó: “entre quedar como fuerza de derecha en un gobierno de predominio comunista y quedar como poderosa fuerza de centro de una democracia, todo parecería indicar la conveniencia de la segunda alternativa”. Comentario editorial, *El Mercurio*, 13 de septiembre, 1970.

Nacionales nos veamos enfrentados a la alternativa de unirnos a la Democracia Cristiana”⁶³.

Posteriormente, el PN insiste en su línea estratégica contenida en *La Nueva República*, pero el asesinato del general de Ejército, René Schneider⁶⁴, echó por tierra los afanes independentistas del PN, dada la dura crítica de la DC a las posiciones fanatizadas que indirectamente produjeron ese hecho. Así, el PN apareció en posiciones opositoras irracionales que desencadenaban un curso de violencia en el cual, desde la perspectiva de la oposición, nadie ganaba excepto la UP.

Con posterioridad al 4 de noviembre [de 1970], el PDC realiza otra Junta Nacional donde se elige una mesa presidida por Narciso Irureta y en la cual están representados todos los sectores de ese partido. La solución de la DC a la situación política la deja nuevamente sin una línea clara de acción frente al proceso político, pero logra una imagen de primera fuerza de oposición sumándose a las reformas que, según sus declaraciones, “favorecieran el bienestar de los trabajadores”. Así, en el campo opositor se comienzan a preparar las condiciones para desarrollar una campaña municipal que decidiera, por lo menos durante un buen tiempo, la hegemonía de uno u otro partido en la oposición. Esa situación se presenta en la medida que tanto la votación de Tomic como la de Alessandri no eran indicadores suficientemente válidos a ese respecto, dados los problemas de la gestación, desarrollo y significado político de la campaña, como para asegurar ante el país una clara línea de conducción opositora. Esta comienza a gestarse en esos mismos momentos en función de las elecciones municipales de 1971, aunque también se producen algunos acuerdos puntuales entre ambos partidos producto, en definitiva, del carácter que iba asumiendo el Gobierno y el carácter de las medidas que éste estaba tratando de implantar, como en el caso del proyecto de presupuesto. La coincidencia de la votación en casi todos los puntos del proyecto presentado por el Gobierno refleja que desde los primeros meses de vida opositora, la DC y el PN entraron en un proceso tanto de convergencia respecto a la acción a ser desarrollada frente a la iniciativa de la UP, como de divergencia con respecto a las líneas políticas más amplias que la oposición debía implementar.

Si bien la respuesta inicial dada por la DC al PN fue definitiva, la composición de la directiva DC le da esperanzas al PN de una alianza con los sectores que ahora representados se diferenciaban de aquellos marcados por la campaña de Tomic. Es así como en enero de 1971 el PN insistía con ocasión de la elección complementaria por la Décima Agrupación:

⁶³ Onofre Jarpa, *El Mercurio*, 19 de octubre, 1970.

⁶⁴ [“El jueves 22 de octubre a las 08:00 hrs. en la intersección de Martín Zamora con Américo Vesputio, el automóvil en donde iba el general Schneider es bloqueado por varios automóviles para permitir que un grupo de jóvenes rodeara el vehículo y destrozara parte de éste, al percatarse de esto Schneider intenta sacar su arma de servicio, pero en ese momento descargaron contra él armas de fuego y huyen dejándolo gravemente herido, inmediatamente fue trasladado al Hospital Militar, en donde se le practicaron los procedimientos necesarios y diagnostican su grave estado, pues uno de los tres balazos le había perforado los pulmones, le rozó el corazón y le destrozó el hígado” Carlos Prats, *Memorias. Testimonio de un soldado*. Pehuén, Santiago, pág. 184. “El Gobierno de los Estados Unidos y la CIA estaban al corriente de, y de acuerdo con, la conclusión de los oficiales chilenos de que el secuestro del General René Schneider era un paso esencial para una estrategia golpista”. Carolina Hevia y María José Lagos, *Conspiración y asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider*, Escuela de Derecho, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2009].

“Si olvidamos todo lo que ha sucedido antes, ésta es la ocasión de la formación de un frente único. Estamos dispuestos a conversar con la Democracia Cristiana”⁶⁵.

Algunos parlamentarios de la DC rechazan el llamado del PN, ante lo cual Jarpa insiste en la necesidad de “superar las discrepancias ideológicas inactuales” e insiste en un frente único opositor. La respuesta oficial de la DC al llamado de Jarpa es definitiva:

“No aceptamos participar en ningún frente cívico con los partidos de derecha”⁶⁶.

La carrera electoral que iba a decidir la hegemonía política en la oposición estaba iniciada y el PDC no iba a perder su oportunidad de recuperación política por una alianza con un partido que aparecía huérfano de apoyo de masas al no tener un padrino político como se suponía era Jorge Alessandri. El hueco político que intenta llenar la DC fue percibido por la UP y es dentro de sus partidos que surgen las primeras críticas frontales a la DC. El PS analizaba de la siguiente forma la situación:

“En los momentos actuales, la burguesía se agrupa alrededor de la Democracia Cristiana y secundariamente alrededor del Partido Nacional y de la Democracia Radical. La llamada ‘Izquierda de la Democracia Cristiana’, con su permanencia en ese partido y con su indecisión está sirviendo de biombo a la derecha”⁶⁷.

Igualmente, el PN atacó también a fondo los intentos de autonomía política total de la DC, acusándola de indefinición, de inconsecuencia política y de transaccionista. La carrera por los votos al interior de la oposición llega a tal punto que es el propio ex-Presidente Frei quien tiene que intervenir públicamente dando su apoyo a los candidatos del PDC en las elecciones municipales. Incluso el ex-mandatario tiene juicios nunca antes vertidos sobre los partidos de derecha como cuando llega a afirmar:

“A este partido, como a todos, puede hacerse una y mil críticas. Pero nadie se atrevería honradamente a decir que alguna vez se ha visto envuelto en aventurerismos políticos o en forma alguna de golpismo (...) Son otros los partidos –y el país los conoce- los que tienen en esta materia un largo historial”⁶⁸.

Con los comicios de abril de 1971 la situación política al interior de la oposición se define con la hegemonía DC, la que hasta el gran capital acepta una vez conocidos los resultados⁶⁹.

El período que va desde septiembre de 1970 a abril de 1971, se caracteriza, por lo tanto, por el inicio de la contradicción al interior de la oposición entre los partidos que buscan una hegemonía política para el frente opositor. Pero esta hegemonía debía tener una base de apoyo a nivel de la alianza de clases. Hasta ese momento las organizaciones empresariales jugaban al acomodo crítico ante la arremetida programática de la UP. Las divergencias partidarias no les permitía la implementación de una respuesta que necesariamente tenía que darse a través de los partidos políticos, dada la estructuración del campo de lucha que había realizado el propio Gobierno.

⁶⁵ Onofre Jarpa, *El Mercurio*, 8 de enero, 1971

⁶⁶ Narciso Irueta, *El Mercurio*, 21 de enero, 1971.

⁶⁷ XXIII Congreso del Partido Socialista, “Resolución Política”, La Serena, enero, 1971.

⁶⁸ Eduardo Frei, *El Mercurio*, 2 de abril de 1971.

⁶⁹ Comentario editorial de *El Mercurio*, 6 de abril 1971. “Los democratacristianos (...) situados en una posición distinta de la de los intransigentes nacionales, recibieron el respaldo electoral que los consagra establemente como primera fuerza política”.

De esta forma, desde antes de las elecciones municipales de 1971, las organizaciones empresariales se presentan con líneas de acción divergentes o no relacionadas con los partidos que están enfrentados en la carrera electoral, tratando de adaptarse tácticamente a las medidas del Gobierno.

La Sociedad de Fomento Fabril es la primera agrupación que se pronuncia a favor de algunas de las medidas del Gobierno UP cuando en reunión con el Ministro Vuskovic apoya los planes antiinflacionarios del Gobierno⁷⁰. Pero esas afirmaciones no dejaban de ser [retóricas], dado que los problemas centrales que preocupaban en esos momentos al empresariado eran la situación en la agricultura, la estatización de los bancos, los impuestos para el proyecto de financiamiento del reajuste y la constitución acelerada del APS⁷¹. Las mismas respuestas adaptativas a la condiciones impuestas por el Gobierno de la UP se encuentran entre los industriales metalúrgicos, quienes tratan de incursionar en el campo [de los países] socialistas como forma de asegurarse una estabilidad económica mínima durante esa administración, confiando que una apertura y lazos económicos con el campo socialista podría ser un buen seguro para protegerse de eventuales expropiaciones e intervenciones. Pero esta situación no iba a permanecer por largo tiempo ya que a poco de comenzar a aplicarse el programa de Gobierno, la Confederación de la Producción y del Comercio en su ampliado nacional denunciaba:

“los acontecimientos que están deteriorando gravemente hoy las actividades de la producción y el comercio en todos sus niveles (...) están provocando la extinción del sector privado (Esto) nos lleva a la conclusión, juzgando los dos meses de Gobierno, de que se va a la socialización total de la economía y *muuy de prisa*”⁷².

La crítica situación que vive en esos momentos el empresariado se vio agudizada por la contradicción en el frente político entre los dos partidos que podrían proteger sus intereses. Las respuestas de las organizaciones patronales son vistas, desde la perspectiva de los partidos y especialmente por el PN, como medidas que en el fondo atentaban contra sus propios intereses partidarios. Es así como Onofre Jarpa insistía en calificar esas actitudes como una “posición difícil” y hacía el implícito llamado a cerrar filas en torno a las banderas partidarias del PN⁷³. Incluso los mismos sectores que antes habían iniciado una política de acercamiento al Gobierno se dan cuenta posteriormente de que éste no transará su programa y que la política económica previamente diseñada se aplicaba de manera inflexible, poniéndolos progresivamente en una situación crítica⁷⁴.

Desde esta perspectiva es que puede entenderse la constante vacilación del empresariado hacia las posiciones políticas partidistas. Obtener una mayor fuerza en el campo político era la [manera] de lograr consolidar la alianza empresarios-partido políticos, única forma que permitiría la contención de la ofensiva del Gobierno. Mientras el problema a nivel partidario no estuviera resuelto, el empresariado no se jugaría por ningún partido en especial. De la misma forma, las posibilidades políticas de los partidos opositores, en el mediano plazo, también dependían de la fuerza lograda en el campo de la lucha política, siendo ésta la única forma de arrastrar tras de sí a la

⁷⁰ “El sector industrial siempre ha considerado que la inflación es nefasta para la marcha económica del país, razón por la cual pensamos que la política que en este terreno sustenta el Gobierno es sana”, *El Mercurio*, 20 de noviembre, 1970.

⁷¹ Reunión de la Confederación de la Producción y del Comercio, 5 de enero, 1971.

⁷² Ampliado nacional de la CPC, 18 de enero, 1971. Énfasis nuestro.

⁷³ Entrevista a Onofre Jarpa, *El Mercurio*, 31 de enero, 1971.

⁷⁴ 87ª. Junta General Ordinaria de la SOFOFA, 6 de marzo, 1971.

alianza de clases que les iba a permitir superar la bancarrota política en que la UP los había sumido en septiembre. Las elecciones de abril de 1971 le indican a los partidos opositores que sus divergencias inter partidarias no les permitiría estructurar en torno a ellos un curso de acción política de carácter ofensivo.

Pero antes de que se produjera la posibilidad de convergencia política entre los partidos opositores –PN y PDC – era necesario que los problemas que estaban en la base de sus divergencias fueran superados en el corto plazo. Al interior del PDC el triunfo que éste tuvo sobre el PN [en las elecciones municipales de 1971] lleva a las corrientes progresistas –futura Izquierda Cristiana, más otros sectores – a rectificar el curso que la directiva le había dado a esa colectividad. De esta forma, como producto del Consejo Ampliado de la DC en Cartagena (9 de mayo, 1971), esta colectividad entregó a la opinión pública un documento que trataba en términos críticos al Gobierno y al PN, e intenta reactualizar un modelo político en torno a las ideas de *socialismo comunitario*⁷⁵. Pero fuera de ese intento fallido de reactualización de un modelo que políticamente no expresaba a la gran mayoría de este partido, el PDC formula la necesidad de enmarcar al gobierno dentro de la legalidad y las disposiciones constitucionales especialmente en aquellas medidas que se referían a la reforma del sistema bancario y a la creación del APS. Este elemento, no muy enfatizado de los documentos señalados por la necesidad de conciliación de tendencias internas en el PDC, tiene una gran importancia pues es el punto de partida desde el cual todas las organizaciones del empresariado comenzarán a articular su línea opositora. Así, desde el campo de las organizaciones empresariales surgieron fórmulas coincidentes para enfrentar al gobierno, modalidades que tienen como requisito indispensable para su implementación la convergencia en la acción de todos los partidos opositores. Desde la SOFOFA se escucha también el llamado a una oposición que use los resortes legales para enfrentar al Gobierno:

“Estimamos que nuestra democracia cuenta con los sistemas jurídicos constitucionales que permiten la materialización de los programas de gobierno expuestos, no siendo entonces conveniente el que se empleen sistemas o mecanismos que fueron creados para otros objetivos (...) Solicitamos por ello, que se determine claramente los mecanismos que el S. Gobierno usará para traspasar empresas del área privada al área estatal o semi-estatal.”⁷⁶

A pesar de estos llamados a la unidad de los partidos opositores, se siguen encontrando dificultades, principalmente por los problemas de divergencia interna en la DC. Allí se comienza a gestar el proceso divisionista por parte de los sectores progresistas de ese partido, quienes no aceptaban la tendencia de su directiva a conciliar con el PN para lograr una acción conjunta en el plano político. La DC había ganado después de las elecciones de abril la hegemonía en el bloque opositor y había comenzado al mismo tiempo a arrastrar tras de sí a las organizaciones empresariales. Esto no era compartido por el sector progresista del PDC, al cual la directiva DC respondía de su convergencia derechizante a partir de las actitudes del Gobierno.⁷⁷ Pero la línea programática del

⁷⁵ “Resolución del Consejo Plenario de Cartagena” y “Declaración del Partido Demócrata Cristiano sobre la Situación Política”, *Política y Espíritu*, mayo, 1971, págs. 73-79.

⁷⁶ “Exposición del Presidente de la SOFOFA ante el Consejo Nacional de Desarrollo”, 13 de mayo, 1971. A ella se le suman posteriormente las declaraciones de la SOFOFA el 26 de mayo, del PN el 27 de mayo, de la SNA el 1º de julio y de la Cámara Central de Comercio el 30 de agosto del mismo año.

⁷⁷ “En la conducta del oficialismo, en la estrechez de mira de sus partidos, hay que buscar la raíz de lo que en estos seis meses de gobierno se transformó –a pesar de las coincidencias- en una discrepancia permanente de las desviaciones antidemocráticas y del sectarismo con que los grupos gobiernistas han conducido los asuntos nacionales y sus relaciones con los diferentes sectores de opinión”. Narciso Irueta, *El Mercurio*, 19 de mayo, 1971.

gobierno persistía. Se requisaban en esos momentos las principales industrias textiles, la polarización producida por estos hechos crecía y el PDC se veía maniatado para asumir una línea política que respondiera definitivamente a uno u otros de sus principales sectores en pugna. Esos hechos afectaban las relaciones al interior del PDC por ambos lados. Es así como los regidores de la DC por Valparaíso piden a comienzos de junio un candidato único con el PN para las elecciones complementarias para esa provincia y su directiva presenta la censura a la mesa de la Cámara de Diputados, la que cae a los pocos días después por 78 votos contra 44. Por otro lado, los sectores progresistas del PDC insistían en el cierre inmediato de todo contacto con el PN como condición para asistir al Consejo del PDC de fines de julio. La ponencia rechazada en el Consejo Nacional tiene como efecto la salida inmediata de los sectores que posteriormente formarían la Izquierda Cristiana.

Pese a que se limaron de esa forma las aristas principales que impedían el acercamiento PDC-PN, aún subsistían algunas diferencias que se vieron expresadas en la actitud de la DC ante la acusación constitucional presentada por el PN contra el Ministro de Economía. Incluso la SOFOFA considera “poco razonable” la acusación y la DC decide no apoyarla aún, afectada por los coletazos del proceso divisionista que la mantenían en una cierta inestabilidad. El PDC no podía arriesgarse nuevamente a seguir perdiendo militantes que se sumaran a la Izquierda Cristiana, producto de una medida política que en definitiva beneficiaba directamente al PN, que había sido el de la iniciativa. Pero, por otra parte, no podía dejar de interpretar a sectores del empresariado que veían en la DC la posibilidad de recuperar sus posiciones. Esa posibilidad se veía cada vez más remota teniendo en consideración que la DC se hallaba debilitada internamente -lo cual hacía difícil una acción conjunta con el PN- y que por las mismas razones encontraba dificultades para formular un proyecto político alternativo al de la UP que pudiera concitar el apoyo de amplios sectores posibles de ser movilizados en torno a una alianza de clases más o menos estable. Esta situación cambia cuando el proceso de estabilización interna se consolida en el PDC y es en septiembre de 1971 que la DC anuncia un endurecimiento de su línea de oposición argumentando en torno a los ataques de la UP a las declaraciones antigubernistas del ex Presidente Frei. De esta forma, las respuestas de la DC son cada vez menos cautelosas y da pasos cada vez más duros en su línea opositora. En ese contexto se entiende el apoyo que el Consejo de Cartagena, realizado durante el mes de octubre, da al proyecto Hamilton-Fuentealba⁷⁸ de reforma al sistema de propiedad y se prepara para enfrentar al gobierno durante la discusión del proyecto de financiamiento para el presupuesto fiscal.

Por el lado del PN, este ha estado durante el mismo período reformulando su orientación táctica -criticada por el empresariado y por la DC- poniéndose progresivamente en posiciones menos irracionales o “poco razonables”. Igualmente se

⁷⁸ [“El proyecto Hamilton-Fuentealba fue una reforma constitucional aprobada 11 de junio en el Congreso, con los votos de los parlamentarios demócratacristianos y nacionales, que definió las tres áreas claves de la economía e instaló obstáculos al plan estatizador de la Unidad Popular, dejando sin efecto las estatizaciones y requisiciones efectuadas con anterioridad y que eran cuestionadas por la oposición por estar al filo de ley. Salvador Allende al vetar el proyecto, y la insistencia de la Cámara en aprobarlo, creó un conflicto constitucional de grandes proporciones. El Partido Nacional, en declaración oficial, manifestó: “El señor Allende ha dejado de ser Presidente Constitucional de Chile”. Los nacionales, promoviendo el derrocamiento de Salvador Allende, se dirigen a los militares para conducir una intervención en contra del Gobierno, presentando un clima de anarquía y una autoridad sobrepasada por los hechos, y señalando la necesaria acción rectificadora de los militares.” Juan Carlos Arellano G., “El Partido Nacional en Chile: su rol en el conflicto político (1966-1973)”. *Atenea* 499, Concepción, 2009.

da cuenta que debe formular un proyecto alternativo que sea un camino que “proponga al pueblo soluciones”⁷⁹. Igualmente, el PN siente la necesidad de estructurar en torno a sí una alianza de clases más amplia de lo que había intentado hasta ese momento, alianza que tendría que incluir desde sectores de la clase trabajadora, de la clase media del país, hasta el gran capital⁸⁰. Es importante destacar que ante el fracaso de la DC para articular un proyecto político alternativo -producto de su situación interna- será el PN el que tendrá el máximo de probabilidades para formular un proyecto que interprete a la alianza opositora.

Esta línea de oposición es la que las organizaciones empresariales encontraban adecuada como fórmula política para la solución de sus problemas. De esta forma los empresarios apoyan nuevamente el encuentro de una fórmula viable de ser utilizada en su favor. Por estas razones es que la SOFOFA pedía calma a sus asociados, dado que:

“Tras un difícil y sostenido esfuerzo, se está poniendo ya en situación de discutir democráticamente las condiciones que debería dar tranquilidad y estabilidad a un vasto sector industrial”⁸¹.

En la misma dirección responde el PN, apoyando documentadamente el proyecto Hamilton-Fuentealba, consumando la convergencia de los dos más importantes partidos opositores. De aquí en adelante el proceso de convergencia se verá aceleradamente favorecido, logrando la oposición importantes ventajas tanto a nivel de la movilización de masas -i.e. la marcha de las “ollas vacías” a comienzos del mes de diciembre [de 1971]- como a nivel de la unidad de conducción del frente opositor, esto último expresado en las candidaturas unidas de la oposición en las elecciones complementarias de enero de 1972. Los partidos opositores se encuentran a fines de 1971 actuando conjuntamente a nivel parlamentario y definen esa trinchera como una de las posiciones más importantes desde la cual comenzarán a preparar su contraofensiva.

Pero la convergencia de la oposición no comienza con la candidatura [de Óscar] Marín [DC] por Valparaíso, ni termina con las “ollas” de fines de año. El periodo anteriormente analizado, más que período claramente identificable, proporciona la posibilidad de ver cómo, durante casi más de un año después de su derrota electoral, la oposición logra reconstruir las condiciones básicas para la programación e implementación de su contraofensiva. La divergencia/convergencia entre el PN y el PDC, el proceso paralelo de articulación de intereses de las organizaciones empresariales con sus representaciones políticas, la formulación de un modelo político alternativo a la UP y la posibilidad efectiva de movilizar masas a su favor, son los elementos que se encuentran coexistiendo, entrando en contradicción y resolviéndose a su favor durante el período señalado. Es a partir de este período que la oposición entrará en una fase de enfrentamiento más decidido, dado que las contradicciones políticas internas que los maniataban se encontraban prácticamente resueltas. Si a esto se le agrega la solución de algunos problemas de lo cual se encarga la UP, se tiene que la oposición comienza a fines de 1971 la acción efectiva como frente opositor, enfrentándose al gobierno con objetivos políticos concertados, realizando movilizaciones conjuntas de sus fuerzas opositoras y participando de un discurso ideológico relativamente común, pero no lo suficientemente compartido y generalizado

⁷⁹ “Ampliado de la Comisión Política del PN, Viña del Mar, 26 de abril, 1971

⁸⁰ *Ibíd.* Estos elementos también se encuentran en el discurso de Jarpa en ocasión de la celebración del Quinto Aniversario del PN.

⁸¹ *El Mercurio*, 26 de octubre, 1971.

en sus bases y fuerzas de apoyo como para lograr contraponerlo efectivamente al modelo político que de hecho iba implementando la Unidad Popular.

El discurso político de los partidos opositores se orientará entonces en dos direcciones distintas: por una parte se dirigirá sin mayor sofisticación y coherencia hacia amplias masas de apoyo de sectores de la clase trabajadora, sectores medios empresariado mediano y pequeño, lo cual le permitirá encontrar arraigo de masas que hasta ese momento sólo se había producido en forma de movilización en situaciones críticas. Encontrada la posibilidad efectiva de ese arraigo de masas, éste actuará como estímulo fundamental para estructurar un discurso coherente que proyecte su movilización más allá de las situaciones críticas. Este discurso permitiría mantener un estado de alta politización e ideologización de la lucha política de manera tal que sus fuerzas respondieran con el grado de conducción y claridad política simultánea en diversos frentes. Esta tarea sólo podía cumplirse si la oposición lograba criticar al Gobierno, formalizando un modelo político que “proporcionara soluciones al pueblo chileno”.

Por otra parte, los partidos opositores logran articular su propio discurso con el de las organizaciones empresariales. Estos comienzan a tomar más en serio su papel de vanguardia, interpretando los intereses de su propia alianza de clases con especial énfasis en los intereses del gran capital, sector hegemónico en esta alianza. Así se logran soluciones a los problemas inmediatos que estas clases enfrentaban desarrollándose una iniciativa política partidaria que los ubicó al frente de tales fuerzas sociales. Los partidos opositores comenzarán, de esta forma, a articular su discurso en la propia acción opositora, en el campo de la propia lucha política, desplazándose de la crítica a la explicitación de un modelo político apto para su alianza de clases.

Es posible afirmar que durante el primer año de gobierno UP se producen dos tendencias generales en el campo de la lucha desde la *perspectiva de la oposición*: la progresiva solución de sus problemas internos -que tiene como efecto una disminución de los problemas que afectaban su unidad de acción y conducción- y la progresiva superación de los problemas ideológicos que tienen como efecto la posibilidad de estructurar un modelo político relativamente homogéneo tanto para los dos partidos opositores más importantes, como para las organizaciones que agrupaban al empresariado. Si bien el período antes analizado se caracteriza por el inicio de la convergencia y la progresiva solución de ciertos problemas, el período que le sigue se caracterizaría por los avances resueltos que se dan en estos campos

IV

El modelo autoritario

1. La fórmula política para el desarrollo económico del gran capital

La recuperación de las posiciones perdidas por la oposición, tarea contra la cual conspiraron múltiples factores que hacían no viable sus propósitos de restauración, fue intentada a través de variadas fórmulas no exentas de contradicciones en su propio seno.

Desde fines de 1971, las posibilidades que se le presentaban a la oposición y a su alianza de clases eran cada vez mayores dado el continuo proceso de convergencia de los partidos opositores de las organizaciones empresariales y del encuentro de la posibilidad real de movilizar amplios frentes de masas en contra del Gobierno, como lo demostró el Paro de Octubre. Igualmente, en el plano ideológico, fue progresivamente encontrándose un modelo político, no plenamente estructurado, que sintetizaba las condiciones políticas y orgánicas que la oposición debía consultar para el logro de sus objetivos, proyecto que surge y se nutre permanentemente de las posiciones que las organizaciones empresariales adoptan en distintos momentos de la lucha política del período. Los intentos de la oposición se encontraron dificultados, en primer lugar, por la capacidad de la Unidad Popular de responder masiva y orgánicamente a sus iniciativas y, en segundo lugar, por que hasta septiembre de 1973 no fueron definitivamente superados los problemas hegemónicos del frente opositor. Es en torno al modelo político autoritario que se expresaron las condiciones orgánicas, políticas e ideológicas del proyecto político que el gran capital necesitaba para lograr su recuperación y asegurar su desarrollo ampliado, como también para poder movilizar sus fuerzas sociales de apoyo.

Las tendencias en el seno de la oposición que se desarrollan durante los últimos meses de 1971 y que continúan desarrollándose progresivamente hasta el Paro de Octubre, se caracterizan por ser no antagónicas. Las contradicciones que surgen en el mando opositor no imposibilitaron el encuentro de las fórmulas tácticas que permitieron a la oposición enfrentar al Gobierno hasta ese momento con un relativo éxito.

Una de las primeras tareas que la oposición logra con éxito es la ampliación de su apoyo de masas, movilizandole efectivamente al conjunto de sus aliados, pero aún en torno a coyunturas específicas. No obstante hay que ver esta situación como una serie de intentos que la oposición realiza para probar su capacidad de acción conjunta. Es así como a fines de 1971 los partidos opositores se encuentran juntos en diversas acciones, tales como la toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, la defensa de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, la defensa de la propiedad industrial a través de movilizaciones en apoyo del proyecto sobre las áreas de la economía, hasta llegar a candidaturas prácticamente conjuntas [en enero de 1972] para las elecciones complementarias de [un diputado por] Linares, [y un senador por] O'Higgins y Colchagua, [siendo elegidos Sergio Diez (PN) y Rafael Moreno (DC), respectivamente].

La "oposición dura de la DC", como calificara el Presidente Allende, se vio progresivamente endurecida. El Presidente de la DC afirmaba a fines de 1971:

"No ha sido fácil y es posible que siga siendo cada vez más difícil el proyectar la conducta del partido a través de coincidencias o discrepancias con el Gobierno de turno al proceso de cambios. No sólo el sectarismo es un

obstáculo. Lo es, de un modo principal, la incapacidad de este Gobierno y sus partidos políticos para definir con claridad en los hechos una vía pluralista y democrática para el proceso”⁸².

En este contexto la discusión se centró en el proyecto del Ejecutivo sobre reforma constitucional y en el de las tres áreas de la economía. La posición demócratacristiana, nacional y, especialmente, las organizaciones empresariales, rechazan frontalmente ambas iniciativas, mostrando que en esos momentos el papel que estas organizaciones toman en el campo de la lucha política es cada vez más pronunciado, emitiendo juicios políticos de los que antes se habían abstenido. Son estos juicios políticos los que constituyen el germen del *modelo autoritario* que se comienza a imponer entre las fuerzas opositoras. Las condiciones políticas estaban dadas, faltaba la formulación de las banderas programáticas en torno a las cuales se unirían las fuerzas opositoras en un proyecto a más largo plazo que superara los encuentros coyunturales. Un importante avance en este sentido lo proporciona la SOFOFA cuando analiza el proyecto del Ejecutivo sobre las tres áreas. Además de considerar el proyecto como “vago” e “indefinido”, afirmaba que:

“el Estado ha actuado adquiriendo empresas a través de un sistema que podría ser clasificado como de ‘negociación bajo coerción’ (...) En todo el proceso ha tenido enorme importancia la presión inducida a través de la agitación sistemática de los trabajadores, con buenos resultados para los propósitos inmediatos buscados, pero creando precedentes para el país cuyas consecuencias son fáciles de predecir”.⁸³

Frente a la intención del Gobierno de crear en la práctica un “capitalismo de Estado”, la declaración de la SOFOFA acotaba:

“Este aspecto es especialmente desalentador para la Sociedad de Fomento Fabril, que *propugna una definición de la empresa, que superen por igual los conceptos de liberalismo económico y de estatismo marxista*”⁸⁴.

En esa misma dirección aportaba argumentos la SOFOFA con ocasión del Encuentro del Área Privada. En esa oportunidad indicaba:

“Debe en Chile erradicarse el uso de la violencia como supremo argumento para dirimir desacuerdos entre las partes (...) la legalidad sobrepasada es incompatible con la existencia de un Estado organizador”⁸⁵.

Evidentemente la SOFOFA se refería al desarrollo político que los asalariados habían adquirido durante el Gobierno de la Unidad Popular. El “desacuerdo entre las partes” sólo podía connotar el nuevo nivel de lucha que el movimiento obrero organizado había adquirido. Es por esto que la insistencia en un “Estado organizado” sólo tenía connotación de un Estado en donde la autoridad se impusiera a los asalariados obligándolos a un sistema de relaciones laborales favorables a los empresarios.

La reiteración de estos conceptos se encuentra progresivamente desarrollada al interior de un discurso donde los conceptos de Estado autoritario y Empresa Integrada serán los elementos centrales de la rearticulación propuesta por la oposición y sus partidos

⁸² Narciso Irureta, *El Mercurio*, 8 de noviembre, 1971.

⁸³ SOFOFA, “Análisis del Proyecto Ejecutivo sobre las Tres Áreas de la Economía”, *El Mercurio*, 17 de noviembre, 1971.

⁸⁴ *Ibíd.* Énfasis nuestro.

⁸⁵ Orlando Sáenz, *El Mercurio*, 3 de diciembre, 1971. La reiteración de estos conceptos dentro de un marco de crítica al sistema de “libre iniciativa” se encuentra en el discurso del mismo Sáenz ante la Junta General de Socios de ASIMET, el 12 de enero, 1972.

políticos. Producto de ese encuentro se constituye el frente de masas más amplio que haya tenido el empresariado hasta ese momento: El *Frente Nacional del Área Privada* (FRENAP). El éxito logrado en el terreno orgánico para lograr aglutinar aquellos sectores del empresariado mediano y pequeño le imprime nuevas fuerzas a la oposición, delineándose así el curso que su línea táctico-estratégica iría progresivamente adquiriendo. Este auge de la movilización de masas, que había comenzado pocos días antes, tiene un importante hito en la concentración de masas que realizó la oposición el 16 de diciembre de 1971, en el Estadio Nacional.

Pero a pesar de los éxitos anteriormente señalados, la DC aún no definía públicamente su intención de operar en torno a un proyecto como el que las organizaciones empresariales comenzaban a desarrollar. Esta actitud queda de manifiesto en las ambiguas palabras que el senador Renán Fuentealba dirigiera a los participantes de la concentración en el Estadio Nacional en las que, por una parte insistía en la “conjunción democrática” y, por la otra, proponía la sustitución del régimen capitalista en Chile. Igualmente ambiguo es el llamado del candidato Rafael Moreno ante el PN en Rancagua, donde si bien reconoce discrepancias ideológicas, pide el apoyo a su candidatura y afirma su respaldo a la candidatura de Sergio Diez en Linares. Serán las organizaciones empresariales las que insistirán en la formulación del *modelo autoritario* en términos más directo. Así, después del triunfo de la oposición en las elecciones complementarias, la DC aparece nuevamente como una importante fuerza a la cual hay que convencer de estos propósitos en su propio lenguaje. De esta forma la SOFOFA insistía ante el VIII Congreso de la Asociación de Industriales Latinoamericanos:

“Yo me pregunto, no serán talvez las expresiones de ‘revolución en libertad’, ‘vía no capitalista de desarrollo’, los balbuceos chilenos en esa búsqueda que señalo”.⁸⁶

La convergencia política de la oposición continuaba desarrollándose estimulada por el creciente apoyo de masas que lograba y que se vio expresado en la concertación del 12 de abril de 1972. Es frente a ésta creciente unidad de conducción y dirección de la oposición que las ideas de un régimen autoritario comienza a imponerse entre las organizaciones empresariales. El avance más estructurado en este sentido lo sigue proporcionando la SOFOFA en ocasión de su 88 Junta General. Allí se afirmaba:

“¿Cómo va el país a reconstruir su estructura económica? ¿Cómo se van a reponer la armonía y disciplina social, progreso y respeto mutuo? (...) Hay que señalarle (a la ciudadanía) la existencia de caminos claros y viables de desarrollo económico y, consecuentemente, social y político”

Sobre las causas y los errores del pasado, indicaba:

“tenemos que cada seis años, casi con matemática regularidad, Chile se ha impuesto un cambio drástico de orientación política y económica (...) ¿Qué es esto si no los tanteos de un pueblo que prueba sucesivamente todas las recetas que le proponen porque siente que ninguna cura sus males? (...) ese devaneo ha sido alimentado por la irrealidad de los políticos chilenos que, en su incontrolado afán de alcanzar el poder, no titubean conscientes e inconscientemente en ahondar lo deseable, de manera que alcanzado el mando no tienen peor demoledor y némesis que los testimonios de sus propias promesas (...) Creo que la total oscuridad se produce por el agotamiento de la

⁸⁶ Orlando Sáenz, “Discurso ante el VII Congreso de la Asociación de Industriales Latinoamericanos”, 23 de marzo, 1972. La respuesta la proporciona el ex presidente Frei cuando afirma: “surgirá desde la profundidad (de Chile) su prueba hacia nuevas formas de organización social y económica”. *La Prensa*, 11 de abril, 1972.

última alternativa política que se les ha ofrecido a los chilenos (...) En Chile será una solución propia, nacionalista y autónoma que nos lleve por una senda del progreso (...) El sistema social, político y económico del pasado ya no nos sirve para el futuro, debemos sustituirlo y simplemente repararlo”.

Respecto a las condiciones políticas que permitirían el desarrollo del modelo autoritario, afirmaba:

“sólo el futuro podrá revelar el rostro y el nombre del estadista que transformará (este modelo) de gobierno (...) Cuando este hombre del destino aparezca, con regocijo miraremos a nuestros políticos tradicionales, y más aún si él emerge de sus filas, esforzándose por clasificarlo con sus gastados patrones de derecha, centro o izquierda”.

De la misma forma, establece la relación entre la situación a nivel de la empresa y las condiciones políticas y sociales necesarias para permitir el desarrollo de esta fórmula empresarial:

“Es imposible pedirle desarrollo económico a ningún sistema si cada seis años se le cambia todo el universo en que opera (...) Lo que hemos estado buscando es la fórmula de lo que hemos llamado la ‘Empresa Integrada’, que incluye los elementos plenamente sustitutivos de la estructura tradicional al tiempo que preserva condiciones suficientemente atractivas para el capital y la creatividad empresarial (...) Sabemos que una nueva forma de empresario debe tener sus correlatos en nuevas estructuras para la economía y el Estado, de manera que nuestra empresa integral tendrá que esperar un cambio total de mentalidad en el Estado para poder implantarse”.

Finalmente, enunciaba algunas condiciones de apoyo para que este modelo sociopolítico pudiera funcionar con cierta estabilidad:

“Es por ello que nos resulta necesario el acceso cuantioso del capital extranjero y, desde luego, de la tecnología del mundo (...) Por cierto que la formulación de la nueva Unidad Productiva y los mecanismos adyacentes que hemos señalado como optimizándose de su funcionamiento, *deben complementarse con una progresiva adaptación de toda la estructura del Estado y la sociedad a la nueva relación de producción que se ha implantado*”⁸⁷.

El *modelo autoritario* estaba casi totalmente formulado, sólo faltaban algunas adiciones que en nada cambiarían su naturaleza. La originalidad del modelo político estaba en la insistencia en la necesaria readecuación de todo el sistema político-institucional, del aparato económico productivo y de las relaciones entre capital y trabajo tanto a nivel global como a nivel de la empresa. La insistencia en estos aspectos no era un recurso [retórico], al contrario, eran las condiciones fundamentales para asegurar, de una vez por todas, el desarrollo ampliado que como clase todavía no había podido lograr. La estabilidad de este modelo era una condición para su efectividad, como también lo era el rasgo represivo que implicaba la instauración en éste régimen político, única forma de proporcionar la estabilidad buscada. De la misma forma, era condición para la implementación de este modelo el que las diferencias partidarias desaparecieran, dando lugar a un amplio movimiento político que respaldara en los hechos y en su discurso la fórmula a ser ensayada.

En estas condiciones se deducía la necesidad de reestructurar orgánicamente el movimiento opositor, de manera que los partidos tradicionales dejaran paso al “caudillo

⁸⁷ Orlando Sáenz, “Discurso ante la 88ava Junta General Ordinaria de la SOFOFA”. 17 de mayo, 1972. Énfasis nuestro.

enigmático” que viniera a tomar el liderazgo de esa revolución. Así, era preciso definir rápidamente el conflicto del liderazgo al interior de los partidos opositores, de manera de lograr una estabilidad en el plano de la conducción de ese movimiento de masas. Igualmente, era necesario cambiar las relaciones entre los partidos opositores con el empresariado, lo que permitiría desarrollar el vasto movimiento de masas de oposición.

2. Las dificultades para generalizar el modelo autoritario

El gran capital se da cuenta que los diversos intentos de desestabilización que había estimulado durante casi dos años de Gobierno UP nada solucionaban desde la perspectiva de sus intereses a largo plazo. Se requería una radicalización de las posiciones opositoras y quebrar el mito de las Fuerzas Armadas no “deliberantes”, táctica que anticipaba la legitimación de la participación orgánica de las Fuerzas Armadas en la implementación del *modelo autoritario*. Estas eran las intenciones imputables a las reiteradas afirmaciones y acciones que proliferaban en el seno de la oposición. Esas metas se vieron progresivamente logradas cuando los partidos opositores aumentaron su capacidad ofensiva y organizativa y cuando las organizaciones empresariales pasaron a tomar un papel autónomo en la ofensiva simultánea de la oposición.

El llamado del gran capital tuvo un eco inmediato en el PN, el que a través de su presidente, coincidía en afirmar que:

“Nuestro nacionalismo no es una teoría ni una ideología de laboratorio. Es una vivencia, una idea proyectada en una acción, en un estilo, en una conducta y en una rebelión contra todo lo falso, lo caduco y lo anodino (...) Estamos abriendo una senda hacia el futuro. Hemos derribado los falsos ídolos. Atrás quedaron conceptos inactuales: izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, los problemas de nuestra época son reales y no teóricos y los encaramos con realismo y soluciones técnicas y científicas, dentro de una concepción fundamentalmente chilena”.⁸⁸

La división del trabajo era clara, las organizaciones empresariales aportaban el sistema de necesidades y la perspectiva para resolver los problemas de su propia clase, los partidos recogían estas necesidades que habían ayudado a definir y las proyectaban en un discurso de masas en calidad de banderas programáticas de su lucha política. Pero los problemas subsistían en el frente opositor.

Aunque el desarrollo político de la oposición durante 1972 progresó notoriamente y se reinició una ofensiva sistemática que iba desde la acusación contra el ministro [del Interior] Hernán del Canto y el Director del Servicio de Investigaciones, [Eduardo Paredes], hasta el logro de un paro de comerciantes, este mismo desarrollo produjo nuevos requerimientos a la oposición. Por una parte, le exigió superar su nivel orgánico de funcionamiento, lo que tratará de realizar a través de la constitución de la Confederación Democrática, Pero, por otra parte, ese desarrollo estimuló al interior de los partidos opositores la pugna por sacar de sus filas a “ese caudillo” enigmático que tendría la misión restauradora. Esta contradicción que surge en el camino de la oposición se expresa nuevamente en las conversaciones que la DC abre con el Ejecutivo para los efectos de la aprobación de la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, la lógica de esta contradicción está nuevamente en el carácter de la DC. Es como consecuencia [del triunfo en] las elecciones CUT [Central Única de Trabajadores] que la DC encuentra un fuerte arraigo en la clase trabajadora con el que no contaba

⁸⁸ Onofre Jarpa, “Seis años de lucha del Partido Nacional”, 20 de mayo, 1972.

hasta ese momento. Esto hace que se reactiven los viejos anhelos hegemónicos de centro-izquierda de la DC, lo que se tradujo en la práctica en una oposición menos “dura” de la DC hacia el gobierno, la negociación con el gobierno tenía un doble propósito: por una parte recuperar la hegemonía al interior del bloque opositor con banderas populistas y, por la otra, negociar el proyecto de las tres áreas sobre la base de la mantención de algunos privilegios económicos⁸⁹.

Los costos de esta decisión se los hace presente el diputado Fernando Maturana (PN), quien les advertía:

“Si el acercamiento (DC-Gobierno) termina en un nuevo desencanto, la DC al volver al bloque opositor, deberá aceptarlo en el ‘estado en que se encuentre’, a cuya situación ella no será ajena”⁹⁰.

La situación a la cual no sería ajena, según Maturana, era la salida que el PN comienza sistemáticamente a buscar, ésta era el derrocamiento del gobierno a corto plazo. Por estas razones afirmaba en la misma oportunidad:

“Si resulta evidente que son ellos (el gobierno) los que están buscando un respiro, antes de la embestida final, no podemos dudar de que los demócratas estamos obligados a buscar un desenlace rápido (...) Debemos radicalizar posiciones, hasta obligar al gobierno a definirse. El país necesita saber a qué atenerse frente al gobierno, las Fuerzas Armadas y los distintos sectores políticos, si el Ejecutivo atropella la Constitución (...) Esto necesitan saberlo los partidos políticos antes de vaciar todas sus energías y recursos en las elecciones parlamentarios de Marzo⁹¹.

En la respuesta de la DC se afirmaba que su papel en la situación política chilena era de “ser eje político capaz de armonizar el cambio social con la legitimidad democrática”⁹². Pero la situación política altamente polarizada impedía articular esa fórmula. Todos los gremios comienzan a desarrollar un discurso convergente con el *modelo autoritario* y se logra el apoyo de importantes sectores de masas-comerciantes, transportistas, profesionales, etc., [los] que serán posteriormente lanzados al Paro de Octubre. Se comienza a hablar y actuar decididamente en el terreno de la desestabilización. En ese contexto ningún partido, por imaginativo que fuera, podría haber logrado un papel armonizador de las fuerzas en pugna y es precisamente de esto de lo que se da cuenta finalmente la DC.

La DC rompe las conversaciones con el gobierno en una situación es la cual es claramente arrastrada por los parlamentarios nacionales en la propia sala del parlamento. Superadas así las vacilaciones del PDC, el frente opositor se lanza decididamente en su línea de “radicalización de posiciones”. Los intentos de desestabilización del 4 y 19 de septiembre [de 1972], más el intento de octubre, muestran un final feliz para la convergencia de todos los partidos y fuerza opositoras bajo una sola bandera programática. El problema que aún subsistía, como se verá más adelante, es quién tenía la dirección del bloque opositor.

⁸⁹ Los términos de las conversaciones se encuentran en: “Declaraciones de la Unidad Popular respecto a los acuerdos con la DC”, *El Siglo*, 7 de julio, 1972 También en: “Declaración de la Mesa del PDC sobre el fin de las conversaciones”, *Política y Espiritu*, junio de 1972.

⁹⁰ Fernando Maturana, “Informe al Consejo General del Partido Nacional”, 6 de junio, 1972.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Claudio Orrego [Vicuña], “El papel estructural del PDC en el sistema político chileno”, *Política y Espiritu*, julio, 1972.

Progresivamente el discurso de los partidos de oposición es cada vez más parecido al de las organizaciones empresariales e igualmente se advierte que el discurso de estas últimas es cada vez más político. Las diferencias se fueron borrando, posibilitándose así la plena convergencia en objetivos tácticos, una vez que los problemas estratégicos fuesen resueltos. La estrategia estaba clara: desestabilización. Sobre las formas, aunque había divergencias internas, la línea gruesa era utilizar todas las coyunturas para lograr el derrocamiento del gobierno utilizando la vía legal o extra-constitucional. En ese juego se ve irremediabilmente lanzada la DC, que enfrentada a la dura alternativa de ser armonizadora o correr el riesgo de quedar fuera del bloque opositor, opta por integrarse a la oposición buscando, eso sí un papel predominante en la salida política que se lograra.

Si bien el proyecto estaba claro y las líneas estratégicas lo suficientemente bien delineadas como para permitir una acción simultánea de todas las fuerzas de oposición, subsistían problemas importantes que dificultaban el logro de tales objetivos, problemas que se referían nuevamente a la contradicción y costos que significaría para el gran capital un proyecto político nuevamente implementado bajo la hegemonía DC.

En el discurso estratégico y táctico queda definitivamente delineado antes, durante y después del Paro de Octubre. Los distintos sectores de las fuerzas opositoras –partidos y organizaciones empresariales- se encargan de especificarlo.

“Nuestro optimismo se basa en la capacidad de iniciativa de las agrupaciones gremiales que han entendido lo que realmente está en juego (...) Para construir una nación, para reconstruirla, no hay divisiones partidistas, ni dogmatismos doctrinarios, si la gran tarea se realiza con el apoyo de la fuerza gremial. Con ella se obtiene el respaldo amplio de sectores de trabajadores (...) no sometida al vaivén de corrientes políticas”⁹³.

“La restauración económica de Chile parte por una reimplantación de hábitos de orden, disciplina y trabajo arduo”⁹⁴.

“En las fuerzas democráticas prevalece una estrategia política que prescinde en gran medida de esta batalla y de su carácter definitorio para el destino de la patria, así como del hecho de que ésta definición vendrá en plazo breve, mucho antes de la elección parlamentaria. Hay, en consecuencia, quienes tienen su mirada fija sólo en el día 4 de marzo y que rechazan por perturbadora para la estrategia que se han determinado toda acción de los partidos democráticos que pretenda de modo directo y decidido enfrentar la lucha en curso”⁹⁵.

“El movimiento gremial, los partidos políticos democráticos, y las Fuerzas Armadas (son los tres factores fundamentales). El equilibrio, el respeto y la comprensión recíproca, la clara delimitación de deberes y derechos de estas tres fuerzas constituyen la clave del triunfo (...) Ello se consigue con trabajo y disciplina siempre que exista una autoridad que se haga respetar”⁹⁶.

Si bien el *modelo autoritario* estaba lo suficientemente estructurado como para lograr la convergencia de las organizaciones empresariales y de los partidos opositores, aún quedaban problemas por resolver: hegemonía partidaria, movilización de las bases

⁹³ Jorge Fontaine, “Cuenta al Consejo Nacional de la Confederación de la Producción y del Comercio”, 7 de julio, 1972

⁹⁴ Orlando Sáenz, “Aplastante fracaso económico del gobierno de la UP”, *El Mercurio*, 2 de septiembre, 1972.

⁹⁵ “Presentación de los parlamentarios del PN a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputado”, 28 de octubre, 1972.

⁹⁶ Jorge Fontaine, “Discurso ante la FISA”, *El Mercurio*, 12 de noviembre, 1972.

trabajadoras del PDC, relación con las Fuerzas Armadas, relación con el capital norteamericano. Las condiciones necesarias para el paso de la oposición a un nuevo nivel de lucha estaban dadas. No obstante, es preciso destacar que no porque estas condiciones estuvieran dadas el desarrollo de su acción opositora estaría exento de contradicciones internas. Distintos elementos conspiraban para que la oposición lograra la estabilidad necesaria para asegurar la salida autoritaria con apoyo de masas que estaba buscando. En primer lugar, se tenía el problema de la relativa y persistente ambigüedad de la DC frente a las claras líneas estratégicas de las organizaciones empresariales y del PN. La implementación del *modelo autoritario* requeriría para su optimización que la dirección del frente opositor recayera en el PN, dado que este era el más vinculado, reiterativo y permeable a los planteamientos del gran capital. A la DC se le presentaba la alternativa de mantenerse en su posición armonizadora o quedar fuera de una nueva configuración del cuadro político opositor. Sin embargo, las vacilaciones de la DC fueron cada vez menos perceptibles. En esas circunstancias, si bien la DC podía ganar importantes posiciones en el plano electoral y de masas con respecto al PN, la conducción del *modelo autoritario* por este sector entraba su implementación dadas las condiciones existentes en sus bases trabajadoras. Este fenómeno se vio claramente expresado en las vacilaciones del dirigente [DC Ernesto] Vogel durante el Paro de Octubre, como las de todas las bases sindicales democristianas que no se plegaron al paro

Otro aspecto importante que habría trabado la implementación del *modelo autoritario* era el sistema de contradicciones no resueltas entre la DC y el PN. Estas contradicciones se vieron reflejadas en la carrera entablada entre ambas colectividades por lograr la primera mayoría senatorial en Santiago. Onofre Jarpa y Eduardo Frei representaban esta contradicción y aunque el último se impuso electoralmente, en la práctica el problema hegemónico no quedó resuelto. Ambas colectividades contaban con fuerzas de apoyo propias, el PN contaba con las organizaciones empresariales que se sentían mejor interpretadas y seguras con frentes de masas en los sectores medios y en los sectores de la clase trabajadora. Aunque la elección parlamentaria consagró a la DC como primera fuerza electoral, estos elementos siguieron pesando al gran capital, que necesitaba de la presencia de *todas* las fuerzas opositoras, fuerzas que respondieran tanto al PN como a la DC.

Una importante consecuencia de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 tuvo relación con las Fuerzas Armadas. La fuerza electoral que logró acumular la oposición mostró a las Fuerzas Armadas la imagen de una mayoría que se oponía a la continuación del gobierno UP. Este factor decidió a los altos mandos a una revisión de su apoyo al gobierno, reactivando las diferencias internas entre los uniformados.

Finalmente, la oposición utilizó la coyuntura electoral para difundir su modelo político el que hasta ese momento no había sido plenamente divulgado. Igualmente supo aprovechar una campaña movilizadora de sus fuerzas de apoyo, de manera que los resultados de marzo significaron efectivamente la conversión del voto en una fuerza activa en el campo de lucha política. Un nuevo paro con características movilizadoras era la mejor alternativa para la oposición.

V

LA CRISIS POLITICA Y LA RUPTURA INSTITUCIONAL

Los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo [de 1973] tuvieron importantes efectos en las grandes agrupaciones políticas, como también al nivel de algunos de los partidos que participaron en esta medición de fuerzas. Sin embargo, como es habitual en el juego político electoral estos resultados fueron analizados desde las distintas perspectivas partidarias concluyéndose en el fuerte y poderoso apoyo para todas y cada una de las candidaturas. Pasado el primer período de euforia o frustración, la situación comenzó a decantarse de manera que aparecen los reales significados de ese acto eleccionario, destacándose el papel que algunos de esos elementos tendría para el futuro del proceso político chileno.

1. Efectos de las elecciones parlamentarias

Desde la perspectiva de la oposición, los resultados electorales muestran que el apoyo al Gobierno de la UP [43,4%], aún en condiciones de desgaste político agudo, era un factor de fuerza que difícilmente podría ser alterado en un futuro cercano. Aunque las fuerzas políticas de la UP bajan sustancialmente sus votaciones en comparación con las elecciones municipales de 1971, aún se mantienen por encima de la votación obtenida en las elecciones presidenciales que dieron origen a ese gobierno. Por otra parte, la oposición no logra obtener los dos tercios en el Parlamento, si bien logra una votación superior a la de la UP. Establecidos de esta forma los términos del problema, las elecciones parlamentarias no producen ninguna solución a la crecientemente aguda crisis política que vivía el país.

En ese contexto de relativo empate político, la oposición comienza a articular un discurso que refleja las condiciones en que ella se encuentra a esa altura del proceso. Por una parte, se insiste en que los resultados electorales exigirían al Presidente Allende rectificar la política seguida hasta ese momento, intentando de esta forma identificar esa eventual rectificación con la prueba presidencial de adhesión democrática.

“No podrá convencerse a la opinión nacional, ni a los observadores extranjeros que presenciaron los comicios, que ellos no tienen significación. El presidente de la República y los partidos de la Unidad Popular, al empeñarse en esta actitud, sólo lograrían que se dudara definitivamente de su adhesión a la democracia”⁹⁷.

Esta notificación fija el paso de una oposición enmarcada en el juego político tradicional a una oposición que comenzará progresivamente a intentar [cambiar] el curso institucional, como única salida política posible antes de las elecciones presidenciales de 1976. La elección parlamentaria enfrenta a los partidos opositores a la alternativa futura de lograr una candidatura única para 1976 -cosa difícil dadas las profundas divergencias doctrinarias y políticas entre el PN y el DC- o verse nuevamente sometidos un bloque político de izquierda, el que seguramente iría profundizando el carácter socialista de las futuras medidas gubernamentales. Desde esta perspectiva la advertencia es clara: o el gobierno cambiaba radicalmente de curso, lo que era imposible dado que cualquier rectificación siempre sería considerada insuficiente y, además,

⁹⁷ “Una elección plebiscitaria”, *El Mercurio*, 5/3/73

implicaba el peligro de un golpe parlamentarista, o la oposición enfrentaría al gobierno al nivel de sus propias bases de sustentación.

Esta definición de la situación por algunos sectores de la oposición exigía una profundización de los desarrollos que hemos venido analizando hasta este momento, v.gr. una mayor unidad de las vanguardias políticas opositoras a través de la constitución de una hegemonía en el bloque opositor; una creciente movilización de masas de carácter más amplio y popular; [y] una mayor especificidad del modelo autoritario de manera de poder contar con un instrumento de orientación política eficaz que permitiera implementar las tareas específicas que el enfrentamiento exigía en esos momentos. Estos tres procesos entrarán en su fase final durante este período y serán los elementos que actuarán como causas del quiebre institucional de septiembre.

La necesidad de unidad de los partidos opositores surge del poderoso apoyo electoral que al interior de la oposición logra la DC⁹⁸. Desde la perspectiva del empresariado y del PN, esta situación podía hacer peligrar la unidad opositora si intentaba presentarse la DC en el campo de la lucha política como un efectivo centro armonizador y reductor de tensiones. Una alternativa como esa daría por tierra con los intereses y orientaciones políticas empresariales y nacionales. Por otra parte, esa situación no era impensable en la medida que, desde el punto de vista programático, la DC se distinguiera del programa del gobierno UP pero que no pudiera ser identificada con el corporativismo como el propuesto por el PN. Era en base a su peculiar inclusión en el bloque opositor que la DC había logrado ser la primera fuerza opositora y era en función de un discurso político-estratégico claramente diferenciable de los nacionales que había logrado erigirse como fórmula de salida política con identidad propia y nítido perfil político. Esta situación es claramente percibida por los otros sectores opositores quienes insisten en integrar a la DC en su campo ideológico intentando neutralizar, de esta forma, sus arranques centristas.

“Sería ingenuo pretender que grandes grupos parlamentarios y colectividades con influencias en sectores gremiales, estudiantiles, económicos y otros van a mantenerse en una misma línea por otra de un simple pacto. La unidad exige ciertamente metas comunes (...) La continuidad y eficacia en la acción de las fuerzas opositoras dependen no de fusiones o de absorciones que despersonalicen a los partidos, sino de un programa que trascienda las metas de cada uno sin suprimir estas últimas (...) como para definir una conducta política y para ofrecer en lo sucesivo una concreta alternativa de poder (...) El valor que tienen las organizaciones de base tanto para apoyar la líneas políticas como para sugerirlas e impulsarlas, la importancia de los equipos técnicos para el estudio de la realidad social, política y económica y la necesidad de formular un esquema chileno realista y viable que saque al país del estancamiento constituyen motivaciones para un acuerdo supra partidista que el país necesita con urgencia (...) una acción concertada de los PDC, Nacional y sectores radicales con fe democrática puede contribuir a la solución de los problemas sociales y económicos urgentes”⁹⁹.

El sector empresarial se da cuenta de que sin una unidad o convergencia política de mediano o largo plazo la mantención del bloque opositor, expresado electoralmente en la CODE, podría perder vigencia en un plazo breve. Por estas razones es que todos sus

⁹⁸ Situación reconocida públicamente en el seno de la oposición. “Lo interesante es destacar”, editorializaba *El Mercurio*, “que la Democracia Cristiana, del mismo modo ratificó su condición de primera fuerza política del país”. 10/3/73.

⁹⁹ “Responsabilidad de la oposición”, *El Mercurio*, 8/3/73.

intentos se concentran en mantener a la DC en el seno del bloque opositor, ampliando las posibilidades de vinculación orgánica con el PN y la DR-PIR, a través de sugerencias orgánicas múltiples que no generen las críticas de una alianza puramente electoral. Sin embargo este proceso no es del todo fácil en la medida que la notificación inicial de la oposición respecto a la ratificación del gobierno¹⁰⁰ era interpretada por algunos sectores opositores en un sentido distinto al que le daba la dirección DC de ese momento. Por estas razones, los intentos de mantener el bloque opositor tenían que operacionalizarse en una fórmula que, manteniendo las posibilidades de acción antigubernamental de la oposición más dura, diera a la DC un ámbito aceptable de oposición democrática. Es así como se insistía en articular una oposición parlamentaria, que,

“contando con un largo plazo de control en ambas Cámaras, deban emprender sin demora la formación de un instrumento político, moderno, ágil, flexible que pueda en cualquier instante ofrecer al país una plataforma de acción capaz de reconstruir sobre las ruinas”¹⁰¹.

Desde el punto de vista del PN, la necesidad de mantención de la CODE¹⁰² era un requisito fundamental para poder implementar su línea estratégica. Por una parte, los resultados electorales dejaron al PN como una fuerza opositora subordinada a la DC. Pero en la medida en que el PN tenía una línea que descansaba especialmente en la movilización de masas, que le permitiera desestabilizar al gobierno en el plazo más corto posible, le era necesaria la unidad táctica con la DC. Esta debía poner a disposición de las fuerzas opositoras toda su capacidad de movilización masiva y no sólo su fuerza electoral, dado su mayor enraizamiento en las bases organizadas. Esta fórmula unitaria era, en segundo lugar, una necesidad para el PN puesto que, a través de esta movilización de masas podía ganar presencia política en las bases movilizadas por la DC en la medida que su discurso político era un estimulante en condiciones de movilización efectiva. Las bases movilizadas tenderían a responder a quienes tuvieran una plataforma que radicalizara sus posiciones. En caso contrario, una movilización masiva reprimida por sus conductores sólo tendría como efecto su frustración y sentimiento de uso táctico e instrumental para propósitos políticos de muy corto alcance. Es en este sentido que el PN necesitaba una unidad táctica con la DC; necesitaba evitar la discusión de problemas estratégicos y doctrinarios para poder rescatar en el campo de la movilización de masas, el papel de fuerza hegemónica en la oposición que había perdido con los resultados electorales.

En este sentido, la línea que desarrolla el sector empresarial tratando de lograr la unidad de los partidos opositores, estaba íntimamente vinculada con la necesidad de ganar una hegemonía perdida coyunturalmente. Así, la unidad del bloque opositor se pone al servicio -objetivamente- de los intereses del sector empresarial y del PN. Igualmente, esta unidad se concibe sólo en función de la posibilidad de maximizar la segunda línea de articulación opositora; esta era la movilización de las bases. Así lo estimaba uno de sus voceros cuando afirmaba que:

“Cualquiera que sea la forma en que se estructure la oposición, con toda evidencia sus métodos de operar tendrán que apoyarse con más fuerza en las bases de la sociedad que en clásicos instrumentos asambleistas y de propaganda general que pertenecen a los partidos tradicionales. Las juntas de vecinos, los centros de madres, las cooperativas, los sindicatos y las demás organizaciones

¹⁰⁰ Declaración de la CODE del 5/3/73.

¹⁰¹ “Tareas de la oposición democrática”, *El Mercurio*, 8/3/73.

¹⁰² Declaración del PN del 8/3/73.

gremiales, requieren de la presencia permanente (y no solo reducida s campañas electorales) de quienes representan a las grandes corrientes de opinión ciudadana”¹⁰³.

Este énfasis en la movilización de las bases descansaba en una clara percepción de que los resultados electorales no habían sido del todo halagüeños para la oposición¹⁰⁴. Pero más importante que esto era que tras los motivos explicitados de articular una oposición más moderna y ágil se encontraban las necesidades de los gremios empresariales. Era a través de la movilización de las bases que los gremios podían comenzar a tener un papel mucho más importante en la articulación de la línea opositora. Pasado el momento eleccionario y, por tanto, pasado el momento de presencia privilegiada de los partidos en la lucha política, las organizaciones empresariales intentaron retomar la conducción del proceso antigubernamental. Sólo así se entienden los consejos del sector empresarial cuando afirmaba que:

“Debe pues, llegarse a alguna forma de entendimiento entre el gremialismo y los partidos políticos democráticos, en el cual estos últimos no pretendan primar ciegamente sobre los gremios”¹⁰⁵.

Este intento del sector empresarial se entiende a partir del papel que este jugó durante los casi tres años de enfrentamiento político, especialmente en el último período. Los grupos empresariales habían perfilado el *modelo autoritario*, que en esas nuevas circunstancias sólo tenía como posibilidad de implementación una vía táctica que desestabilizara al Gobierno e instaurara un nuevo orden político, económico y social. Las divergencias aún no superadas entre los partidos opositores dejaban a los sectores empresariales sin instrumental político para llevar a cabo sus propósitos estratégicos. Aunque la identidad gremios empresariales-PN se hacía cada vez más estrecha, la disminuida presencia del PN en la arena política y las divergencias doctrinarias gremios-DC, dejaban al sector empresarial librado, no a su propia suerte, pero sí a buscar una fórmula política que detuviera la acción del Gobierno en su contra. Los resultados electorales al no proporcionarle a la oposición los dos tercios necesarios para detener la ofensiva económica del gobierno a través del Parlamento, dejaba una sola alternativa a los sectores empresariales: la sustitución del Gobierno en el plazo más breve posible.

Será el Presidente de la Confederación de la Producción y de Comercio quien puntualice la situación del empresariado en los momentos post-eleccionarios.

“Corresponde (...) a tres fuerzas fundamentales asumir un papel decisivo en la nueva organización política y social. Ellas son: los partidos que estén dispuestos a construir y no a provocar el caos; las Fuerzas Armadas cuya acción es indispensable para restablecer la disciplina y la eficacia e impulsar el progreso; y el poder gremial, que constituye la palanca del desarrollo y el factor de coerción de la comunidad nacional (...) Corresponde a los partidos democráticos, a su vez, ser portavoces de esa mayoría y concertar su acción a fin de que la libertad y el derecho continúen prevaleciendo en nuestra patria (...) somos mayoría y nuestra fuerza organizada hará prevalecer los derechos de esa mayoría que el domingo 4 de marzo se expresó libre y soberanamente”¹⁰⁶.

Las orientaciones políticas proporcionadas por la Confederación de la Producción y el Comercio eran inteligibles al interior del marco *autoritario* que los gremios

¹⁰³ “La democracia en la base”, *El Mercurio*, 10/3/73

¹⁰⁴ “La tarea futura”, *El Mercurio*, 11/3/73

¹⁰⁵ “La democracia en la base”, *Op. Cit.*

¹⁰⁶ Jorge Fontaine, Intervención en cadena radial del día 13 de marzo, 1971.

empresariales habían venido desarrollando hasta ese momento. De esta forma los métodos para enfrentar la acción del gobierno tendrían que mantener una correspondencia con los perfiles del *modelo autoritario*. La alianza postulada para construir un nuevo orden social y político -Fuerzas Armadas, gremios y partidos- era la misma que tenía que enfrentar en esos momentos al gobierno de la UP. De esta forma se comenzaba a realizar una alianza política de largo plazo que debía templarse al calor de la lucha de masas, la que se perfilaba como única forma posible para la desestabilización del gobierno.

Sin embargo, el triunfo electoral de la DC traba los propósitos unificadores de movilización y convergencia estratégica del frente opositor. Producto del espaldarazo que le da el electorado opositor, la DC insiste en mantenerse como un centro político que lleve al gobierno a enmarcarse en los cauces institucionales tal como lo entendía esa colectividad. A este respecto su Presidente afirmaba:

“Esta elección (es) un respaldo abrumador para la Democracia Cristiana, que es un equilibrio en este mismo sistema (político)¹⁰⁷.

Por lo que en su informe político ante el Consejo ampliado la DC insistía:

“una organización estable (la CODE) sólo podría prestarse para equívocos y confusiones dañinas para sus integrantes y para inducir a error a los sectores popular y a la opinión pública en general sobre las ideas y posiciones que cada una de las colectividades representa. Esto, en lo que dice relación con la derecha, distinto es el caso frente a la Federación con el PIR y el PADENA, colectividades con las cuales tenemos vínculos comunes que nos unen más allá de la simple defensa de la institucionalidad democrática”¹⁰⁸.

Sin embargo, la discrepancia más de fondo, aunque relacionada con la búsqueda de una fórmula política unitaria, era la negativa DC de derrocar constitucionalmente al gobierno. Por esto la directiva DC de ese momento era enfática en afirmar que:

“el pueblo le ha dicho a la oposición y *específicamente a la oposición conservadora* que no está por el derrocamiento constitucional del Presidente de la República y que desea que el proceso de cambios y transformaciones continúe adelante, dentro de los cauces democráticos. Esto explica, a mi juicio, el 43% obtenido por la Unidad Popular”¹⁰⁹.

Similares juicios tuvo respecto a una salida inconstitucional que derrocara al Gobierno por la fuerza:

“Usar del poder armado para violar la voluntad del pueblo expresada por intermedio de los mecanismos constitucionales sería simplemente dar la espalda a la sociedad toda que otorgó esa confianza (...). Que nadie se equivoque (y no) pretendan embarcarnos en aventuras golpistas o inconstitucionales, porque para esos jueguitos hay otros, pero no están afortunadamente en nuestro partido”¹¹⁰.

Desechada la salida inconstitucional o el derrocamiento vía acusación parlamentaria al Presidente de la República, la Directiva del PDC especificaba en esa misma oportunidad su posición respecto a la unidad con las otras las otras fuerzas políticas opositoras y su actitud frente a los intentos de los gremios empresariales por estabilizar un eje como el

¹⁰⁷ Renán Fuentealba, entrevista al diario *La Prensa*, 15/3/73

¹⁰⁸ *La Prensa*, 10/4/73

¹⁰⁹ *Ibíd.*, subrayado en el original.

¹¹⁰ *Ibíd.*

enunciado por la Confederación de la Producción y el Comercio. A este respecto se especificaba:

“En cuanto a los gremios, son organizaciones que indudablemente nos interesa defender y fortificar, para que cumplan su función específica de luchar por el progreso material y moral de las personas y actividades que representan. Así serán efectivamente cimientos del régimen democrático. Pero de ahí que se pretenda utilizarlos como entidades de sustitución e instrumento de gobierno, en conjunto con el poder militar, hay una gran diferencia (...) De ahí que hoy me limite a reiterar que no cambiaremos un ápice nuestra conducta sobre esta materia y que estaremos prestos para luchar junto a quien sea para defender la plena vigencia de las bases esenciales de la democracia cualquiera también sea el precio que debemos pagar”¹¹¹.

Las líneas de diferenciación entre la DC y los gremios empresariales y el PN estaban claramente establecidas. El triunfo electoral de la democracia cristiana traba, en esos momentos, las posibilidades de desarrollar un curso de acción política opositor unitario que sobre la base de la movilización de las masas opositoras, y en conjunto con otras fuerzas, sustituyeran al Gobierno e instauraran un nuevo orden político y social. Sin embargo, dada la línea táctica establecida en el Consejo Ampliado surgen las contradicciones en el seno del propio PDC lo que exige llamar a una Junta Nacional Extraordinaria que, revisando los conceptos vertidos por la Directiva Nacional de ese partido, pudiera especificar los lineamientos políticos allí sugeridos o alterarlos en función de una acción más unitaria con el resto de la oposición. Esta contradicción se muestra en momentos previos a esa Junta cuando el PDC enfrenta decididamente al gobierno a través de la acusación [-acogida-] contra el Intendente de Santiago [Jaime Faivovich]. Esta acusación no sólo tuvo como efecto la remoción del citado funcionario sino que fue el primer paso de la DC en un cuestionamiento al mando superior del Ejército que en esos momentos ocupaba la cartera del Interior.

Trabados momentáneamente los intentos de unificación del cuadro político opositor y en espera de una rectificación de la línea explicitada por la mesa del PDC, el PN desarrolla ingentes esfuerzos por llevar a la democracia cristiana hacia posiciones cada vez más duras, utilizando para ello todas las coyunturas que el gobierno ofrecía. Así, la acusación contra el Intendente de Santiago tiene un final feliz para la oposición cuando a fines del mes de abril [de 1973] el Senado lo destituye. Tratando de arrastrar a la DC en esta misma línea opositora, el PN intenta una acusación a todo el Gabinete, acusación que no prospera en la medida que la DC se pronuncia en contra de esta medida. El PN intentaba a través de estas acciones sacar a la DC de sus lineamientos políticos especificados con ocasión de su Consejo Nacional ampliado. Es a través de la radicalización de todas y cada una de las medidas propuestas por la DC que el PN logra, a fin de cuentas, de la Junta Nacional Extraordinaria de la DC una posición mucho más dura respecto al gobierno. Esta favorecería al PN en la medida que este último lograría radicalizar a los sectores democristianos aún vacilantes.

Es en esta dirección que se orientan los esfuerzos de la directiva del PN cuando insistía en la necesidad de unidad en la acción de todas las fuerzas opositoras. Sin embargo esta unidad de acción la especificaba en dos niveles: a nivel de las acciones parlamentarias conjuntas pero también a nivel de la unidad en la base. Esta fórmula de unidad en los

¹¹¹ *Ibíd.*

dos niveles permitiría al PN radicalizar a las bases DC a pesar de las posibles reticencias de su directiva por impulsar una oposición más radical al gobierno¹¹².

La directiva del PN no sólo intenta radicalizar posiciones a nivel de bases sino que enfrenta directamente el problema de la legitimidad del gobierno:

“El Partido Nacional concordando con apreciaciones que sobre este proceso han expresado otros dirigentes democráticos, considera que ha llegado el momento en que el Congreso analice las consecuencias que se derivan de la permanente conducta arbitraria, ilegal y antidemocrática del gobierno, y declare que éste ha perdido definitivamente su autoridad y la legitimidad de su mandato”¹¹³.

Aunque éstas afirmaciones se encontraban al interior de un discurso que exaltaba la necesidad de un régimen nacionalista de corte corporativista, la directiva del PN intenta no hacer cuestión del problema estratégico, o en sus palabras, no desencadenar “debates doctrinarios o programáticos”.

Pero no todos son problemas en el frente opositor. Por una parte, la posición que asume el Comandante en Jefe del Ejército frente a la acusación contra el Intendente de Santiago tiene serias repercusiones en el seno de los institutos castrenses, cuestión que exige que su mando superior se reúna con la oficialidad de la guarnición de Santiago y explique sus posiciones. Por otra parte, los llamados a la unidad de los partidos opositores tienen eco en el PIR y la DR quienes, a mediados del mes de abril, abren conversaciones tendientes a iniciar un proceso de unificación de los sectores radicales no adictos al gobierno. Este proceso culmina con la unificación de ambas colectividades el día 10 de septiembre. Finalmente, a pesar de las posiciones de la mesa directiva de la DC respecto a la inconveniencia de continuar con el pacto político expresado en la CODE, en los primeros días de mayo se elige una nueva directiva para esa agrupación política, cuya presidencia recayó en un demócrata cristiano.

Estos signos alentadores desde las perspectivas opositoras, estimulan a los sectores empresariales y nacionales en sus intentos por obtener una posición más dura de la DC respecto al gobierno y, en el mejor de los casos, por su inclusión en un frente como ellos lo imaginaban. Estos esfuerzos se ven acrecentados en las vísperas de la Junta Nacional Extraordinaria de la DC, a mediados del mes de mayo. Dos líneas fundamentales de acción se articulan en ese momento que tienen como efecto un fortalecimiento de las posiciones más duras al interior de la DC. La primera línea es un fuerte proceso de movilización de masas a través de la radicalización de todas las bases organizadas en contra del gobierno, a propósito de problemas tales como el decreto de democratización de la enseñanza, la *Escuela Nacional Unificada*, la expansión territorial de TV13, el proyecto de anticipo de reajustes, etc. La segunda línea de acción se orienta a la constitución de un poder social paralelo que, a través de la articulación de las diversas organizaciones sociales-juveniles, vecinales, asalariadas, empresariales, [universitarias] femeninas, y profesionales, se expresaran como un poder alternativo al del Estado, enfrentando al gobierno con la consigna de la resistencia civil. Este proceso de articulación y coordinación de organizaciones de base tiene como expresión máxima la existencia a fines de agosto de comandos multigremiales constituidos en diecisiete provincias del país, los que en vísperas del 11 de septiembre declararán un paro nacional indefinido. Estas líneas de acción son editorializadas sintetizando las orientaciones generales a este respecto.

¹¹² Discurso del Presidente del PN en cadena de radios, *Tribuna*, 16/4/73

¹¹³ *Ibíd.*

“Ante los abusos de las autoridades, la movilización dinámica de la población resulta ineludible. Hay evidencias de que el gobierno ha debido echar pie atrás en varias materias después de comprobarse el papel activo de amplios grupos ciudadanos que lucharon por imponer sus posiciones, sin abandonarse ante el temor o la abulia”¹¹⁴.

La formulación de una estrategia común para la oposición la realiza la Juventud del Partido Nacional en su llamado a la Resistencia Civil. Esa plataforma política intentaba unificar al PN y la DC mostrándole la potencialidad de la movilización de masas como la que se expresó en el Paro de Octubre. Criticaba la insuficiente unidad de acción de los partidos opositores y llamaba a una acción que definiera, de una vez por todas, el problema a favor de la oposición:

*“La resistencia civil será una realidad solo en cuanto se logre la unidad absoluta de todos los sectores opositores. No nos referimos a la unidad indisoluble y eterna, porque ella contradecía la esencia misma de la democracia y, además, sería impracticable. Pero, para los efectos que nos interesan, será suficiente la unidad en la acción de manera de evitar la proliferación de iniciativas dispersas y de coordinar la acción conjunta de todos los demócratas, por encima de los intereses particulares y las discrepancias de los individuos, grupos, partidos y gremios”*¹¹⁵.

Para los efectos de implementar tal política, la JN proponía la constitución de un Comité Único Democrático donde estarían representados los sectores políticos y gremiales de la oposición a través de sus cabezas más visibles. Los días previos a la Junta Nacional Extraordinaria de la DC se dan en un contexto de máxima agudización de la lucha política, al punto que el gobierno debe decretar la zona de emergencia para la provincia de Santiago.

Los resultados de las elecciones parlamentarias sólo vinieron a profundizar las divergencias en la oposición, salvo las excepciones de los grupos radicales que intentaban una reunificación. Estas divergencias se mostraron en el seno de la DC, colectividad que decidiría el destino de la oposición en la medida que sus divergencias internas se resolvieran de una u otra forma. A su vez, las contradicciones en el frente político partidario tuvieron como resultado una mayor unificación de las fuerzas empresariales y el PN, los que lograrían nuclear tras de sí a la gran mayoría de las bases organizadas de la oposición y las proyectarían en función de la desestabilización del gobierno. Los tiempos y formas como este proceso se llevaría a cabo estaban por resolverse en el interior del PDC.

2. La situación del Gobierno y de la UP.

La votación obtenida por los partidos de la UP en las elecciones parlamentarias de marzo fue inferior a la observada en abril de 1971 [51%], pero superior a la obtenida en septiembre de 1970 [36,3%]. Desde ese punto de vista era un gran triunfo para el gobierno dado que su desgaste en un período de aguda lucha política debía ser, a juicio de muchos observadores, muy superior. Sin embargo, los problemas del gobierno no decían relación con un apoyo más o menos fuerte del electorado a sus partidos. Los principales problemas que enfrenta el gobierno a partir de ese momento se relacionan con un agudo proceso de divergencias internas en la UP y la profundización de las divergencias en el seno del PS y del MAPU.

¹¹⁴ “Movilización vecinal ineludible”, *El Mercurio*, 6/5/73.

¹¹⁵ *El Mercurio*, 2/5/73, subrayado original.

Tal como se interpretaba de manera distinta el programa de gobierno por parte de los partidos de la UP, como se vio anteriormente, los resultados electorales fueron también objeto de interpretaciones disímiles por parte de los mismos partidos. Para unos, el apoyo logrado a nivel electoral debía exigir avanzar aún más en la construcción de una sociedad que se acercara al socialismo. Para otros, era necesario consolidar la situación puesto que la estabilidad del gobierno se veía en peligro. Una profundización del carácter socialista del programa gubernamental implicaba desarrollar nuevas fórmulas de gestión obrera y organización comunal; orientación que se expresaba bajo la fórmula de poder popular. Por otra parte, la estabilidad del gobierno pasaba por una normalización de la situación económica y social que permitiera detener las acciones opositoras que atentaban contra las políticas de desarrollo. Esta estabilización, cualquiera fuera la orientación que tomara el proceso político, pasaba por una real unidad de dirección del proceso político bajo la conducción del gobierno.

Sin embargo, las divergencias estratégicas llegaron a expresarse en todas y cada una de las alternativas tácticas, situación que inmovilizó al gobierno y permitió que en cada uno de los sectores de la administración pública surgieran iniciativas descoordinadas que contribuían a enfrentar al gobierno con capas cada vez más numerosas de la población. Es así como el gobierno continuó su proceso de aislamiento político después de las elecciones parlamentarias y enfrenta a amplios sectores de la juventud opositora, a la jerarquía de la Iglesia Católica, a la DC y a los altos mandos de las FF.AA. cuando intenta la creación de la *Escuela Nacional Unificada* y publica el decreto de democratización de la enseñanza. Este conflicto tuvo como efecto la salida del Ministro de Educación de ese momento [Aníbal Palma] y una agudización de la movilización de masas opositoras que tuvo que ser reprimida vía zona de emergencia en la provincia de Santiago. Igual suerte tuvo el gobierno cuando abordó el problema de la extensión territorial de las emisiones el canal 13 de TV, enfrentando nuevamente a la Iglesia Católica y activando innecesariamente la hostilidad de los medios de comunicación de la oposición. La sucesión de conflictos es interminable, todos los cuales se proyectan políticamente articulándose en torno a las posiciones lideradas por los sectores más radicalizados de la oposición.

Además de los enfrentamientos parciales que va progresivamente perdiendo y de los resultados activadores que éstos tuvieron para la línea política y la acción de la oposición, el gobierno de la UP enfrenta serios problemas al interior del Estado. Es así como los conflictos con la Contraloría General de la República son cada vez más numerosos y debe recurrir más a menudo a los decretos de insistencia para poder mantener su capacidad gubernativa. Este enfrentamiento creciente con la Contraloría tenía a la base la insuficiente fuerza parlamentaria de la UP, [por lo que el ente contralor] comienza progresivamente a aceptar las interpretaciones constitucionales de la mayoría parlamentaria poniéndose en una posición de franco antagonismo con el gobierno e intentando maniatarlo a través del estricto uso de sus atribuciones fiscalizadoras. Por otra parte, el gobierno se ve enfrentado a progresivos conflictos con la Corte Suprema a raíz de la no disposición de la fuerza pública a requerimiento de ese poder del Estado. Nuevamente el gobierno se enfrenta con un poder que asume progresiva y decididamente las posiciones e interpretaciones constitucionales que fluyen de la mayoría parlamentaria. Este conflicto con la Corte Suprema adquiere su carácter propiamente político, cuando la Asociación de Magistrados se pronuncia contra el gobierno a propósito de las negativas de este para proporcionar la fuerza pública. Finalmente, el gobierno enfrenta a las FF.AA. a través del Cuerpo de Generales y Almirantes (r), de la Unión de Oficiales (r) y del Comité "Patria y Soberanía". Estos

enfrentamientos, sin duda, tuvieron alguna influencia en las apreciaciones de los altos mandos y oficialidad en servicio activo respecto del gobierno. Pero el proceso de ruptura comienza a producirse cuando se ensayan los diversos gabinetes cívico-militares que contaban con la presencia de oficiales de alto rango o con los Comandantes en Jefe de las diversas ramas. En ese proceso de debilitamiento de las relaciones FF.AA.-Gobierno se destaca el hecho que la gestión de los altos mandos en el gabinete no podía ordenar la acción gubernamental en la medida que los cuadros administrativos subordinados respondían a directivas políticas que no tenían una orientación política común ni una conducción táctica relativamente unitaria. Este proceso de deterioro se vio incrementado con la incursión de algunos grupos maximalistas de izquierda en el campo de la preparación militar. Todo esto enajenó a los sectores castrenses del gobierno viéndose este último progresivamente huérfano del apoyo de las FF.AA.

El Gobierno en este período se refugia en la Constitución en la medida que ella le daba legitimidad de origen y ejercicio. Sin embargo, no comprende que más allá de las fórmulas constitucionales el marco en el cual se insertaba estaba siendo superado tanto por algunos sectores maximalistas de izquierda como por amplios sectores radicalizados de oposición. El recurso constitucional podría haber sido efectivo si el Gobierno solamente [si no] hubiera enfrentado un conflicto generalizado al interior del aparato estatal, [pero en este espacio] el Gobierno estaba nuevamente en minoría pudiendo ser desestabilizado a partir de una acción concertada de los poderes públicos.

Las divergencias en su seno se expresaron en una parálisis gubernativa que sólo aumentó la potencialidad movilizadora de la oposición. Igualmente, la falta de conducción del Gobierno de sus propias fuerzas permitió que sus grupos maximalistas presentaran las condiciones objetivas sobre las cuales la oposición comenzó a implementar su táctica de “poder contra poder”. Esta parálisis gubernativa, tuvo como reflejo la solución de los conflictos vía postergación de las decisiones, tal como se verá en el caso del diálogo gobierno-DC. A su vez esta situación aumentó las divergencias en el seno de la UP, las que evolucionaron hasta reducirla a una mera ficción como organización y dirección política unitaria. Los intentos del Presidente Allende por realizar un Congreso de la Unidad Popular y analizar las probabilidades de constituir un partido único se vieron definitivamente frustrados en la medida que las discrepancias intra e interpartidarias mostraban la imposibilidad de esa iniciativa. Las divergencias en el seno de la UP entre la IC, MAPU, PS, PR y MAPU (OC) no sólo se referían a las fórmulas de gobierno para enfrentar la crisis sino que decían relación con los objetivos políticos que se lograrían a través de su resolución. Por una parte los sectores maximalistas intentaban nuclearse en torno al PS progresivamente radicalizado, articulando en torno a él al conjunto de partidos menores que compartían tales orientaciones. Era a través de esos partidos menores que aquel intentaba establecer una vinculación no formal, pero sí de coordinación política entre tales partidos y los grupos maximalistas que no participaban de la UP. Por otra parte, algunos grupos del PS, el PR, el PC y el Mapu-OC intentaron estabilizar la situación a través de la constitución de una dirección única que permitiera operar eficazmente tanto en la implementación de las tareas de gobierno como en el enfrentamiento a los grupos más radicalizados de oposición que desataban una ola de violencia e inestabilidad política. Sólo a modo de ilustración es interesante mostrar algunos aspectos de este problema a través de las posiciones asumidas por los actores políticos más importantes. Así, en el Pleno del Comité Central del PC, a fines del mes de marzo, su Secretario General afirmaba que:

“en la acción del gobierno hay situaciones que no pueden prolongarse más. No es posible que todavía se observen dos o más orientaciones respecto a las

formas de encarar cuestiones vitales, referentes, por ejemplo, a la conformación de las diversas áreas de propiedad o al problema de la distribución. Y tanto o más intolerable es que no siempre se cumplen las resoluciones adoptadas en conjunto o las decisiones de los jefes superiores”¹¹⁶.

Tal como mencionábamos anteriormente las divergencias de carácter estratégico tenían efectos, a esa altura del proceso, en todas y cada una de las acciones del gobierno y de sus partidos. Pero el Informe al Pleno del CC no sólo reconocía esa realidad irrefutable sino que denunciaba los intentos por parte del MIR de formar un solo partido con el PS, el MAPU y la IC. Frente a esa situación el informe destacaba la necesidad de “asegurar el desarrollo normal de los acontecimiento” y de “unir a la mayoría del país alrededor de la clase obrera”. Esa formula era posible a juicio del PC, en función de la existencia de fuerzas más allá de la UP que se habían mostrado proclives a los cambios. Pero para alcanzar eso era necesario lograr la cohesión política del frente UP y de sus partidos. Las tareas principales que indicaba la dirección del PC para esos momentos se daban al interior de “las tareas de aumento de la producción agrícola, minera e industrial”. Y el conjunto de ellas se proyectaban en la dirección de estabilizar el proceso económico, social y político y “ganar una mayoría que permitiera en 1976 un nuevo Gobierno Popular y revolucionario que continúe la obra que le ha correspondido iniciar al que ha encabezado el compañero Salvador Allende”¹¹⁷. La orientación estratégica era ganar la mayoría para así poder, no sólo conquistar nuevamente el gobierno el 76, sino lograr una modificación de los aparatos del Estado que trababan la implementación de las tareas de gobierno, i.e. Contraloría, Poder Judicial y Parlamento.

Casi simultáneamente con la realización del Pleno del PC, el PS realiza un encuentro similar en vísperas de los actos de conmemoración de su cuadragésimo aniversario. La resolución política del Pleno del CC y del PS se distanciaba radical y fundamentalmente tanto de las orientaciones estratégicas aprobadas por el PC como de las formas que de ellas se derivaban para enfrentar la crítica coyuntura que se vivía y la agudización de la lucha política que se avecinaba. El diagnóstico del PS revelaba una agudización de la lucha política y mostraba los avances que el frente opositor había logrado hasta ese momento, avances de entre los cuales se destacaba la obstaculización a la acción del gobierno a través de la mayoría parlamentaria. El PS reconocía las dificultades de desarrollar una acción política que se diera en el campo institucional de lucha por lo que insistía en que:

“La lucha por el poder poner a la orden del día el desarrollo acelerado de todas las formas de expresión del poder popular (...) la participación activa de las masas en todas (las) organizaciones y su consolidación en torno a tareas concretas que tienen que ver con los problemas directos de la fábrica, el fundo, la población, el hospital o la escuela, aseguran el desarrollo del poder popular alternativo a la institucionalidad burguesa, pero no al gobierno popular (se) debe ir configurando desde la base de una estructura institucional distinta y alternativa a la institucionalidad burguesa tradicional, con el apoyo del Gobierno Popular. El objetivo político es que en las tareas que exige la actual situación y sus posibilidades de desarrollo, el pueblo vaya poniendo a prueba su capacidad de dirección y prepare a sus organizaciones, en los principios de la democracia proletaria, para estar desde ahora en condiciones de ejercer

¹¹⁶ Luis Corvalán, Informe al Pleno de la CC del PC, *Ultima Hora*, 28/7/73.

¹¹⁷ *Ibíd.*

plenamente el poder de decisión política que hoy radica en los mecanismos de la institucionalidad burguesa”.¹¹⁸

Aunque el Pleno del PS se pronuncia en contra de estructurar una alternativa política distinta a la UP, -el llamado polo revolucionario- sus planteamientos estratégicos son elementos suficientes como para asegurar la existencia *de hecho* del “polo” a través de una estricta aplicación de las líneas tácticas dictadas por el Pleno. La resolución de cada problema por las bases organizadas implicaba para el PS la necesidad de estructurar a partir de tales conflictos formas orgánicas que nuclearan a los grupos de izquierda. Estos núcleos se convertirían en los instrumentos de acción de una línea política que no podía ser otra que la conversión del proceso de la UP en una revolución de carácter socialista. Sin embargo, las ambigüedades del Pleno quedan de manifiesto cuando insistía, a pesar de los análisis anteriores, en lograr la dictación de la ley de delito económico, presentada por el propio gobierno al Parlamento de mayoría opositora.

De las insuficiencias para llevar a cabo el programa de la UP, el PS estimaba que el burocratismo y legalismo empapaban la acción de los titulares de la administración del Estado, lo cual a su vez era producto del “carácter anti-popular, burocrático y eminentemente corruptor del aparato institucional de la burguesía”. Esta suerte de contagio provocado por la institucionalidad demoliberal requería, a juicio del PS, su cuestionamiento vía estructuración de un aparato diferente, con un signo popular y revolucionario, alternativo y antagónico a la institucionalidad preexistente; una estructura de poder real que se acercaba a su concepción socialista de la expresión popular mayoritaria. Sin embargo, en la medida que el único sostén del gobierno era la cada vez más precaria institucionalidad, las tesis del “doble poder” tuvieron sólo como consecuencia su efectiva implementación no precisamente por el “polo revolucionario” sino por los sectores más radicalizados de la oposición, los que comenzaron a actuar en la perspectiva de oponer poder contra poder; el poder extra-institucional de las bases organizadas y de las masas movilizadas contra el precario poder institucional del gobierno.

Las profundas divergencias en el seno de la UP impedían el logro efectivo de una dirección unitaria que ordenara a todo nivel el proceso por ella desencadenado. No había ningún aspecto operacional en el que no se expresaran las profundas discrepancias internas, puesto que hasta el nivel de las formas de defensa del gobierno, cada uno de los sectores de la UP propiciaba e *implementaba* medidas que eran tributarias de orientaciones estratégicas disímiles y que llevaban el proceso a derroteros francamente antagónicos.

En este contexto, las elecciones parlamentarias [de 1973] solo agudizaron las contradicciones en el seno de la UP lo que derivó en la inmovilización del gobierno impidiéndole resolver positivamente los conflictos. Finalmente cada partido implementó múltiples respuestas de distinto signo lo que tuvo como resultado la generación de un mayor número de frentes conflictivos que fueron usados por una oposición cada vez más decidida.

3. La polarización de fuerzas y el “centro político”

Los problemas unitarios tanto a nivel de la oposición como a nivel de gobierno mostraban una escena política difícilmente polarizable en esos momentos. Sin embargo, la evolución de las tendencias políticas mostró exactamente lo contrario.

¹¹⁸ Resolución política del Pleno del CC del PS, *El Siglo*, 6/4/73

Las divergencias entre los partidos de la UP y la incapacidad gubernativa que se derivaba de ella se mantuvieron, agudizándose hasta el mismo 11 de septiembre. Por estas razones la dinámica política de la oposición en esos momentos [respondió] no a una iniciativa presidencial inexistente, sino al proceso de radicalización de las bases opositoras y a la dinámica política interna del PDC.

Los desórdenes crecientes a comienzos del mes de mayo llevaron al gobierno a decretar la zona de emergencia, período en el cual nueve senadores DC solicitaron a Patricio Aylwin postular a la presidencia de esa colectividad. Todos los esfuerzos de los gremios empresariales y del PN se habían puesto en función de una nueva directiva DC que, deshaciéndose de una incómoda presencia, eligiera a un representante de la llamada línea dura. Aunque la polémica interna en la DC solo se expresaba en términos de “diferencias de estilo de conducción”, en el fondo existía una discrepancia abierta entre quienes pretendían dejar el gobierno librado a su propia suerte y quienes deseaban una salida constitucional del Presidente.

La Junta Nacional del PDC emitió un voto político que aparentemente no se distinguía del informe político ante el Consejo Nacional. Sin embargo la elección de una nueva mesa y algunos matices del voto político mostraron en esa oportunidad que la DC endurecía posiciones y el Gobierno ya no quedaba librado a su propia suerte. El voto insistía en la necesidad de organizar a las bases e instruía perentoriamente a su militancia a utilizar todos y cada uno de los frentes de lucha en función de una mayor presencia del partido entre las bases. Es así como la Junta:

“INSTRUYE al Consejo Nacional del Partido para recurrir a todos los medios legítimos para hacer respetar la constitución política y las leyes, para lo cual la DC usará todo su poder parlamentario, municipal, gremial y vecinal”¹¹⁹.

Aunque la Junta se pronuncia contra una salida inconstitucional o de fuerza, nada dice respecto a una salida constitucional que implique la sustitución del Presidente. La Junta muestra que más allá de los diferentes estilos de conducción se escondía una discrepancia radical en el seno de la DC en relación a su enfrentamiento con el gobierno. Esta situación es claramente descrita por uno de los firmantes de la carta de adhesión a Aylwin, el que informaba que,

“se presentaron dos posiciones: una que estima que el tiempo corre contra el gobierno, puesto que la crisis económica será de tal magnitud, además de no contar con el respaldo pleno de toda la institucionalidad, que le impedirá imponer su tesis totalitaria marxista-leninista; y otra que cree que no hay que arriesgarse y ser más cautelosos y pensar que el tiempo corre a favor del gobierno, lo que se verifica con la experiencia de estos dos años y medio de gobierno”¹²⁰.

El triunfo de la línea dura o “cautelosa” no pasó desapercibido al resto de las fuerzas opositoras. Inmediatamente un DC es elegido Presidente de la Cámara de Diputados; el sector empresarial destacaba que “en una etapa de grandes ansiedades como la que se está viviendo el Partido Demócrata Cristiana ocupa un lugar de lucha y de responsabilidades históricas”¹²¹; el presidente del PN renuncia a su cargo para dejar libre a esa colectividad para encontrar mayores puntos de convergencia con la DC; y finalmente [en junio de 1973] la DC y el PN enfrentan conjuntamente la acusación constitucional contra los ministros del Trabajo [Luís Figueroa] y Minería [Sergio Bitar].

¹¹⁹ Voto político aprobado por la Junta Nacional del PDC, *La Prensa*, 15/5/73. Destacado original.

¹²⁰ Andrés Zaldívar, entrevista en *La Segunda*, 18/5/73

¹²¹ “La Democracia Cristiana en una hora crucial”, *El Mercurio*, 15/3/73

No obstante, el proceso de acerada convergencia política opositora tiene un hito inesperado que cambia radicalmente el curso de los acontecimientos. Esta fue la auto descalificación del Tribunal Constitucional como instancia competente para dirimir el conflicto entre el gobierno y la mayoría parlamentaria respecto al procedimiento a seguir frente a los vetos del Ejecutivo a la Reforma Constitucional de las tres áreas de la economía. Esta declaración de incompetencia dejó el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo sin una instancia institucionalizada que pudiera resolver este conflicto. En consecuencia el Gobierno declaró inmediatamente que sólo promulgaría las partes de la reforma constitucional donde no existieran discrepancia con la mayoría parlamentaria, solución que es inmediatamente impugnada por los presidentes de la Cámara y del Senado en un oficio remitido a la Contraloría.

A partir de ese momento los conflictos se suceden con mucha rapidez: la Corte Suprema impugna al gobierno en relación a la clausura de Radio Agricultura; la Corte de Apelaciones rechaza la solicitud de desafuero contra el senador [Pedro] Ibáñez [PN]; se aprueba la acusación contra el Intendente de Valparaíso [Carlos González Márquez, 25 de mayo, 1973] y contra los ministros de Minería y Trabajo; [y] los manifestantes de [la mina de cobre] El Teniente reciben el apoyo de autoridades policiales locales a su paso a Santiago. En todos y cada uno de los frentes de lucha política, la oposición asesta duros golpes a un gobierno paralizado por consultas y divergencias internas.

Frente a la inexistencia de ámbito institucional para dirimir el conflicto Ejecutivo-Legislativo y en presencia de un proceso de movilización de masas crecientemente radicalizadas, al interior de la DC se produce una cierta recuperación política de los sectores que habían sido expresados por la directiva recién derrotada. Algunos senadores y diputados de esa tendencia se pronuncian a favor de la tesis presidencial de promulgación parcial de la reforma constitucional en la medida que veían que ese era un punto de salida a la crisis que se avecinaba a pasos agigantados. Frente al problema de la Reforma Constitucional, este sector creía que la fórmula para salir de ese impasse era llamar a plebiscito. El gobierno responde esa tesis afirmando que llamar a plebiscito implicaría infringir la Constitución, puesto que el Parlamento no había sometido los vetos presidenciales al trámite de insistencia para lo cual necesitaba, a juicio del gobierno, los dos tercios del Congreso. La negativa presidencial es utilizada por el PN como el hecho fundamental que determina la necesidad de acusar constitucionalmente al Presidente, dado que constituye,

“el atropello más flagrante a la Constitución expresado en la negativa del Sr. Allende a promulgar la Reforma Constitucional según el texto aprobado por el Congreso o a someterla al veredicto del pueblo mediante un plebiscito (se tiene) ahora la prueba definitiva de que la validez de ese mandato ha terminado (...) nadie está obligado a respetar ni obedecer a un gobierno que deja de ser legítimo”¹²².

Este nuevo paso deja a la DC entre la alternativa de acudir al llamado del PN para acusar constitucionalmente al Presidente y destituirlo, o de afirmar una línea política propia. Sin embargo esta alternativa era falsa puesto que al ganar la posición dura, al PDC no le quedaba otra alternativa que pronunciarse por la táctica que comenzaba a implementar el PN. En esta situación, la DC estaba definitivamente imposibilitada de realizar sus funciones armonizadoras e instituirse como un efectivo centro político, especialmente en un momento en que el Gobierno intenta estabilizar la situación a través de la formación de un gabinete cívico-militar con una mayor presencia de

¹²² Declaración del PN, *El Mercurio*, 17/6/73

uniformados en él. El recurso del gobierno de acudir a las FF.AA., fuera de otros múltiples efectos políticos, deja a la DC en esos momentos sin fisonomía política propia siendo arrastrada a la movilización de masas sin un discurso político que la diferenciara de los grupos más radicalizados que llamaban a las FF.AA. a destituir al Presidente o insistían en sacarlo constitucionalmente.

La difícil posición de la DC en esos momentos obedecía a los efectos que tuvo la Junta Nacional de esa colectividad en el curso posterior de los hechos. Por una parte, la línea triunfante dejaba a la DC restringida a la acusación constitucional al Presidente como medida extrema, pero a su vez esa línea se diluía en un contexto de movilización radicalizada de masas que tenía como objetivo la desestabilización del gobierno. Esta precaria línea opositora le impide a la DC reorientar la acción de masas enmarcándolas en un contexto constitucional.

Los efectos de la Junta Nacional dejan a la DC a merced de los grupos políticos opositores más radicalizados. A su vez, cuando esta situación se hace evidente ante los ojos de muchos democristianos se produce una recuperación de las posiciones derrotadas en aquella Junta. Sin embargo, esta recuperación sólo tiene por efecto dejar a la DC definitivamente sin línea política. Sólo puede salir de esa anomia política a propósito del “tancazo”¹²³, oportunidad en que el gobierno solicita el Estado de Sitio y la petición es rechazada en el Senado.

La presencia de un sector de las FF.AA. en posiciones similares a las de la oposición más radical culminaba un proceso de deterioro de la fuerza real del mando superior del Ejército en el seno de su propia institución. El último recurso del Gobierno para mantener el orden interno quedaba obsoleto en la medida que los problemas internos de las FF.AA. hacían imposible contar con esa fuerza para garantizar la estabilidad del Ejecutivo. El proceso de quiebre de los acuerdos políticos se vio expresado -aunque con características absolutamente diferentes- en las visibles discrepancias al interior de los institutos armados, lo que dejaba al gobierno absolutamente huérfano de apoyo a nivel institucional.

Esta situación determina la conducta política del PDC en orden a tratar de rescatar su lugar de centro político potencialmente moderador del conflicto e intentar reducir el conflicto generalizado a través de un proceso de conversaciones directas con el Ejecutivo. En este contexto se inicia el “diálogo PDC-gobierno”, en el cual la DC puso como condiciones: la erradicación de los grupos armados; la promulgación de la Reforma Constitucional tal como la había despachado el Parlamento; un efectivo respecto a la autonomía del Parlamento, Poder Judicial, Contraloría y Universidades; la plena libertad de los medios de comunicación y profundas rectificaciones en la política económica¹²⁴. Las condiciones para el diálogo son replicadas por el ministro del Interior en sesión del Senado, ocasión en la cual insiste en mantener “un diálogo respetuoso, democrático sin que eso signifique que el gobierno transe en sus principios”, y propone “que se produzcan los cambios de estructura en los cuales hay coincidencias con algunos partidos que no están en la UP”¹²⁵. Tanto por parte del PDC como por parte del gobierno existe una intención -a lo menos [retórica]- en orden a asegurar un acuerdo que permitiera estabilizar la situación política dentro de los marcos democráticos existentes. Obviamente, las declaraciones y las posteriores reuniones entre el presidente del PDC y

¹²³ [Fracasado intento golpista del 29 de junio de 1973, encabezado por el Teniente Coronel Roberto Souper, del Regimiento Blindado N°2 de Santiago].

¹²⁴ Declaración del PDC, *La Prensa*, 7/7/73.

¹²⁵ *El Siglo*, 14/7/73.

el Presidente de la República eran los prolegómenos a la estructuración de un acuerdo político que, de pretender éxito, debería haber llegado hasta nuevas reformas constitucionales que subsanaran los problemas de competencia de los diversos poderes del Estado y que permitieran expresar a niveles institucionales los posibles puntos estables de acuerdo político. Sin embargo, la polarización política existente en el campo de la oposición como en el campo de los partidos de la UP conspiraba contra esta difícil posibilidad. Los intentos de encontrar un punto de acuerdo que centrara el conflicto político a través de la consolidación de un centro político efectivo fueron torpedeados tanto por los sectores más radicales de la oposición como por los sectores maximalistas de la UP. A partir del momento en que la mesa directiva del PDC se pronuncia a favor de un diálogo con el Gobierno y el presidente de la DC se pronuncia abiertamente contra la salida inconstitucional del Presidente de la República, se producen en el seno de la oposición y del propio PDC divergencias respecto al intento moderador de esa colectividad. Dos senadores DC son pasados al tribunal de disciplina de ese partido por discrepar públicamente de la iniciativa de abrir el diálogo. Por su parte, el sector empresarial retoma la iniciativa e insiste en una movilización de masas que supere la tendencia “contemplativa” de las bases proyectándolas hacia una defensa activa de la institucionalidad¹²⁶. A su vez un conjunto de gremios empresariales, profesionales y estudiantiles, nucleados en torno al “Frente Cívico Gremial”, llama a la mayoría parlamentaria a destituir al Presidente. Será el PN el que recoge con mayor propiedad esos llamados y, pronunciándose por la sustitución del gobierno, especifica su posición respecto al futuro régimen político que le debía reemplazar:

“Sólo la intervención de quienes representan los valores permanentes de la nacionalidad, por encima de las banderas políticas, y que cuentan al mismo tiempo con la confianza popular, hará posible crear una nueva institucionalidad que, inspirada en la tradición chilena, logre la unidad interna, asegure la libertad e interprete la rebeldía de un pueblo que quiere romper el estancamiento, la dependencia y la miseria”¹²⁷.

Los llamados de los sectores empresariales tuvieron ecos importantes y comienza un proceso de movilización de masas que arrastra al conjunto de la oposición en torno a las banderas de la resistencia civil. Sin embargo, la política de “poder contra poder” no era suficiente como para desestabilizar al gobierno, razón por la cual el PN, en medio de este proceso de movilización masiva, hace un directo llamado a la intervención de las FF.AA. A ese llamado la DC responde con la representación al Gobierno de la necesidad de un gabinete cívico-militar que, integrando efectivamente a las instituciones castrenses en la gestión del gobierno a través de sus comandantes en jefe, obtenga efectivas atribuciones para ordenar el funcionamiento de la administración pública y estabilizar la situación política y económica. Ante esta posibilidad, el PN reitera su juicio de ilegitimidad del gobierno y la necesidad de una participación de las FF.AA., no en un gabinete cívico-militar, sino en el proceso de generación de un nuevo régimen político y social.

Pero los ataques al diálogo no sólo se generaron en el campo de la oposición. Coincidiendo con el análisis que hace el Presidente Allende en el Plenario de Federaciones de la CUT respecto a la situación política del momento, el Pleno de la CC del PC se pronuncia enfáticamente por el “diálogo”. En el Informe al Pleno se insiste en un acuerdo a nivel de la directiva DC y el gobierno, y se afirma que “sostener el diálogo implica el propósito de una convivencia civilizada buscando una salida

¹²⁶ “Movilización para la democracia”, *El Mercurio*, 21/3/73.

¹²⁷ Declaración de la Comisión Política del PN, *Tribuna*, 30/7/73

democrática a los conflictos entre poderes a fin de que los cambios se afiancen ejerciendo el gobierno sus atribuciones y la oposición sus derechos”¹²⁸. Sin embargo las divergencias estratégicas y tácticas en el seno de la UP aparecen nuevamente, esta vez bajo la forma de una oposición a esa fórmula de estabilización política del Gobierno. Es nuevamente el PS el que se pronuncia a este respecto, afirmando que:

“El Partido Socialista no APRUEBA el diálogo Con la directiva demócrata cristiana (...) no aceptará jamás conciliar con los enemigos de Chile, del gobierno popular, de los trabajadores. En estos momento cualquier fórmula de transacción con la Democracia Cristiana sólo sirve para alentar a los grupos facciosos que operan en su seno y con el resto de la reacción, cuyo único e inalterable objetivo es recuperar el poder y sus privilegios”¹²⁹.

En ese marco tan heterogéneo de orientaciones políticas, el Gobierno se encuentra incapacitado para responder positivamente a las condiciones puestas por la DC para llegar a un diálogo con resultado estabilizadores. Las reuniones se repiten sin llegar a ningún punto sustancial de acuerdo, lo que comienza nuevamente a alejar a la DC de esta fórmula, cediendo necesariamente su mesa ante las presiones internas por endurecer la línea y la movilización de masas -huelgas, paros, atentados, encuentros violentos, etc.- desencadenada por los sectores más radicales de la oposición. Ante esta situación y el conjunto de presiones que enfrentaba la directiva DC, esta responde definitivamente a sus bases movilizadas en proceso de radicalización pronunciándose por el paro general.

A partir de ese momento los intentos de los sectores minoritarios de la DC por no pronunciarse sobre la ilegitimidad del Gobierno son cada vez menos relevantes. El voto político de la Cámara de Diputados del 21 de agosto, en el que se concluye que el Gobierno había sobrepasado la Constitución y las leyes, terminó por acallar las voces al interior de esa colectividad que persistían en la búsqueda de una fórmula que posibilitara el encuentro de puntos de acuerdo con el gobierno. El último intento realizado por la DC para solucionar el impasse político Parlamento-Ejecutivo es la declaración del 10 de septiembre de su Dirección Nacional y presidentes provinciales para convocar a elecciones generales. Si embargo, ya era tarde.

Ante el deterioro progresivo de la alternativa intentada por la DC, los sectores empresariales y el PN terminan por perfilar sus objetivos estratégicos para la nueva fase político-institucional que se avecinaba. El *modelo autoritario* que había servido para nuclear a los sectores empresariales y a los grupos políticos afines había tenido pleno éxito como elemento orientador de la lucha antigubernamental. Ahora era necesario especificar que era ese mismo modelo el que tenía validez para estructurar una alianza cívico-militar que fundara un nuevo orden. A este respecto el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio puntualizaba:

“Estoy convencido que las Fuerzas Armadas tienen un conocimiento cabal de los problemas políticos, económicos y sociales que afectan al país; naturalmente, para lograr el resurgimiento de Chile se requiere la movilización de todos los recursos humanos y materiales. Estoy convencido que los civiles pueden reforzar, si fuera necesario, los cuadros técnicos y administrativos que requieran la acción conjunto de militares y civiles”¹³⁰.

¹²⁸ Informe de la Comisión Política al CC del PC, *El Siglo*, 27/7/73

¹²⁹ Declaración de la Secretaría de Comunicaciones del PS, *Ultima Hora*, 30///73, destacado en el original.

¹³⁰ Jorge Fontaine, entrevista en *El Mercurio*, 4/9/73.

Conceptos similares formulaba el presidente del PN, cuando afirmaba:

“Los que participamos en esta lucha tenemos plena conciencia de que no se puede volver al pasado. No cabría imaginar una concepción más torpe e irrealizable que esa. La vuelta al pasado implicaría repetir los errores y restablecer los factores que condujeron a Chile a la decadencia, a la crisis y a la situación trágica en que nos debatimos (...) De esta lucha emergerán fuerzas que habrán de purificar la vida nacional. De ella surgirá una nueva solidaridad chilena, una institucionalidad también nueva y un nuevo concepto de la política y del servicio público”¹³¹.

El 11 de septiembre comenzaban a cumplirse los anhelos de la más amplia alianza política y de clases que nunca antes había podido lograr el sector empresarial.

Las Fuerzas Armadas abrían un nuevo capítulo en la historia política de Chile.

¹³¹ Exposición del Presidente del PN, *Tribuna*, 7//73.

VI
ANEXOS



DOCUMENTOS

POLITICOS

Nº 21

Junio-julio 1973

LA SEGURIDAD NACIONAL



Discurso pronunciado por el Senador Sergio Onofre Jarpa el 14 de junio de 1973.



El señor JARPA.— Señor Presidente, como lo han expresado aquí los Honorables Senadores que me han precedido en este debate, el tema que estamos tratando en esta sesión deberá ser abordado, con mayor detención y antecedentes, en próximas sesiones secretas, donde se puedan entregar y discutir todas las informaciones de que disponemos. Por eso, en esta oportunidad sólo quiero referirme de manera sucinta a la situación planteada por la carta dirigida al Presidente de la República por un grupo de generales y almirantes en retiro de las Fuerzas Armadas.

Esa comunicación evidencia, a nuestro juicio, una doble preocupación. Preocupación ante la crisis generalizada que afecta a la nacionalidad, e inquietud por el debilitamiento de la seguridad nacional y por la situación de las Fuerzas Armadas.

La ruptura de la comunidad chilena



Hacen presente los generales y almirantes cómo la **convivencia social**, es decir la unidad interna de la nación chilena, ha sido quebrada por el Gobierno marxista. Se refieren a los grupos y métodos violentistas que han dejado más de cincuenta muertos y que imponen su voluntad por el terror y el crimen, con el amparo o la complicidad de las autoridades del Gobierno. Mencionan las vergonzosas campañas de odios, injurias y calumnias organizadas por la publicidad oficialista. Señalan su honda preocupación por la falta de autoridad de la fuerza pública para imponer y mantener el orden ante la anarquía imperante.

El panorama de desintegración social descrito en la comunicación a que nos referimos tiene, a nuestros entender, dos causas fundamentales. Primero, el propósito manifiesto y reiterado por los grupos marxistas de impulsar por todos los medios la lucha de clase y el enfrentamiento armado como método de acción para alcanzar el poder, en

vista de su posición electoral minoritaria. Y, en segundo lugar la actitud del señor Allende, que, según sus propias palabras, se considera Presidente sólo del sector de la ciudadanía que le otorgó su apoyo. En esta forma, se ha pretendido establecer dos clases de chilenos: los partidarios del Presidente de la República, que gozan de todas las ventajas, privilegios, impunidad e indultos para sus

delitos o crímenes; y la mayoría del pueblo chileno, que no apoyó al señor Allende, que no comparte sus propósitos marxistas y que está hoy sujeta a los abusos, arbitrariedades, vejámenes, atropellos y, en muchos casos, a la negación de su libertad y de sus derechos.

Se ha roto, así la norma fundamental de la igualdad ante la ley.

La quiebra del Estado de Derecho



Los generales y almirantes se refieren más adelante a la quiebra del Estado de Derecho, como consecuencia de los atropellos reiterados del Gobierno a las normas constitucionales y legales, y advierten al señor Allende que el uso ilegítimo de la autoridad importaría interrumpir la conexión existente entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas no estarían obligadas a obedecer a una autoridad que se ha puesto al margen de la Constitución y de la ley.

El Presidente de la República tiene derecho a mandar sólo dentro de ciertas normas y mientras él se mantenga dentro de ellas. Las Fuerzas Armadas no pueden estar a disposición de los caprichos, venganzas, pasiones o desvaríos de un gobernante.

El sentido de la obediencia tiene que ser racional. La obediencia ciega a un gobernante resta a las Fuerzas Armadas su carácter nacional y popular y transforma a sus integrantes en servidores obsecuentes de ambiciones o propósitos personalistas.

La destrucción de la economía



En seguida, los generales y almirantes señalan que la grave crisis económica por que atraviesa el país —la baja de la producción agrícola, minera e industrial, y la anarquía que existe en las actividades productivas— es consecuencia del propósito del Gobierno de apoderarse de todos los medios de producción y distribución.

Señalan la falta de estabilidad para trabajar y la emigración de técnicos y profesionales en busca de posibilidades que su país les niega.

Se refieren a la incapacidad de la burocracia política y al sectarismo imperante en todos los niveles.

Mencionan la gravedad que envuelve la escasez de productos estratégicos, esenciales para la seguridad nacional, y expresan que se niegan a creer que todo este desastre haya sido planificado y organizado con fines políticos.

Lamentamos no coincidir en este punto con la opinión de los generales y almirantes. Es inconcebible que una crisis de esta magnitud no haya sido prevista y oportunamente corregida por los economistas del Gobierno. Durante estos últimos años, hasta el más lego en materias económicas podía prever lo que ocurriría desorganizando la producción y los servicios, fomentando los conflictos, dilapidando los recursos del Estado, persiguiendo a los empresarios, profesionales y técnicos eficientes para reemplazarlos por comisarios políticos. No es difícil prever el desenlace cuando se emite papel moneda sin tasa ni medida para cubrir el despilfarro gubernativo y las pérdidas de las empresas estatificadas y cuando el país dilapida sus recursos en moneda extranjera, rompe el equilibrio de su comercio externo, se endeuda en dos años en más de mil quinientos millones de dólares, como consecuencia de la baja de las exportaciones y del incremento de las importaciones para cubrir las más premiosas necesidades

La seguridad nacional ha sido afectada

Según el documento de los generales y almirantes, tanto la crisis económica como la quiebra de la convivencia social y del Estado de Derecho ponen en peligro la seguridad de Chile.

Indudablemente, un país dividido, anarquizado y arruinado, que vive con la mano extendida esperando el préstamo o la donación del extranjero, no está en situación de hacer valer y defender su soberanía y sus derechos.

La seguridad de un Estado no sólo emana de la

capacidad de sus Fuerzas Armadas, sino que ella está directamente relacionada con la unidad de propósitos del pueblo que lo habita, con los recursos económicos de que disponga para afrontar una emergencia y con la conducción política, que debe ser realista y eficiente.

Un balance de la situación actual de Chile nos indica que, si bien tenemos Fuerzas Armadas, carecemos de unidad interna, de conducción política adecuada y de recursos económicos esenciales.

Las presiones geopolíticas



Por otra parte, es necesario tener presente la situación geográfica de Chile. El dominio de las rutas de acceso —terrestres, marítimas y aéreas—, más importantes hacia el Pacífico Sur, dan a Chile una posición geopolítica de primera importancia, al iniciarse en nuestra época la era del Pacífico, sucesora de la del Atlántico y de la antigua era del Mediterráneo.

En el ámbito Indico-Pacífico viven hoy más de dos mil millones de personas, que se incorporan aceleradamente a la tecnología moderna y a niveles

de consumo cada vez más altos, dando origen al mayor intercambio de productos, de experiencias, de iniciativas y de culturas.

Por eso cada posición, cada ruta de acceso y cada enclave geopolítico que se proyecte hacia el Pacífico es motivo hoy de ambiciones, de tensiones y aún de conflictos.

Todas las naciones importante quieren estar presentes y tener acceso a los nuevos mercados. También este interés se evidencia en las naciones sudamericanas, que antes volcaron su expansión comercial hacia el Atlántico y que hoy extienden su interés hacia el Pacífico.

Preocupación preferente



Si a estos factores geohistóricos sumamos los problemas que se vienen arrastrando como consecuencia del afán revisionista o expansionista de algunos países vecinos, debemos convenir en la necesidad de preocuparnos, como asunto vital y preferente, de la seguridad nacional y de los factores que hoy la perturban.

El armamentismo inexplicable de algunos países vecinos, el debilitamiento de los tradicionales lazos de amistad que ligaban a Chile con otras naciones sudamericanas y el fracaso de nuestra participación en el mercado regional, como ha se-

ñalado aquí el Senador señor Prado, son antecedentes que también debemos tener en cuenta cuando analicemos con más detención, en futuras sesiones, la situación de nuestro país en este aspecto.

Pero sobre todo debemos tener ahora la voluntad de rectificar nuestros errores y detener la desintegración antes de que sea tarde.

Los sacrificios que ello nos signifique estarán bien empleados, si en definitiva salvamos los valores esenciales de la nacionalidad, que los generales y almirantes señalaron en su comunicación, patriota y oportuna, al Presidente de la República.

14 de junio

EL SEÑOR ALLENDE HA DEJADO DE SER PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL

DE CHILE



Todo juicio sobre el comportamiento del Gobierno debe partir de la premisa de que el sistema institucional chileno está basado en la buena fe, la rectitud moral y la equidad de quien detenta el poder.

En la elección presidencial pasada, el señor Allende alcanzó una de las dos primeras mayorías. Pero fue el Congreso quien lo eligió Presidente, y sólo después de que él se comprometió solemnemente a cumplir las garantías constitucionales que se le exigieron.

No obstante ese solemne compromiso, en lo que va transcurrido de su mandato el Gobierno incurrió en innumerables violaciones legales y en atropellos deliberados y reiterados a la Constitución, que son causa determinante de la crisis política, social y económica que vive el país y que no tiene parangón en nuestra historia.

La anarquía general en que se debate el país se manifiesta principalmente en:

La destrucción del Estado de Derecho y la quiebra inminente de la juridicidad, denunciadas por la Corte Suprema. Las interferencias del Gobierno dejan sin vigencia práctica al Poder Judicial y colocan en la indefensión a los ciudadanos no adictos al régimen.

La permanente invasión de las atribuciones del Congreso Nacional a través de la imposición por la vía administrativa de medidas que constitucionalmente son materia de ley.

El atropello de las libertades públicas y a los derechos de las personas: El intento de silenciar los medios de difusión que discrepan del Gobierno. Las detenciones arbitrarias, las violaciones del hogar y de la correspondencia. El atropello a la libertad de trabajo y abastecimiento de la población. Las restricciones abusivas para viajar dentro y fuera del territorio. El desconocimiento de la norma constitucional de igualdad ante la ley.

La destrucción de los valores culturales chilenos mediante la imposición de programas educacionales destinados a concientizar a la juventud en el marxismo.

La desintegración del patrimonio económico y de la capacidad productiva del país, que origina la escasez y el hambre que sufre la población.

La creciente dependencia del extranjero, demostrada en la actitud mendicante del Gobierno para conseguir alimentos, combustible y repuestos.

La subordinación del régimen de la U. P. a una nación expansionista, al depender el Partido Comunista de Chile, eje del Gobierno actual, del Comité Central del Partido Comunista Soviético.

La represión de los trabajadores y la estrategia para liquidar su organización y derechos sindicales.

La destrucción física y moral mediante difamaciones, persecuciones, torturas y asesinatos, de quienes se oponen a los propósitos del Gobierno marxista.

El dolo y el engaño sistemático; las mentiras y calumnias de la publicidad oficial, y las invenciones malévolas; los complots y atentados imaginarios para distraer la atención pública.

La inmoralidad oficializada: contrabandos al más alto nivel, mercado negro, corrupción en las empresas estatizadas, negociados con los estancieros, etc.

El debilitamiento de la Seguridad Nacional, denunciado reiteradamente y ratificado por el Cuerpo de Generales y Almirantes (R) de la defensa Nacional.

El abuso que el Gobierno de la Unidad Popular hace del deber de obediencia y disciplina de las FF. AA. y de Carabineros, al utilizarlas permanentemente con fines políticos partidistas que deterioran su imagen y respetabilidad.

El amparo del Gobierno a los grupos armados y brigadas terroristas organizadas para perpetrar asesinatos o atentados a la seguridad o derechos de las personas, y enfrentar eventualmente a las FF. AA.

Las situaciones descritas obedecen a un plan deliberado y sistemático para arrebatar al pueblo chileno sus derechos, y entregar a la minoría marxista la totalidad del poder. Culmina esta escalada antidemocrática con el atropello más flagrante a la Constitución, expresado en la ne-

gativa del señor Allende a promulgar la Reforma Constitucional según el texto aprobado por el Congreso, o a someterla al veredicto del pueblo mediante un plebiscito.

El Presidente de la República, si discrepaba de lo aprobado por el Congreso, pudo convocar al Plebiscito para que fuera el pueblo, único que tiene derecho a hacerlo, según el artículo 109 de la Constitución Política, quien dirimiera el conflicto. Habiendo renunciado a esta opción, sólo le correspondía, de acuerdo al citado artículo de la Constitución Política, promulgar el texto aprobado por el Congreso, no pudiendo modificarlo en manera alguna.

Al arrogarse un derecho del pueblo promulgando un texto que no es el aprobado por el Congreso, el Presidente de la República ha incurrido en sedición según lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política, que dice a la letra: "Ninguna persona o reunión de personas puede tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos ni hacer peticiones en su nombre. La infracción de este artículo es sedición".

Quienes aún crean que el mandato presidencial del señor Allende no está viciado por la ilegitimidad de su ejercicio, tienen ahora la prueba definitiva de que la validez de ese mandato ha terminado.

El señor Allende ha violado en forma deliberada y sistemática su promesa solemne de respetar y hacer cumplir la Constitución y las Leyes. Fue esa promesa solemne la que le permitió ser elegido Presidente de Chile por la mayoría del Congreso Nacional.

A la luz del derecho y la moral, nadie está obligado a respetar ni obedecer a un gobierno que deja de ser legítimo.

La grave agresión de que es víctima la nación chilena por la acción devastadora de un gobierno totalitario e inmoral, no pudo ser prevista por el Poder Constituyente al dictar las disposiciones de la Carta Fundamental.

Un estudio riguroso de los atropellos a que el Gobierno ha sometido sistemáticamente a los ciudadanos, así como a los demás Poderes Públicos e instituciones de la República, deberá llevar al Congreso Nacional a considerar la ilegitimidad de ejercicio en que, a nuestro juicio, ha incurrido el Gobierno de la Unidad Popular.

El Congreso Nacional salvará así su responsabilidad ante el pueblo y ante la historia, cumplirá con su deber, y no será cómplice en la destrucción de la República.

16 de junio



DECLARACIÓN DE DIRIGENTES DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 13 DE SEPTIEMBRE DE 1973

Bernardo Leighton; Ignacio Palma, ex Presidente del Senado; Renán Fuentealba, Senador, ex Delegado de Chile ante la ONU, Radomiro Tomic, ex Candidato a la Presidencia de la República y ex Embajador de Chile en Estados Unidos; Fernando Sanhueza, ex Presidente de la Cámara de Diputados; Sergio Saavedra, ex Intendente de Santiago; Claudio Huepe, Diputado; Andrés Aylwin, Diputado; Mariano Ruiz-Esquide, Diputado; Waldemar Carrasco, Diputado; Jorge Cash, Profesor y periodista; Jorge Donoso, Abogado; Belisario Velasco, Economista; Ignacio Balbontín, Sociólogo, y Florencio Ceballos, Abogado, firman la siguiente declaración política: Hoy, 13 de septiembre de 1973 los firmantes, dejando constancia de que ésta es la primera ocasión en que podemos reunirnos para concordar nuestros criterios y explicitar nuestra posición política, después de consumado el golpe militar de anteaer, venimos en declarar lo siguiente:

1.- Condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo Gobierno - por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido- fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la autoridad constitucional.

2- Señalamos que nuestra oposición a su Gobierno fue siempre planteada para preservar la continuidad del proceso de cambios que tuvo el honor de iniciar en nuestro país el Gobierno de la Democracia Cristiana y, al mismo tiempo, para impedir su desviación antidemocrática. Mantenemos en todas sus partes las críticas que en dicho contexto formulamos al Gobierno de la Unidad Popular y del Presidente Allende. Reiteramos, por eso mismo, que, en conformidad a la Democracia Cristiana, jamás tuvimos otra actitud parlamentaria o particular que no fuera la oposición dentro del cauce democrático destinado a obtener la rectificación de los errores cometidos por el Gobierno del Presidente Allende e impugnados por nosotros.

3.- La falta de rectificación, que en definitiva nos llevó a la tragedia, es de responsabilidad de todos, Gobierno y oposición, porque el deber de mantener una democracia no puede ser eludido por nadie. Pero, a nuestro juicio, hubo quienes tuvieron mayor responsabilidad. En primer lugar, el dogmatismo sectario de la Unidad Popular que no fue capaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo, adecuado a nuestra idiosincrasia. Especial condenación merece la irresponsabilidad de la ultraizquierda. En segundo lugar, la Derecha económica que, con fría determinación aprovechó los errores de la Unidad Popular para producir un clima de tensión, de ceguera y de pasión política que, unido a lo anterior, hizo imposible un consenso mínimo al descalificar a quienes lo buscábamos con objetividad y con cordura.

4.- Estos sectores extremos alinearon psicológicamente a la opinión pública e, incluso, a numerosos dirigentes políticos y militares, creando la sensación falsa de que no había otra salida para la crisis chilena que el enfrentamiento armado o el golpe militar. Reiteramos hoy, igual que siempre, nuestra convicción profunda de que, dentro de los cauces democráticos, habríamos podido evitar en Chile la implantación de un régimen totalitario, sin necesidad de pagar el costo de vidas y los excesos inevitables en las soluciones de fuerza 5.- La Junta Militar ha manifestado su intención de restituir el poder a la voluntad del pueblo y de respetar las libertades públicas. Esa intención la recogemos como positiva para la restauración

democrática y la paz social y esperamos que se cumpla sin demora al tenor de las declaraciones formuladas.

6- En cuanto a nosotros, consideramos que nuestra suprema responsabilidad en esta hora -la que asumimos por encima de toda otra consideración- reside en proseguir la lucha por los principios de la Democracia Cristiana y por la restauración de la democracia chilena, fuera de la cual aquéllos carecen de vigencia. Los hechos que hoy lamentamos señalan que sólo en libertad, sustentada por la mayoría del pueblo y no por minorías excluyentes, se puede aspirar a la transformación humanista y democrática de Chile que constituye nuestra meta y fortalece nuestra voluntad.

Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana.

Santiago, 8 de Noviembre de 1973

Muy estimado Presidente y amigo:

He creído de mi deber dirigirme a usted, y por su intermedio a la directiva de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, para que conozcan nuestro pensamiento frente a los hechos ocurridos en Chile y su repercusión exterior.

Tiene también por objeto señalar cómo una propaganda muy concertada y dirigida pretende ensombrecer el nombre de la Democracia Cristiana chilena y en especial el de algunos de sus personeros, sin que hayan faltado quienes le han dado acogida, ignorantes de la verdadera realidad.

La Democracia Cristiana nació en Chile justamente para defender la libertad, el derecho y la democracia. En cuarenta años de existencia este Partido nunca ha tenido una vacilación en la defensa de estos principios y en su combate especialmente contra todas las fuerzas fascistas que en la década del 30 al 40 gozaban de tanto prestigio y se extendían en nuestro hemisferio. Combatimos así a la Falange española, al rexismo belga, al fascismo italiano y el nazismo alemán.

Personalmente di testimonio de ello, al igual que todo nuestro Partido, en libros, artículos y acciones correspondientes.

Fue este Partido el que en 1957 contribuyó a la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia que existía en Chile y que colocaba fuera de la ley al Partido Comunista. Por último, llegado este Partido al Gobierno que tuve el honor de presidir, dirigió al país dentro del más pleno respeto a las normas democráticas. Ningún partido político sufrió, no digamos persecución, sino ni la más leve molestia, al igual que en cualquier democracia europea. Y fue nuestro gobierno el que, arrastrando en esos años muchos ataques, reanudó relaciones con Rusia y los demás países socialistas.

Los partidos que se han conducido de esa manera no pueden aceptar de nadie, ni de adversarios ni mucho menos de quienes se dicen amigos, la menor tacha a su limpia trayectoria democrática. Y digo esto, porque para asombro nuestro estamos recibiendo ahora lecciones de democracia de los Partidos Comunistas y aun de quienes en su país ocuparon en el pasado cargos de Ministros en gobiernos dictatoriales.

Esta campaña de desprestigio de la Democracia Cristiana chilena ha sido acompañada por una incesante propaganda nacida en los medios de izquierda marxista y acogida por insignificantes grupos democratacristianos, en el sentido de que la Democracia Cristiana chilena está dividida o a punto de hacerlo, calificando a unos de “derechistas” y a otros de “izquierdistas”. Si con ese criterio se juzgara a cualquiera de los PDC de Europa y América Latina, seguramente éstos aparecerían con mucho mayores señales de división que las que se pueden suponer en Chile, donde el Partido ha dado ejemplo de solidez y unidad en situaciones extremadamente difíciles. Que existan en algunos puntos diferencias de opinión es natural en partidos democráticos, pero eso no hiere su unidad fundamental. Esta maniobra de descalificación progresiva a unos o a otros, manejada por la prensa marxista o de extrema derecha, consideramos que constituye uno de los mayores peligros para el futuro de la Democracia Cristiana en cada país, si no existe un

mínimo de solidaridad y respeto entre los distintos partidos y no caen en la trampa de hacerse eco de tales maniobras.

¿Qué ocurrió en Chile?

Este país ha vivido más de 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse, entonces, cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre. Nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación - y lo decimos sin eufemismo alguno - corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país.

¿En qué basamos esta afirmación?

a) Este régimen fue siempre minoría y nunca quiso reconocerlo. Obtuvo en la elección presidencial el 36 por ciento de los votos. Subió al cincuenta por ciento a los cuatro meses de elegido, en las elecciones municipales, siguiendo una vieja tradición chilena en que el pueblo da su apoyo al gobierno recién elegido. En los comicios parlamentarios del 73 bajó al 43 por ciento, a pesar de haber ejercido una intervención no conocida en la historia de Chile y haber utilizado toda la maquinaria del Estado, enormes recursos financieros y presión sobre las personas y organizaciones, que llegó hasta una violencia desatada que causó varios muertos y numerosos heridos a bala. Por último, quedó comprobado con posterioridad un fraude de por lo menos 4 a 5 por ciento de los votos, pues los servicios públicos, entre otras cosas, falsificaron miles de carnés de identidad.

b) Pero no sólo fueron minoría en el Parlamento. Fueron minoría en los Municipios; lo fueron en las organizaciones vecinales, profesionales, campesinas y progresivamente estaban llegando a ser minoría en los principales sindicatos industriales y mineros, como el caso del Acero, Petróleo, Cobre, etc. Igualmente, salvo en un solo caso, fueron derrotados en todas las organizaciones universitarias en que votaban los académicos y los estudiantes y para qué decir en las organizaciones específicamente estudiantiles.

En vez de reconocer este hecho y buscar el consenso, trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo-leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia. Cada vez que perdían una elección en las organizaciones sindicales y campesinas o estudiantiles desconocían el hecho y creaban una organización paralela afecta al gobierno, la cual recibía la protección oficial mientras eran perseguidos los organismos que respondían a una elección legítima. Así se trató a los estudiantes, a la clase obrera y a los campesinos.

En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron, asimismo, transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación, ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición. Frente a estos hechos, naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber - y lo cumplió - denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos. Eso fue lo que el país resistió. Fueron éstas las razones por las que la Corte Suprema de Justicia, por la unanimidad de sus miembros, denunció ante el país el hecho de que por primera vez en la historia de Chile los Tribunales no eran respetados, se atropellaban las leyes y sus sentencias no se cumplían. La Contraloría General de la República, órgano que en Chile adquiere un verdadero carácter constitucional y que no sólo tiene funciones contables, sino que califica la legalidad de los decretos del Ejecutivo, rechazó innumerables resoluciones del gobierno por estimarlas ilegales.

El Parlamento continuamente reclamó durante tres años la violación de las leyes y el atropello al Derecho, sin ser oído. Esto culminó cuando, aprobadas dos reformas constitucionales, el Presidente de la República se negó a promulgarlas. Buscando un pretexto para no hacerlo,

recurrió primero al Tribunal Constitucional, el cual dio la razón al Congreso. Sin embargo, eso fue inútil. Pretendió después promulgar estas reformas de manera trunca, o sea, parte del texto, lo que rechazó la Contraloría General de la República. Por último, se negó lisa y llanamente a respetar la decisión del Congreso Nacional. Esto llevó a la Cámara de Diputados a aprobar un acuerdo destinado a señalar al país que se estaban atropellando abiertamente la Constitución y las leyes y mostrar una lista abrumadora de casos concretos de cómo así ocurría.

Por haber ejercido estos derechos, la Democracia Cristiana es presentada por la propaganda comunista como fascista o antidemocrática. Esta peregrina teoría parece haber encontrado acogida en algunos.

Pero cabe preguntar: ¿Qué ocurriría en cualquier país europeo en que la Corte Suprema de Justicia declara que el gobierno ha atropellado la ley y no ha acatado las sentencias judiciales?. ¿Qué ocurriría si el Congreso aprobase reformas constitucionales y el Ejecutivo se negara a promulgarlas y aun a publicarlas?.

Lo curioso es que el Partido Comunista y el Partido Socialista durante todos los gobiernos anteriores en que estuvieron en la oposición la ejercieron en forma extrema. Cuando el gobierno de la DC triunfó con el 57% de los votos del electorado nacional (no con el 36%), el Partido Socialista oficialmente y el señor Allende, líder de ese Partido, declararon que no reconocían el triunfo de la Democracia Cristiana. Se negaron a concurrir al Congreso Pleno, que en Chile es el trámite correspondiente para la proclamación del Presidente de la República, y anunciaron textualmente que le negarían al gobierno de la DC “la sal y el agua”. El Partido Comunista estuvo en una oposición constante y total.

Para hacerlo recurrieron a la injuria, a la violencia, y el Partido Socialista una y otra vez manifestó que no respetaba el orden legal y democrático, que no era sino un orden burgués. Cada vez que había una huelga o un conflicto, el señor Allende y los partidos Socialista y Comunista lo promovían o acentuaban para llevar al extremo la situación. En su implacable crítica al gobierno de la Democracia Cristiana, todo lo encontraron mal, y cuando la inflación llegaba al 20 por ciento, llamaban al país a la huelga general para derrocarlo.

¿Qué distinta la actitud del Partido Demócrata Cristiano, que concurrió con sus votos a elegir Presidente al señor Allende cuando obtuvo sólo un 36 por ciento de la votación nacional y que no pidió en compensación ni un solo cargo o influencia sino un Estatuto de Garantías Constitucionales que asegurara plenamente la democracia en Chile!. Pues bien, por boca de don Renán Fuentealba primero, y de don Patricio Aylwin después, como presidentes del Partido Demócrata Cristiano, se denunció que este Estatuto, que el Presidente juró respetar, fue constantemente atropellado.

¿Cuál era el fondo del problema?

El fondo del problema es que este gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo - que fue el slogan de su propaganda nacional y mundial - estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación, de tal manera que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria.

Así lo señalaron no sólo la Corte Suprema, la Contraloría y el Parlamento. Se agregó la declaración del Colegio de Abogados, que en extenso documento indicó al país que el sistema legal había sido reiterada y manifiestamente atropellado. Por otro lado, el Partido Radical de Izquierda, que apoyó al señor Allende en la elección y que formó parte de su gobierno, se retiró de él denunciando que había llegado a la certeza de que se iba al quiebre de la democracia por la acción del gobierno que integraban. Hombres que habían militado siempre en la izquierda chilena, que dirigían ese partido, señalaron con extrema dureza que el país estaba al borde del caos y que la voluntad del Ejecutivo era instaurar la dictadura totalitaria.

A esto se agregó el Colegio Médico, que tradicionalmente apoyó al señor Allende, pues éste fue Presidente de él; el Colegio de Ingenieros y todos los demás colegios profesionales. Fue,

asimismo evidente un cambio en diversos sindicatos, que se manifestó en huelgas, de las cuales la más prolongada fue la de los obreros del cobre. Todo, pues, conducía a una situación crítica.

Los partidos de gobierno ya no ocultaban sus intenciones. El Secretario General del Partido Socialista llamaba abiertamente a los soldados y marineros a desobedecer a sus oficiales y los incitaba a la rebelión. En iguales términos se expresaban otros partidos de gobierno en forma de tal manera insensata que hasta el propio Partido Comunista manifestó su desacuerdo con ellos y en especial con el Partido Socialista, “que rechazaba todo acuerdo con la Democracia Cristiana y se unía cada vez más al Movimiento de Izquierda Revolucionaria en su tesis de la revolución violenta e inmediata”. Así lo han declarado numerosos dirigentes comunistas.

Reveladora es la entrevista publicada en La Stampa, del 26 de octubre de 1973, en la cual se afirma por un alto dirigente que el Partido Comunista buscaba una solución política, pero que en los últimos días se encontraron con el discurso del Secretario General del Partido Socialista contra las Fuerzas Armadas y “con su obstinado maximalismo al igual que el de Enríquez, jefe del MIR, y por eso nos hemos encontrado sin preparación ante el golpe”. La posición del Partido Comunista, según la misma entrevista, que coincide con innumerables otras declaraciones y documentos, no difería en cuanto a los objetivos, sino sólo ante la táctica a seguir. “Las armas que teníamos - agrega -, de las cuales los generales han descubierto una mínima parte, desgraciadamente eran pocos los que las sabían usar, porque no había habido tiempo suficiente para adiestrar a la masa popular”.

O sea, vuelve siempre lo mismo: Ganar tiempo para obtener el poder total. El Presidente de la República declaraba respetar la ley, la Constitución y la democracia, pero todas sus declaraciones eran de inmediato contradichas por los hechos, ya que todos los compromisos fueron violados y todas las afirmaciones desmentidas posteriormente por sus actos.

Innumerables documentos de sus asesores y de los dirigentes de los Partidos Políticos que conformaban la Unidad Popular han demostrado que todo su objetivo era ganar tiempo para consolidarse en el poder y para afianzar su posición totalitaria, documentos que culminaron con la carta publicada del señor Fidel Castro, en la cual le recomendaba al señor Allende tratar con la Democracia Cristiana con el solo objetivo de ganar tiempo. El Partido Demócrata Cristiano, bajo la presidencia del señor Renán Fuentealba, que abarcó parte del año 71, el 72 y hasta después de las elecciones parlamentarias del 73, constantemente denunció este dualismo. Igual ocurrió con la actual directiva. Acompaño a este respecto algunos documentos. A este cuadro político se agregan dos hechos que han sido determinantes en el proceso chileno.

El primero, instaurado el gobierno, convergieron hacia Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda revolucionaria de América. Llegaron elementos tupamaros del Uruguay, miembros de guerrillas o movimientos extremos del Brasil, de Bolivia, de Venezuela y de todos los países, como hay numerosos casos, por delitos graves inexcusables. La Embajada de Cuba se transformó en un verdadero ministerio, con un personal tan numeroso que era superior, la sola Embajada de Cuba en Chile, a todo el personal que tenía nuestro país en el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 1970. Esto da la medida. Además de ellos, nos vimos invadidos por norcoreanos y otros representantes del mundo socialista.

Hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la Administración, pero dedicaban su tiempo muchos de ellos al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio nacional en que no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas.

El segundo, fue la acelerada importación de armas. El Partido Demócrata Cristiano denunció continuamente este hecho. Hay más de cincuenta documentos publicados por el Partido y dados a conocer en el Parlamento respecto a la aseveración. Llevado de su preocupación el PDC presentó un proyecto de ley que fue aprobado y que sirvió de base para iniciar acciones que revelaron la existencia de fuertes contingentes de armas importadas.

Después del pronunciamiento del 11 de septiembre estas denuncias de la Democracia Cristiana

han quedado plenamente confirmadas. Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40 por ciento) permitirían dotar a más de 15 regimientos y eso que una abrumadora proporción aún no ha sido descubierta. Estas armas son todas de procedencia checa o rusa, armas que jamás ha tenido el Ejército chileno. Por lo demás nadie ignora o descarta en Chile la existencia de estas armas.

Se trata de armas de todo tipo, no sólo automáticas, sino que pesadas, ametralladoras, bombas de alto poder explosivo, morteros, cañones antitanques de avanzados modelos y todo un aparato logístico de comunicaciones, de telefonía, clínicas médicas, etc., para poder concretar esta acción. Se había establecido así un verdadero ejército paralelo. Nos preguntamos, una vez más, y preguntamos a los dirigentes de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: ¿Qué democracia puede resistir esta situación? ¿Acaso la Democracia Cristiana, sin armas y en consecuencia inerte frente a esta embestida, debía quedar silenciosa? ¿Merece el calificativo de fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta realidad? ¿Pretenden acaso que lo democrático era permanecer mudos, amparando la preparación desembozada de una dictadura impuesta por la fuerza de las armas?.

Es efectivo que como consecuencia de este extremismo armado de la izquierda y sin duda amparado por el gobierno, ya que se ha probado que muchos de los bultos que contenían estas armas llegaban consignados a la propia Presidencia de la República, nació inevitablemente un extremismo de derecha también armado. No nos referimos al Partido Nacional, sino a grupos extremistas de derecha, que la Democracia Cristiana nunca dejó de condenar con la misma claridad que a los de extrema izquierda. El otro elemento digno de considerarse fue la conducción económica. El mundo conoce cuál es el resultado de la gestión económica de la Unidad Popular.

Recibieron un país floreciente, en pleno desarrollo. El cobre, principal producto de exportación, había sido nacionalizado en un 51 por ciento y se había hecho una inversión ya terminada que duplicaba su capacidad de producción. Impulso decisivo existía en la agricultura, en la industria y en otras actividades mineras. El país estaba absolutamente al día en sus compromisos internacionales y había podido en los dos últimos años de la Administración anterior prescindir de créditos externos, salvo algunos destinados a la instalación de nuevas industrias básicas, celulosa, petroquímica, etc., y se había acumulado una reserva que por primera vez el país tenía ascendente a 600 millones de dólares. El único hecho negativo era que la inflación había llegado al 30 por ciento en el último año. En estas condiciones la Unidad Popular aseguró que terminaría con la inflación; que nunca más pedirían créditos externos; que aumentaría la producción, independizarían económicamente al país y mejorarían el nivel de vida de la clase trabajadora.

¿Cuál fue el resultado de su gestión?

El mundo la conoce. El total de las deudas líquidas contraídas por la DC durante sus 6 años de gobierno no llegaron a 400 millones de dólares, después de pagar todos sus compromisos internacionales y tener su crédito absolutamente limpio.

En menos de tres años el gobierno de la Unidad Popular que afirmó que no endeudaría al país según su programa, elevó esas deudas en cerca de mil millones de dólares, destinados no a inversión, sino exclusivamente a comprar alimentos para paliar su fracaso en la agricultura. Además de eso dejaron de pagar todas las deudas externas y en dos años se consumieron todas las reservas que les había legado el régimen anterior. Por eso, en vez de independencia, llegaron a la mayor dependencia conocida en Chile.

La inflación en cifras oficiales el gobierno llegó a 323 por ciento en los últimos doce meses, pero los Institutos Universitarios, teniendo consideración que prácticamente el país vivía del mercado negro, estimaban que ésta superaba al 600 por ciento. El dólar en el mercado libre se transaba al término del gobierno de la Democracia Cristiana a 20 escudos por dólar. En el mes de agosto recién pasado llegaba a los 2.500 escudos por dólar, o sea, una devaluación de más o menos el 12.000 por ciento.

Todos los índices de productividad habían bajado: Industrialmente en más de un 7 por ciento; en la agricultura cerca del 23 por ciento y en la minería aproximadamente en un 30 por ciento. Rubros tan fundamentales como el trigo bajó su producción de 14 millones de quintales término medio en los seis años anteriores, a menos de 8 millones. Muchos institutos de investigación afirman que a menos de 6 millones. La quiebra era total. Ahora cabe preguntar: ¿Era la Democracia Cristiana fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta política económica que llevó al país a la inflación desatada, al envilecimiento de la moneda, a la paralización productiva, al mercado negro, a la escasez y al hambre?.

Los que con tanta ligereza hablan sobre Chile deberían venir y recorrer las poblaciones periféricas, los campos y las ciudades y preguntar cómo era necesario hasta diez horas de colas para conseguir 1/4 de litro de aceite, cuando se conseguía, o un kilo de pan, cuando se conseguía, o medio kilo de azúcar, cuando se conseguía.

¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, la escasez y el mercado negro? ¿Es fascismo y golpismo denunciarlo? ¿Acaso el deber de un partido político es silenciar estos hechos? Ellos eran democráticos cuando atacaban sin tregua un gobierno DC que jamás cometió errores. En cambio la Democracia Cristiana, ¿era fascista por el sólo hecho de defender el derecho a vivir dentro de nuestra Patria y antidemocrática porque no se hacía cómplice del descalabro, de la corrupción, de la inmoralidad y del desastre comprobado por quien quisiera venir al país y constatar lo que sucedía?.

Sin embargo con la misma falsedad con que en el exterior se decía que el ensayo político era una vía legal hacia el socialismo, se daban pretextos para justificar este fracaso, que repetían algunos diarios de renombre universal. Estos fueron los argumentos principales que se esgrimieron para justificar el fracaso.

El primero, que las compañías norteamericanas expulsadas del país estaban dificultando las ventas del cobre. Efectivamente una compañía cometió la torpeza de iniciar un juicio de embargo respecto a una partida de cobre, que la Democracia Cristiana por supuesto condenó. Pero es necesario ver la realidad. El embargo afectó una partida de cobre cuyo valor era de dos millones de dólares en una venta anual de 600 millones de dólares o más. Por otra parte, el embargo no se llevó a efecto porque los Tribunales franceses no acogieron la demanda de la compañía. ¿Puede decirse que ésta es la razón para explicar el fracaso?. La segunda es el bloqueo económico, cuyas características no se precisaron y que sólo podría traducirse en imposibilidad de vender productos, lo que nunca ocurrió o la imposibilidad de obtener créditos, lo que tampoco ocurrió, pues con cifras dadas por el propio gobierno anterior ante el Club de París, el Fondo Monetario y otros organismos se prueba que el gobierno de la Unidad Popular dispuso de más créditos y endeudó al país más que ningún otro en la historia de Chile en tan breve plazo.

El otro argumento es que éste era el costo de la revolución y del avance social. Esto habría sido verdadero si hubieran recibido un país estagnado. No es así. Recibieron un país en pleno proceso de transformación social y en plena marcha las reformas tributarias, educacional, agraria, la nacionalización de las riquezas básicas, al igual que activos planes de salud, construcción de escuelas y viviendas.

La Unidad Popular, con el voto unánime del Congreso, nacionalizó el 49 por ciento del cobre, ya que el 51 había sido nacionalizado en el gobierno de la Democracia Cristiana. Inició un acelerado proceso de estatización de industrias. La Democracia Cristiana no estuvo en contra de este proceso, sólo exigió que se hiciera dentro de la ley, fijando los límites del área social y privada. Nada de eso se obtuvo, pues se siguió el proceso saltándose la ley y muchas veces con atropellos, asaltos y violencia.

Pero la más grave fue el tremendo fracaso del área estatizada. Se dijo que el gobierno financiaría el desarrollo económico con las utilidades de las empresas cuyo control tomaría el Estado. El año 1973 estas empresas perdieron más de 150 mil millones de escudos. Si se considera que el presupuesto nacional era una cifra equivalente, se medirá la magnitud del fracaso. Es también efectivo que aceleraron al extremo la reforma agraria iniciada por la

Democracia Cristiana, pero quisieron convertir toda la agricultura en haciendas estatales colectivas, lo que fue resistido por el campesinado. Se eliminó a los técnicos, se desorganizó toda la infraestructura, y en vez de respetar la ley, se asaltaron las propiedades y las ocuparon con gente que muchas veces no eran campesinos. Estas fueron, entre otras, las causas del fracaso agrícola. Ostensiblemente disminuyó la construcción de viviendas y de escuelas. Basta decir que en tres años no se construyeron ni 300 escuelas, mientras el gobierno de la DC construyó 3.600. Estos son hechos. Un último aspecto que creemos necesario destacar, ya que no podemos referirnos a todo, lo constituye el clima de odio y violencia que reinaba en el país. Toda crítica, toda observación, era contestada con las injurias más violentas para quienes tenían la audacia de señalar los errores. El Partido Socialista y el Partido Comunista crearon organizaciones armadas. Los Socialistas la llamaron “Elmo Catalán” y los Comunistas constituyeron la tristemente célebre brigada “Ramona Parra”. Se constituyeron, asimismo, los llamados “cordones industriales”, que rodeaban las ciudades en forma estratégica; y como consecuencia de la escasez, se organizó el racionamiento sobre la base de organismos políticos que empadronaron a los habitantes para ejercer el control sobre la vida de la población.

Como consecuencia de todo esto murieron cerca de cien personas y hubo innumerables heridos. Así murió el ex Vicepresidente de la República y uno de los fundadores del PDC, don Edmundo Pérez Zujovic, vilmente asesinado al salir de su casa por los miembros de una organización extremista. Los tres asesinos habían sido detenidos al final del gobierno de la Democracia Cristiana por haber perpetrado asaltos a mano armada y condenados por los Tribunales de Justicia a varios años de prisión.

El primer acto del gobierno de la Unidad Popular fue dejar en libertad a estos detenidos por actos ilegales y entre ellos los tres que causaron la muerte de ese dirigente democratacristiano. Al indultarlos, el Presidente Allende justificó su acto llamándolos “jóvenes idealistas”.

También murieron víctimas de esta violencia varios dirigentes juveniles de la DC y quedaron centenares de heridos.

Cuando los obreros del cobre en huelga buscaron refugio en el local central del Partido fueron atacados y hubo que instalar una posta de auxilios que en el día atendió, según información oficial del PDC, a más de 700 personas con heridas de toda especie, entre ellas 120 de carácter grave. Ese día el presidente Aylwin y otros dirigentes, entre ellos yo mismo, estábamos en el local del Partido y pudimos ser testigos de lo que ocurría.

Estas son las razones por las cuales el Partido Demócrata Cristiano estuvo en la oposición, oposición que progresivamente se hizo más dura por efecto de los abusos cada vez más graves que se cometían.

La posición del PDC en esta materia es intachable. Pasando por encima de su interés político inmediato nunca rehuyó buscar soluciones para el país. Esto es tan claro que incluso se criticó acerbamente al partido por aceptar el diálogo.

Cada vez que el Presidente de la República deseó conversar con la directiva, a pesar de las reiteradas veces que ésta fue engañada, no se negó a hacerlo para que no se quebrara el régimen democrático. De eso hay constancia en las declaraciones de los presidentes del Partido, señores Renán Fuentealba y Patricio Aylwin.

Cuando el conjunto de los obispos chilenos hizo un llamado para salvar la paz y evitar el conflicto y pidió un diálogo entre los hombres de buena voluntad, el Presidente del PDC aceptó hacerlo y planteó públicamente algunas bases para ello, que en último término significaban como condición básica volver al respeto de la Constitución y la ley. Todo esto que afirmo está en documentos públicos aparecidos en la prensa y difundidos por la radio y la TV. El Presidente de la República aceptó en principio nuestro planteamiento, para después rechazarlo. A fines de agosto, a pesar de que estas conversaciones terminaron por la imposibilidad total de que el Gobierno aceptara los planteamientos del Partido – que eran extremadamente moderados, vistas las circunstancias - nuevamente hubo una reunión en la cual el Presidente de la República, como lo ha dejado establecido el señor Aylwin, no presentó una sola base de entendimiento,

afirmación nunca rebatida.

La directiva del Partido llegó a la convicción de que exclusivamente se estaba ganando tiempo para preparar el control total del poder por parte de la Unidad Popular y acelerar su aparato paramilitar y el reparto de armas.

Nadie puede, pues, decir que la Democracia Cristiana no agotó los procedimientos para llegar a un acuerdo. Jamás se le hizo una proposición seria. Nunca el Presidente ofreció una fórmula de gobierno. Al revés, señaló que sería imposible el ingreso de la DC al Gabinete por la oposición socialista y de los partidos integrantes de la Unidad Popular.

Las Fuerzas Armadas, llamadas por la propia UP, aceptaron por tres veces en estos años integrar gabinetes ministeriales. Los partidos de la Unidad Popular, después de hacer profesión durante 40 años de antagonismo hacia las instituciones armadas, fueron precisamente los que trataron de mezclarlas en política, a pesar de su reiterada voluntad de no aceptar. Su presencia no logró modificar las líneas de acción gubernativa para evitar la catástrofe que se advertía venir.

Pocos días antes del 11 de septiembre, advirtiendo la directiva de la DC la gravedad de la situación convocó a los jefes provinciales del Partido de todo el país, quienes por unanimidad recomendaron como supremo arbitrio que los senadores y diputados de la DC presentaran las renuncias a sus cargos sobre la base de que el gobierno llamara a un plebiscito y se sometiera a sus consecuencias para buscar así una salida democrática al poder. Esto fue aceptado por la directiva y los parlamentarios, que hicieron pública su decisión de renunciar. La proposición de un plebiscito fue siempre rechazada, pues si obtuvieron el 43 por ciento en marzo del 73, después la situación se degradó con gran rapidez, en especial porque se hizo ya perceptible el caos económico y político.

Yo pregunto: ¿Puede un Partido hacer mayor esfuerzo y un mayor sacrificio, siendo mayoritario en ambas ramas del Congreso en una elección reciente en que tuvo que soportar el embate y la violencia del gobierno, que ofrecer pública y responsablemente la renuncia de sus parlamentarios con el fin de buscar una salida democrática para el país?. Esta es la realidad. Por eso la Democracia Cristiana chilena puede decir ante el mundo que una vez más dio un ejemplo de honradez democrática y de lealtad con sus principios. Un análisis objetivo de los hechos revela que la razón fundamental de que esta vieja democracia haya sufrido este embate fue el gobierno de la Unidad Popular, porque llevó al país a una situación que ninguno puede resistir y aún es admirable la solidez de la democracia chilena que resistió tanto. Surge de todo esto una reflexión básica. ¿Por qué lo ocurrido en Chile ha producido un impacto tan desproporcionado a la importancia del país, su población, ubicación y fuerza? ¿Por qué la reacción de la Unión Soviética ha sido de tal manera violenta y extremada? ¿Por qué el comunismo mundial ha lanzado esta campaña para juzgar lo ocurrido en Chile y para atacar a la Democracia Cristiana?. La razón es muy clara. Su caída ha significado un golpe grave para el comunismo en el mundo. La combinación de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms. de costa en el Pacífico y con su influencia intelectual y política en América Latina era un paso decisivo en el control de este hemisferio. Por eso su reacción ha sido tan violenta y desproporcionada. Este país les servía de base de operación para todo el continente. Pero no es sólo esto. Esta gigantesca campaña publicitaria tiende a esconder un hecho básico: El fracaso de una política que habían presentado como modelo en el mundo. ¿Cómo explicar que esta experiencia que mostraban como camino a otros partidos democráticos y al socialismo europeo haya conducido a un país organizado y libre a tan terrible catástrofe económica y política, haya producido tal desesperación en las Fuerzas Armadas y en el pueblo chileno - pues éstas jamás podrían haber actuado sin la aquiescencia de la mayoría - hayan quebrado una tradición tan larga y tan honrosa que constituía nuestro orgullo?. Toneladas de propaganda no borrarán un hecho: Llevaron a un país de ejemplar vida democrática al fracaso económico y al derrumbe de sus instituciones. Su esquema doctrinario y práctico era erróneo y su conducción desastrosa. Tres días antes del 11 de septiembre, el Presidente de la República dijo al país: “Nos queda harina para tres días”. Se acababa hasta el pan. No había sucedido jamás. Eso es lo que no se quiere analizar. Mejor dicho, se quiere ocultar. Los socialistas europeos, democráticos y pluralistas, se sienten

obligados a respaldar un partido que proclamaba su desprecio a la legalidad y como objetivo la revolución armada y violenta. Si no se quieren ver los hechos ni los documentos, al menos podrían leer con atención las críticas que formulara a este partido por su extremismo el propio Partido Comunista, que varias veces lo llamó a la cordura. El otro hecho que la Democracia Cristiana debe analizar es el problema de las comunicaciones. No hay ninguna duda de que el caso chileno es un buen ejemplo de cómo un intenso aparataje de propaganda es capaz de presentar las mayores falsedades y convertirlas en realidad. Ya eso venía ocurriendo desde el comienzo del régimen, que como otros similares, no se limitaba en cuanto a gastos de propaganda.

Pero lo ocurrido después del 11 de septiembre es algo inverosímil para los chilenos. Fueron miles los que escucharon decir a la Radio de Moscú que habían muerto 700 mil personas, en dos días. Otros hablaban de 30.000 y que corrían ríos de sangre en Santiago. Para nosotros una sola vida humana no tiene precio. No decimos esto por disminuir la tragedia a que el país fue llevado, pero según nuestras informaciones, los muertos no llegarían a dos mil, lo que es bien diferente a tan burdas mentiras.

Entre las miles de falsedades que se propalaron: Murieron 35 parlamentarios. Falso. Ninguno. Fue asesinado Neruda. Falso y ridículo. Todos los órganos de publicidad le rindieron homenaje como a nadie en muchos años y en el edificio del Congreso Nacional la bandera se izó a media hasta en señal de duelo.

Se destruyó el Hospital Barros Luco, el mayor de Chile. No hay un solo hospital destruido ni dañado en la más mínima parte. En el Hospital Barros Luco no hay ni un vidrio quebrado .A qué seguir. Son cientos de ejemplos.

No ha faltado un programa de televisión en Europa que presentó como señales de bombardeo vistas del anterior terremoto.

Pedimos una sola cosa: Vengan a ver lo que decimos. Tenemos derecho a pedirlo a nuestros amigos. Así lo hizo el señor Bruno Heck, dirigente de la DCU, quien pudo comprobar la verdad.

Que vengan a ver si hay alguna casa bombardeada en alguna población. En todo Chile sólo dos, por desgracia: La Moneda y la casa residencial de los Presidentes, adquirida en el gobierno de la Unidad Popular.

Que vengan a ver si hay una industria o centro minero donde haya caído una sola bomba. Nosotros no somos parte del actual gobierno. No defenderemos los errores que se cometan, inevitables algunos, en una situación tan terriblemente difícil.

Pero tampoco podemos aceptar que la mentira se transforme en un sistema, mientras se ocultan las causas de una situación para encubrir la responsabilidad de quienes arruinaron y destruyeron la democracia chilena.

¿Cómo se explica que quienes invadieron Hungría y Checoslovaquia, que ahora mismo silencian o procesan a científicos, poetas y escritores, que no admiten ninguna crítica, ni la sombra de una libertad de información, pretendan dar lección de democracia a Chile y a este Partido?. Además de escandaloso, es ridículo. Alaban y mantienen relaciones con Cuba, con miles de muertos, y después de 12 años, aún con miles de presos políticos. ¡ No son ellos los que pueden enseñarnos a los demócratacristianos y a Chile lo que es la democracia !.

Y lo que es aún peor. Sectores, es cierto minoritarios, en la propia Democracia Cristiana o en el mundo democrático, se dejan influenciar por esta propaganda o bien le hacen eco para ganar posiciones políticas y recibir el título de “izquierdistas”. Pobre destino el de esos grupos: Serán utilizados, primero, o servirán de puente para debilitar a nuestros partidos.

La posición popular, de avanzada y de justicia que sustenta la Democracia Cristiana es tan sólida que no puede admitir este verdadero “chantaje” político. Y nadie puede darnos lecciones de amor a la libertad y la democracia. Somos realmente pluralistas y estamos dispuestos a concertar acciones con otras fuerzas políticas, pero no podemos hacerlo bajo un signo de permanente debilidad o sometimiento.

Cada partido en esto es soberano. Somos los primeros en respetar sus decisiones y comprender que es imposible juzgar desde fuera los condicionamientos de cada situación. Creemos, sí, que para poder formular una opinión, lo primero que debe existir es respeto y solidaridad y la confianza necesaria en el testimonio de quienes han estado vinculados durante una vida por comunes ideales y la evidencia de haberlos servido con inquebrantable lealtad.

En esto sin duda el comunismo mundial nos da una permanente lección. Señor Presidente, éste es a nuestro juicio el proceso de lo ocurrido en Chile. Naturalmente surge ahora la gran interrogante de cuál es el porvenir. A este respecto, es la directiva oficial del partido la que dará una opinión autorizada.

Sin embargo, no puedo dejar de dar la mía propia, que he confrontado con un gran número de demócratacristianos. A mi entender, Chile afronta un período en extremo difícil y duro. Yo diría tal vez el más difícil de la historia. El desastre económico no se conocía en su verdadera magnitud. Reorganizar desde sus bases todo el aparato productivo, hacer renacer la agricultura, renovar la maquinaria, detener la hiperinflación, etc., será una tarea que exigirá enormes sacrificios.

Por otra parte, más de la mitad de las armas no se encuentran aún, hecho cuya trascendencia es fácil de apreciar.

Desde luego nuestro partido no integra el gobierno, como ya lo he dicho. El gobierno está formado enteramente por las Fuerzas Armadas y era difícil, por no decir imposible, que así no fuera.

Todos los chilenos, o al menos la inmensa mayoría, estamos vitalmente interesados en que se restablezca rápidamente la democracia en Chile. Y para esto es necesario que el país salga del caos y, en consecuencia, que el gobierno actual tenga éxito. Las Fuerzas Armadas - estamos convencidos - no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida.

La Democracia Cristiana está haciendo, a mi juicio, lo que está en su mano en esta perspectiva, sin renunciar a ninguno de sus valores y principios, siendo en este instante sus objetivos más fundamentales:

- Pleno respecto a los derechos humanos - Pleno respeto a las legítimas conquistas de los trabajadores y campesinos. - Vuelta a la plenitud democrática.

Sabemos que esto no es fácil. La situación entera no es fácil. Y por eso mismo debemos actuar con la mayor responsabilidad.

Señor Presidente: Excúseme usted lo extenso de esta comunicación, pero ello se justifica por la importancia del problema que trata y por la forma como se ha distorsionado la verdad.

Por desgracia, los innumerables documentos y actuaciones de la Democracia Cristiana durante estos tres años no fueron dados a conocer en Europa. Esto justifica la extensión de mi carta.

Quiero terminar diciéndole en esta ocasión que recuerdo dos hechos de mi viaje a Europa de 1971. En esa oportunidad un gobernante europeo me dijo que nuestro país estaba perdido y agregé textualmente: "Cuando el comunismo agarra, nunca suelta". Poco después un alto representante de la Democracia Cristiana en el gobierno de su país manifestó que el caso chileno era un caso perdido.

A ambos les dije que estaban equivocados, porque si bien Chile quería un avanzado proceso de transformación social, jamás aceptaría un régimen totalitario. Los dos me miraron con esa benevolencia con la que se trata a un visitante ingenuo.

Con la misma seguridad con que afirmé en ese entonces que Chile saldría adelante, puedo

afirmar hoy que, a pesar de lo duro y doloroso que pueda ser el esfuerzo, nuestro país se levantará y volverá a dar una lección de democracia y de libertad. Y en esa tarea está empeñado este país, y la Democracia Cristiana una vez más desempeñará un papel conforme a lo que ha sido su historia y es su porvenir. Saluda con la mayor atención al señor Presidente.

Eduardo Frei Montalva